

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-27527-2014
CARATULADO : SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
CESANTIA DE CHILE II S.A. / EMPRESAS LA POLAR S.A.

Santiago, veinticinco de mayo dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

A fojas 502 y siguientes, se encuentra demanda en juicio ordinario interpuesta por **PATRICIO CALVO EBENSPERGER**, bachiller en ciencias económicas, en representación de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A.**, en adelante e indistintamente **AFC Chile**, Sociedad Anónima cerrada del giro de su denominación, ambos domiciliados en esta ciudad, calle Huérfanos N° 670, oficina 1401, señala que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 148 del Decreto Ley N° 3500, 39 de la Ley N° 19.728, Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, Título XXXV del Libro IV del Código Civil, vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra de Empresas **LA POLAR S.A.**, del giro retail, representada por don **GINO MANRÍQUEZ OSSANDÓN**, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 520, comuna de Renca, Región Metropolitana, solicitando sea acogida en todas sus partes, con expresa condena en costas, en razón de los antecedentes de hecho y derecho que expondrá.

A fojas 566, se notificó la demanda de autos.

A fojas 601 y siguientes, se encuentra contestación de la demanda, señalan que con lo exponen deben ser rechazada la demanda interpuesta en su contra, con expresa condenación en costas.

A fojas 648 y siguientes, se encuentra réplica.

A fojas 680 y siguientes, se encuentra dúplica.

A fojas 711, se fijaron los puntos de prueba, rindiéndose la documental, testimonial, confesional y pericial que consta de autos.

Se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

A) CUANTO A LA TACHAS DE TESTIGOS

PRIMERO: Que, a fojas 744 y siguientes, comparece don Horacio Arredondo Villalba, quien en preguntas para tacha señala que en su calidad de



contador elaboro un informe para la Administradora de Fondos de Cesantía, y por el cual recibió remuneración la parte demandada lo tacha por la causal 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, por lo que a su juicio el testigo carece de la imparcialidad necesaria para declarar en el juicio, solicita se acoja la tacha con costas.

SEGUNDO: Que, la parte demandante evacuando el traslado conferido solicita el rechazo con costas. Porque el testigo no ha declarado que tenga un interés en los resultados del juicio, ya que la doctrina y la jurisprudencia ha sido clara al señalar, que de haber un interés este debe ser pecuniario o patrimonial, directo o indirecto, todo ello en relación al resultado del juicio. Ya que el informe elaborado no implica en caso alguno que su elaboración o su testimonio este supeditado ha dicho pago, sino que a una retribución legítima por su trabajo, por lo que solicita su rechazo con costas.

TERCERO: Que, a fojas 1022 y siguientes comparece a declarar don Cesar Antonio Gálvez Tobar , quien en preguntas para tacha responde que es abogado, que trabaja en el estudio Guerrero Olivos y que se desempeña como profesor en la Universidad Finnis Terra, que trabaja en el mismo estudio que lo hace don Sergio Yávar Celedón, que es apoderado de la demandada, actualmente es Asociado Sénior, que por ese trabajo recibe remuneración, el área donde se desempeña es Mercado de Valores, fusiones y adquisiciones, preguntado si ha asesorado laboralmente a empresas La Polar S.A., contesta que sí. La parte demandante tacha al testigo por la causal 6ª del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, los que a juicio del Tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto; porque el testigo ha declarado ser parte del estudio jurídico que representa a La Polar S.A., toda vez que de dicho estudio recibe una retribución económica. Por lo que pide se acoja la tacha con costas.

Comparece a fojas 1029 y siguientes el testigo don Miguel Andrés Coddou Astrain, quien en preguntas para tacha señala que se ha interiorizado por la prensa del presente caso y cuando fue citado lo reviso en la página del Poder Judicial, expresa que es de profesión abogado y que trabaja en el estudio Guerrero Olivos, donde también labora el apoderado de esta causa el abogado Sergio Yavar Celedón, es Senior Counsel , dentro del área de Mercado de Capitales, financiero y bancario, al ser preguntado si por el trabajo que realiza en el estudio jurídico recibe remuneración señala que si en forma mensual. La parte demandante tacha al testigo por la causal 6ª del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, porque ha señalado el testigo ser abogado y que se desempeña en forma remunera en el estudio jurídico Guerreros Olivos, porque en su concepto está claro que hay un interés pecuniario al recibir la contraprestación del estudio jurídico, por lo que solicita se acoja la tacha interpuesta con costas.

CUARTO: Que, evacuando el traslado que le fue conferido la parte demandada señala que solicita el rechazo de la tacha con costas. Porque se señala que el interés de los testigos debe ser directo o indirecto, hipótesis que no se verifica.

Al efecto la Corte Suprema invariablemente ha fallado que ese interés en el resultado del juicio debe ser de carácter pecuniario y no meramente moral o de



alguna otra especie, agrega que de resultar con un fallo a su favor, esto no le generara al testigo algún beneficio económico. Expresa que los resultados de este juicio no se traducirán en ningún bono en especial u otro estipendio.

QUINTO: Que a fojas 1040 y siguientes, presta declaración don Juan Pablo Philippi Prado, quien en preguntas para tachas responde que es de profesión ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad Católica y actualmente es socio de FK Consultores. Dice que le pidió venir a declarar el abogado Sr. Sergio Yávar, los únicos hechos que conoce de este juicio son los que se encuentran contenidos en un informe pericial del Sr. Arredondo que es el encargo que le hizo Empresas La Polar, esos son los hechos y los conoció por el informe. Precizando el encargo que recibió de empresas La Polar fue realizar una crítica metodológica al informe elaborado por el Sr. Arredondo en el contexto de este juicio, dicho encargo fue remunerado directamente por Empresas La Polar, agrega que en ningún caso es un cliente habitual suyo o de la firma para la cual trabaja. La parte demandante viene en tachar al testigo por la causal 6ª del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, porque debió realizar una crítica a un informe que puede afectar los resultados de este juicio y venía con instrucciones de declarar, además ha recibido una retribución económica, por lo que carece de la imparcialidad necesaria para prestar declaración, debiendo esta tacha ser acogida con costas

SEXTO: Que evacuando el traslado la parte de La Polar, pide su rechazo con costas, por las siguientes razones: la Corte Suprema ha sostenido invariablemente que en relación a la tacha propuesta a) que el testigo tenga interés en el resultado del juicio y b) que ese interés debe ser de carácter pecuniario. No verificándose ninguna de esas hipótesis, ya que lo que se resuelva en este juicio le es absolutamente indiferente, ya que el mismo testigo expresa que fue ya remunerado por La Polar, por lo que no se ve el interés que pudiera tener en el resultado del presente juicio.

SEPTIMO: Que esta sentenciadora concluye que respecto de todos los testigos que fueron tachados por las partes, no puede concluirse que estos se encuentren dentro de las causales de las tachas propuestas que para todos es la misma. No se divisa cual sería el interés que les privaría de la imparcialidad para declarar, o el interés económico en su beneficio al momento de prestar declaración, ya si hubo remuneración esta fue percibida con anterioridad a asistir a declarar y no estuvo condicionada a que declararían, por lo que se procederá a desechar las tachas interpuestas en contra de todos los testigos por no darse los presupuestos legales y jurisprudenciales al efecto, sin costas.

B) EN CUANTO AL FONDO:

OCTAVO: Que, a fojas 502 y siguientes, se encuentra demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., en adelante e indistintamente AFC Chile, sociedad anónima, en contra de Empresas La Polar S.A., del giro del retail, solicitando sea acogida en todas sus partes, con expresa condena en costas, en relación de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se pasa a exponer:

I.-Antecedentes de Hecho.



1.-El Seguro de Cesantía.

La Ley N° 19.728 publica en el Diario Oficial con fecha 14 de mayo de 2001 creó un seguro de desempleo denominado Seguro de Cesantía; "...en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, en las condiciones previstas en la presente ley..." (Inciso primero del artículo primero), el que es administrado por "...una sociedad anónima denominada Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, en adelante Sociedad Administradora, que se regulará conforme a las disposiciones de la presente ley" (inciso segundo del artículo primero)

De conformidad con los términos de esa ley, la AFC Chile –entidad fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones- tienen a su cargo la administración de dos fondos: el Fondo de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario.

El primero está conformado por las cuentas individuales por cesantía de los trabajadores afiliados al seguro y se financia con una cotización equivalente al 3% de la remuneración imponible del trabajador, cuya composición en cuanto a su financiamiento de un 0,6% de la remuneración imponible de cargo del trabajador y un 2.4% de la remuneración imponible de cargo al empleador.

En el caso de los trabajadores con contrato a plazo fijo o para una obra o servicio determinado dicha cotización del 3% de la remuneración imponible, es de cargo exclusivo del empleador.

A su vez, el Fondo de Cesantía Solidario o Fondo Solidario, está conformado por una parte de la cotización que debe efectuar el empleador, cuyo monto es diverso según la naturaleza del contrato de trabajo, siendo del 0.8% (del 2.4% que debe cotizar de su cargo el empleador en el caso de los contratos indefinidos) y el 0.2% del 3% de que debe cotizar de su cargo el empleador en el caso de los contratos a plazo fijo o para una obra o servicio determinado).

Además, este Fondo Solidario recibe un aporte estatal de 225.792 Unidades Tributarias Mensuales que se enteran en 12 cuotas mensuales de 18.816 Unidades Tributarias Mensuales (Inciso primero del artículo 5).

Cada trabajador dispone de una cuenta individual denominada cuenta individual por cesantía, que registra y da cuenta de los fondos de cesantía de que dispone para los eventos de pérdida del trabajo en los casos y bajo las condiciones que establece la ley.

Los fondos de cesantía así figurados son administrados por la AFC CHILE, la que en el ejercicio de esta función debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en la ley, teniendo derecho a una retribución establecida sobre la base de comisiones, de cargo de los aportantes, la que es deducida de los aportes o de los Fondos de Cesantía.

La inversión de los recursos del Fondo de Cesantía (CIC) y del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) está regulada por el Párrafo 9° de la Ley N° 19.728, el Decreto Ley N° 3.500, el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía, y por la normativa complementaria dictada por la Superintendencia de Pensiones, según la cual tales recursos "...se invertirán en los instrumentos financieros,



operaciones y contratos que el artículo 45 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, autoriza para los Fondos de Pensiones y en contratos de promesa de suscripción y pago, de cuotas de fondos de inversión que se hace referencia el inciso sexto del artículo 48 del citado Decreto Ley” (artículo 58-A).

A su vez, las inversiones con recursos de los Fondos de Cesantía (CIC Y FCS) deberán sujetarse a los límites máximos que establezca el Banco Central de Chile, dentro de los rangos que se indican en el artículo 58-B de la Ley N° 19.728, 2 que establece un seguro de desempleo.

Las inversiones que se realicen, tanto en el caso del Fondo de Cesantía (CIC) como en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) deben seguir el comportamiento de una cartera referencial establecida para cada uno de ellos en el denominado “Régimen de Inversiones de los Fondos de Cesantía”.

Cada una de tales carteras de referencia, definidas en el “Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía”, han establecido una cartera de perfil más conservador en el caso del Fondo de Cesantía (CIC), que sólo puede invertir en instrumentos de renta fija. En el caso del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), éste puede invertir tanto en instrumentos de renta fija como renta variable, con los límites que se han establecido en la normativa correspondiente. En suma, bajo una configuración estructural y operativa muy similar a la existente respecto de la administración de los fondos previsionales por parte de las Administradoras de Fondos de Pensión, el Seguro de Cesantía cuenta con un régimen de inversión propio y es administrado por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.

2.- Administración del Seguro de Desempleo por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.

Como se dijo, la Ley N° 19.728 publicada en el Diario Oficial de fecha 14 de mayo de 2001, estableció un seguro de desempleo en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, en las condiciones previstas en su artículo 1°.

La administración del seguro, está a cargo de una sociedad anónima de nacionalidad chilena o agencia de una extranjera constituida en Chile, de giro único, que debe tener como objeto exclusivo administrar dos Fondos que se denominan Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley (artículo 30 de la Ley N° 19.728).

De conformidad con el inciso 3° del artículo 30 de la ley en referencia, la Sociedad Administradora es de duración indefinida y subsiste hasta el cumplimiento del plazo de vigencia del contrato de administración.

Ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido conforme a las disposiciones de dicha ley como Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, puede arrogarse la calidad de tal o hacer uso de documentos que contengan nombres u otras palabras que sugieran que los negocios a que se dedican dichas personas son los de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (inciso 5° artículo 30 de la Ley).



El servicio de administración de los Fondos de Cesantía es adjudicado mediante una licitación pública, convocada por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda (artículos 31 y siguientes de la Ley).

Una vez adjudicada la licitación del servicio de administración de Fondos de Cesantía, el adjudicatario queda obligado a constituir la sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera constituida en Chile, con quien los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda celebrarán el respectivo contrato y cuyo objeto exclusivo es el mencionado precedentemente (inciso 2° del artículo 33 de la Ley)

Como resultado de la primera licitación pública para la administración del seguro de cesantía en el año 2001, esta se adjudicó al denominado “Grupo Licitante Providencia”, conformado por AFP Cuprum S.A., AFP Habitat S.A., AFP Magíster S.A., AFP Planvital S.A., AFP Provida S.A., AFP Santa María S.A. y AFP Summa Bansander S.A., el que posteriormente se constituyó en una sociedad anónima, bajo la razón social de “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.” por escritura pública otorgada en la Notaría Pública de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, con fecha 18 de marzo de 2002.

Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, con fecha 25 de Abril de 2002, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Hacienda y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., celebraron un contrato de Administración del Régimen de Seguro de Cesantía por el plazo de diez años.

Mediante Decreto Supremo N° 65 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fecha 11 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial de fecha 7 de octubre de 2013, se declaró, a contar del día 7 de octubre de 2013, el término del Contrato de Administración del Régimen de Seguro de Cesantía celebrado por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda con la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., señalado en el párrafo anterior.

3.-Administración del Seguro de Desempleo por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

Mediante Decreto Supremo N° 24, de fecha 14 de mayo de 2012, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se adjudicó el servicio de administración del Régimen del Seguro de Cesantía establecido por la Ley N° 19.728, al denominado “Grupo Nueva Providencia II”, conformado por BBVA Rentas e Inversiones Limitada, AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A. y AFP Planvital S.A., el que por escritura Pública de Santiago de don Eduardo Avello Concha, se constituyó en una sociedad anónima, bajo la razón social de “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.”.

Mediante escritura pública de fecha 1 de octubre de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Hacienda, procedieron a celebrar con la “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.” el



correspondiente contrato para el servicio de Administración del Régimen del Seguro de Cesantía.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 33 de la Ley N° 19.728, el inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora debe ser autorizado por la Superintendencia de Pensiones.

Por resolución N° 69 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 1 de octubre de 2013, publicada en el Diario Oficial con fecha 5 de octubre de 2013, se autorizó el inicio de las operaciones de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., a contar del primer lunes siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la mencionada Resolución, esto es, el 7 de octubre de 2013, fecha que a su vez corresponde con el término del Contrato de Administración del Régimen de Seguro de Cesantía a cargo de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., señalado en numeral precedentemente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley N° 19.728; en Decreto Supremo N° 45 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicada en el Diario Oficial con fecha 5 de octubre de 2013, la Administración del Régimen de Cesantía está a cargo de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., a contar del día 7 de octubre de 2013.

4.-Empresas La Polar S.A. y el ilícito financiero.

Empresas La Polar S.A., en adelante e indistintamente La Polar, es una sociedad anónima abierta que se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante e indistintamente SVS y, en consecuencia, está sujeta a su fiscalización.

Su giro comercial es la administración de tiendas por departamento y la venta al público de productos tan diversos como el vestuario, línea blanca, electrónica, computación, artículos deportivos, entre otros. Se trata de lo que actualmente se reconoce como una empresa de retail.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, los ingresos de estas sociedades dedicadas al retail no sólo provienen de sus ventas sino también –y de manera significativa- de los servicios financieros prestados por sociedades filiales, tales como la emisión y operación de tarjetas de crédito, la administración de carteras, el corretaje de seguros, los servicios de cobranzas y otros.

Una de sus sociedades filiales es Inversiones SCG S.A., en adelante e indistintamente SCG, sociedad anónima cerrada cuyo giro principal es la prestación de servicios financieros mediante la emisión y administración de tarjetas de crédito relacionadas con el giro principal de la controladora. Dada su calidad de emisor de tarjetas de créditos no bancarias, SCG se encuentra inscrita en el Registro de Emisores de Tarjetas no Bancarias y sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

La relación entre La Polar y SCG no sólo se expresa en la relación jurídica de controladora y filial, sino que se profundiza ante la constatación de una administración compartida. Así, según información proporcionada por la SBIF, al



mes de febrero de 2011, el Presidente del Directorio de SCG era don Pablo Alcalde Saavedra, quien se desempeñó durante largos años en la gerencia general de La Polar y miembro de su Directorio. A su vez, don Nicolás Ramírez Cardoen se desempeñó durante largos años como gerente comercial de SCG y como gerente general de La Polar.

De otro lado, cabe hacer presente que en la determinación del valor de una empresa de retail, como La Polar, tiene especial preponderancia la cartera crediticia de una de sus filiales, como SCG, que es emisora y operadora de tarjetas de crédito. Así, mediante fórmulas financieras se pondera el número de clientes; la cartera vigente; la cartera vencida; el monto de endeudamiento promedio de los clientes; la estructura de financiamiento de la empresa y otras variables financieras, que en su conjunto determinan aspectos esenciales que inciden directamente en el valor de la compañía y, por tanto, en el valor de su acciones.

En lo relativo a los pasivos, La Polar se financiaba con la emisión de bonos (51%) y con la obtención de crédito bancario (36%). A título meramente ejemplar, en el mes de octubre de 2007 emitió bonos por cifras del orden de 7.000.000 Unidades de Fomento, en tanto que en el mes de diciembre de 2010 colocó un Bono Corporativo por la suma de 5.000.000 Unidades de Fomento. Con los fondos obtenidos de parte de los inversionistas reestructuró los pasivos existentes y financió las operaciones de la compañía.

Por otra parte, La Polar llevaba a cabo fuertes aumentos de capital para los efectos de conseguir los recursos necesarios para su operación, los que se materializaban a través de la emisión de nuevas acciones que eran suscritas por los inversionistas. A título ejemplar, entre los años 2003 y 2009 se verificaron aumentos de capital por sumas superiores a los \$90.000.000.000 (noventa mil millones de pesos).

A raíz de tímidos reclamos verificados ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en el año 2011, tanto la autoridad como la opinión pública tomaron conocimiento de la existencia de un fraude de proporciones pocas veces visto en la actividad financiera nacional, a través del mecanismo denominado refinanciamiento unilateral de los créditos de los clientes. En efecto, SCG por medio de maniobras financieras y contables fraudulentas procedía a repactar de manera unilateral los créditos de los clientes morosos, para con ello mostrar una cartera vigente saludable e índices de morosidad dentro de los rangos de las demás empresas de retail.

Por medio de este mecanismo se lograba evitar las provisiones y los castigos de cartera que imponía la deuda morosa. De esta manera, de paso, se mantenía una nebulosa en torno al verdadero estado de la cartera y, con ello, del verdadero valor de la compañía.

Una cartera artificiosamente manejada evidentemente incidía en los resultados operacionales de la compañía, lo que determinaba que la valorización bursátil de la sociedad fuera falsa. Con ello no sólo se engañaba a los clientes sino que se propiciaban errores en la colocación y toma de bonos de la compañía ya que la información financiera era engañosamente falsa. Esta información falsa, que emanaba de la propia administración de la compañía, era utilizada en



presentaciones a los inversionistas y al público en general, con el objeto de lograr de ellos la suscripción de acciones y la toma de bonos de la misma.

Resulta indignante constatar que esta información mañosamente falsa, además de ser conocida por los directores y ejecutivos de la empresa era utilizada en un contexto de absoluta asimetría, pues los hechores disponían de los antecedentes que daban cuenta del verdadero valor de La Polar, en tanto que los tenedores de bonos y accionistas desconocían por completo que la información era absolutamente falsa.

El punto es grave pues con ello no sólo se afectaba a personas determinadas —naturales o jurídicas- sino que se atentaba directamente contra el corazón del sistema financiero, basado en la confianza y la simetría de información en la toma de decisiones financieras.

El 9 de Junio del año 2011 y una vez conocidos los antecedentes que daban cuenta de estas irregularidades, La Polar comunicó un hecho esencial a la SVS, dando cuenta que en las sesiones de Directorio de fechas 6 y 8 de Junio de 2011 se *"...tomó conocimiento de prácticas en la gestión de su cartera de crédito, que se habrían efectuado de una forma no autorizada por el Directorio y en disconformidad con los criterios y parámetros establecidos por la compañía. Dichas prácticas podrían tener un efecto en el nivel de provisiones adicionales requeridas por la compañía, no dimensionado íntegramente hasta la fecha, pero que de acuerdo a estimaciones de la compañía, debieran encontrarse en un rango de entre 150 a 200 mil millones de pesos..."*, para agregar tras cartón que *como consecuencia de esta situación "...se ha dado inicio a una reestructuración del Área de Créditos y Cobranza de la compañía. En este contexto el Directorio pidió la renuncia al Gerente de Productos Financieros quien tenía a su cargo dicha área..."*. Luego se agregó que se habla *"...dispuesto una inmediata y exhaustiva evaluación externa de la cartera de crédito, que involucre la revisión de los procedimientos y prácticas tanto en sus aspectos comerciales, operacionales y de riesgo del negocio de crédito de la compañía, incluyendo especialmente, un informe acerca de la calidad de la cartera y el nivel de provisiones requerido"*.

Como consecuencia de lo anterior, el valor bursátil de La Polar se desplomó. Adicionalmente presentó una falta de liquidez que puso en riesgo las inversiones de quienes confiaron en la veracidad de la información proporcionada por la propia compañía ya que debía provisionar por toda aquella cartera que renegó de manera unilateral y fraudulenta, lo que superaría - según hecho esencial de La Polar de fecha 17 de junio de 2011- los \$420.000 millones de pesos, que supera el valor bursátil de la compañía el último día que transó en la Bolsa de Comercio antes de suspenderse las transacciones.

Los hechos descritos precedentemente dieron origen a un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Valores y Seguros por infracción a la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, que finalizó con la aplicación de drásticas sanciones y a una investigación seguida por el Ministerio Público Región Metropolitana Centro Norte, Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, por los delitos de estafa, infracción a la Ley General



de Bancos, Ley de Mercado de Valores y Ley de Sociedades Anónimas, actualmente en curso.

5.-Relación Financiera entre AFC CHILE y Empresas La Polar S.A.

Como se explicó en el número 3 anterior, la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. (AFC Chile), es una sociedad anónima cerrada, cuyo giro único y exclusivo es administrar dos Fondos, denominados Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Cesantía.

En la tarea de administrar el seguro de cesantía con eficiencia y riesgo controlado, para otorgar a los afiliados prestaciones de gran calidad en sus períodos de desempleo, generando así el valor esperado por el Estado de Chile, AFC Chile invierte el Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario, en los valores que la Ley N° 19.728 le permite, de modo de lograr para los afiliados la mejor rentabilidad y seguridad.

Al 9 de junio de 2011 y antes de conocerse las noticias sobre la cartera de deudores de La Polar, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., contaba con las siguientes inversiones en empresas La Polar S.A., por cuenta y orden de los fondos que administra, Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) : Hace un cuadro explicativo, el fondo de Cesantía (CIC) cartera original en pesos 3.836.870.021 y 175.771 en U.F., a valores de mercado.

En cuanto al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) cartera original en pesos 2.546.662.596 y 116.665 en U.F., a valores de mercado.

Como se explicará detalladamente en el capítulo siguiente las prácticas seguidas por Empresas La Polar S.A., en relación a la gestión de su cartera crediticia e información financiera entregada al público, generó una serie de efectos económicos negativos para sus inversores, lo que a su vez afectó gravemente el valor del patrimonio administrado por AFC CHILE.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Previo al desarrollo de los fundamentos de derecho que sustentan la presente demanda, cabe señalar las siguientes consideraciones preliminares:

A.-Legitimidad activa de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

De conformidad con los certificados de posición emitidos por el Depósito Central de Valores que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, al día 25 de Agosto de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., es titular de 946.140221,0000 debentures BLAPO - F, 16.380,0000 debentures BLAPO - G y 23.146.583,0000, todas ellas emitidas por Empresas La Polar S.A, contando por tanto, con legitimidad activa para actuar en contra de quienes causen un perjuicio a los fondos de cesantía que administra.

B.- Procedimiento aplicable y juez competente.



Según lo dispuesto en artículo 148 del Decreto Ley N° 3.500 las Administradoras estarán expresamente facultadas para iniciar todas las acciones legales que correspondan en contra de aquel que cause un perjuicio a cualquiera de los Fondos de Pensiones que administran. Será competente para conocer de las acciones destinadas a obtener las indemnizaciones correspondientes, el Juez de Letras del domicilio de la Administradora, las cuales se tramitarán de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, la norma en referencia resulta aplicable a Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., en virtud de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley N° 19.728, que establece: *"Serán aplicables a la Sociedad Administradora las normas de esta ley, su reglamento, el contrato para la administración del Seguro y supletoriamente el decreto ley N° 3.500, de 1980 y las disposiciones de la ley N° 18.046 y sus reglamentos. Con todo, la mencionada sociedad quedará sujeta a las mismas normas que rigen a las administradoras de fondos de pensiones, especialmente en lo que respecta a la adquisición, mantención, custodia y enajenación de instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos de Cesantía, así como las normas sobre conflictos de intereses..."*

En consecuencia, resulta competente para conocer del presente juicio conforme a las normas que establece el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sobre juicio sumario.

RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DEMANDADA.

El artículo 1437 del Código Civil establece que las obligaciones nacen, entre otras, a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona como en los delitos o cuasidelitos.

Por su parte el artículo 2314 del Código Civil establece que *"El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito"*.

El objeto de la demanda de autos S.S. es hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de la demandada, la cual apunta ciertamente a un gran y fundamental fin: reparar el daño causado y dejar a la víctima indemne.

El fundamento jurídico que sustenta esta clase de responsabilidad, es el estatuto contenido en el Título XXXV, Libro IV del Código Civil, que en sus artículos 2314 y siguientes, reglamenta los requisitos, fundamentos y presunciones de esta clase de responsabilidad.

Tradicionalmente se ha señalado por nuestra doctrina y jurisprudencia, que para que haya lugar a la responsabilidad extracontractual, deben concurrir los siguientes requisitos copulativos:

- 1° Una acción u omisión culpable o dolosa;
- 2° El daño a la víctima;



3° La relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido;

4° Capacidad legal del autor.

1.- La acción u omisión culpable o dolosa del agente.

Como es sabido, la responsabilidad civil extracontractual se origina a partir de un daño atribuible a una conducta, sea por acción u omisión de una persona.

En nuestra legislación, las Sociedades Anónimas actúan y son administradas a través de su Directorio, gerentes y ejecutivos principales.

Así, en los artículos 31 y 50 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, se establece que: *"La administración de la sociedad anónima la ejerce un directorio elegido por la junta de accionistas...", "A los gerentes, a las personas que hagan sus veces y a los ejecutivos principales, les serán aplicables las disposiciones de esta ley referente a los directores en lo que sean compatibles con las responsabilidades propias del cargo o función, y en especial, las contempladas en los artículos 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, según el caso"*

En este mismo sentido, la normativa que regula el actuar de los órganos sociales, Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas y Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores, en sus artículos 55 y 133, respectivamente, establecen la responsabilidad de las personas que infrinjan las disposiciones contenidas en la ley, sus normas complementarias o aquellas que imparta la Superintendencia de Valores y Seguros ocasionando daño a otro y la consiguiente obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados.

De esta manera, la actuación de sus órganos acarrea la responsabilidad de la sociedad.

Existe pleno consenso hoy día en nuestra doctrina que la responsabilidad de las sociedades anónimas, como persona jurídica, se refiere a un tipo de responsabilidad por el hecho propio que resulta de una atribución que el derecho hace de los actos de sus órganos, agentes y representantes en el ejercicio de sus funciones.(Enrique Barros Bourie, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, editorial Jurídica de Chile, pág. 69) Incluso, esta idea ha evolucionado a tal punto, que se sostiene que las personas jurídicas resultan obligadas extracontractualmente por la actuación de sus órganos con prescindencia si éstos han actuado en el marco de su objeto social o de sus atribuciones.(Von Bar 1996I 182, notas 1027 y sigs.)

Con todo, de conformidad con los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, las personas jurídicas responden civilmente por el hecho ajeno, cometido por sus dependientes.

Teniendo presente lo anterior, la conducta que se imputa a Empresas La Polar S.A., es la realización de diversos hechos por parte de funcionarios de la más alta jerarquía, mediante las cuales alteraron los estados financieros de la compañía con el objeto de reflejar una situación económica y contable distinta a la real, lo que afectó gravemente el valor de sus títulos accionarios y de crédito



(bonos y efectos de comercio) y por consiguiente el valor del patrimonio administrado por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

Los Directores, gerentes y ejecutivos principales que participaron en dicho ilícito son don Pablo Alcalde Saavedra, quien se desempeñó en la compañía como Gerente General entre el 2 de Enero de 1999 y el 13 de Noviembre del 2009 y luego como Presidente del Directorio entre el 13 de Noviembre de 2009 y el mes de Junio del 2011, doña María Isabel Farah Silva, Gerente de Administración entre el año 1999 y Junio del año 2011, don Julián Moreno de Pablo, Gerente Corporativo de Productos Financieros entre el año 1998 y Junio del año 2011, don Nicolás Ramírez Cardoen, Gerente General entre el 13 de Noviembre del año 2009 y el 19 de Enero del año 2011, don Santiago Grage Díaz, Gerente Corporativo de Finanzas desde el mes de Julio del año 2001 y hasta el mes de Junio del año 2011, don Martín González Iakl, Gerente General entre los meses de Enero y Diciembre del año 2011, don Pablo Fuenzalida May, Gerente Corporativo de Informática y Logística entre los años 2000 a 2011, doña Marta Bahamondes Arriagada, Gerente de Gestión y Desarrollo desde el mes de Abril del año 2007 al mes de Junio del año 2011 y don Ismael Tapia Vidal, Jefe del Área de Análisis y Desarrollo de la Subgerencia de Cobranza entre los años 2008 y 2010 y Jefe del Área de Riesgo Crediticio de la Gerencia de Crédito desde el mes de Mayo del año 2010 al año 2011.

Reconocido como uno de los mayores escándalos financieros ocurridos en nuestro país, sino el mayor, derivó en diversas investigaciones de todo orden, instruidas por autoridades, políticas, administrativas y judiciales.

De conformidad con la investigación seguida por Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en el proceso Rol Único de Causa N° 1100591305-7, los ejecutivos antes indicados, en el ejercicio de sus respectivas funciones, perpetraron los delitos de los artículos 59 letra a), 59 letra f) y 60 letra e) de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores; del artículo 157 de la Ley General de Bancos y del artículo 27 de la Ley N° 19.913, motivo por el cual, con fecha 23 de Diciembre de 2013, se presentó acusación en su contra ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

En dicha acusación se imputaron a los acusados, entre otros, los siguientes hechos:

1.- A don Pablo Alcalde Saavedra, doña María Isabel Farah Silva, don Julián Moreno de Pablo, don Nicolás Ramírez Cardoen, don Martín González Iakl, don Pablo Fuenzalida May, doña Marta Bahamondes Arriagada y don Ismael Tapia Vidal, la realización en forma coordinada, reiterada y sistemática de una serie de actuaciones dirigidas a entregar antecedentes o información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros y, a través de ella, al público en general.

Estos ejecutivos, a lo menos desde el mes de Enero del año 2006 y hasta el mes de Junio del año 2011, implementaron un sistema mediante el cual renegocian unilateralmente créditos de clientes que se encontraban en mora, práctica que hasta mediados del año 2009 se realizaba manualmente por los digitadores del Call Center del Área de Cobranzas que operaban el sistema informático de la empresa, para pasar a realizarse en forma automática, mediante la implementación de una herramienta informática especialmente diseñada para



ello. De esta manera, la cartera de créditos por cobrar fue aumentada artificialmente lo que a su vez afectó las cuentas contables "Intereses devengados cartera de clientes", "Recuperación de gastos de cobranza", "Intereses por mora", "Ingresos por administración de cartera", "provisión incobrables", "Indemnización cartera clientes", "IFRS provisión deudores incobrables", "Castigo capital deudores", "Provisión cartera clientes securitizada", lo que terminó afectando la veracidad de los resultados de la compañía, por cuanto las utilidades que fueron informadas en los estados financieros eran mayores que las reales.

Toda esta información falsa afectó la veracidad los rubros y cuentas referidas en el párrafo anterior, así como el instrumento que los contiene y que fue entregado a la Superintendencia de Valores y Seguros y a través de ella, al mercado en general, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011, bajo formato de Ficha Estadística Codificada Uniforme "FECU" o como Estado Financiero "EEFF".

Estos instrumentos fueron aprobados por el Directorio de Empresas La Polar S.A., en Sesión Extraordinaria N° 5 de 28 de Abril del año 2006, Sesión Extraordinaria N° 7 de 11 de Agosto del año 2006, Sesión Extraordinaria N° 8 de 30 de Octubre del año 2006, Sesión Ordinaria N° 77 de 27 de Febrero del año 2007, Sesión Ordinaria N° 79 de 25 de Abril del año 2007, Sesión Extraordinaria N° 12 de 1 de Agosto del año 2007, Sesión Ordinaria N° 85 de 29 de Octubre del año 2007, Sesión Ordinaria N° 88 de 29 de Febrero del año 2008, Sesión Ordinaria N° 90 de 29 de Abril del año 2008, Sesión Extraordinaria N° 13 de 13 de Agosto del año 2008, Sesión Comité de Directores N° 25 de 27 de Octubre del año 2008, Sesión Ordinaria N° 101 de 25 de Febrero del año 2009, Sesión Ordinaria N° 103 de 28 de Abril del año 2009, Sesión Extraordinaria N° 19 de 13 de Agosto del año 2009, Sesión Ordinaria N° 109 de 28 de Octubre del año 2009, Sesión Ordinaria N° 114 de 25 de Febrero del año 2010, Sesión Ordinaria N° 118 de 24 de Mayo del año 2010, Sesión Ordinaria N° 121 de 25 de Agosto del año 2010, Sesión Ordinaria N° 124 de 24 de Noviembre del año 2010, Sesión Extraordinaria de 15 de Marzo del año 2011 y Sesión Comité de Directores de 27 de Abril del año 2011.

Igual información falsa se entregó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a través de ella, al mercado en general, en las Memorias Anuales en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2010.

Las que fueron aprobadas por el Directorio de Empresas La Polar S.A., en Sesión Ordinaria N° 78 de 30 de Marzo del año 2007, Sesión Ordinaria N° 89 de 2 de Abril del año 2008, Sesión Extraordinaria N° 14 de 8 de Abril del año 2009, Sesión Ordinaria N° 115 de 31 de Marzo del año 2010 y Sesión Ordinaria N° 128 de 30 de Marzo del año 2011.

La participación de cada uno de los ejecutivos está detallada en los numerales 8) a 60) de la Acusación, cuya copia se acompaña en el primer otro de esta presentación y a la que nos remitimos para efectos de evitar una mayor extensión del mismo.

2.- A don Pablo Alcalde Saavedra, don Nicolás Ramírez Cardoen, don Martín González Iakl y don Santiago Grage Díaz, haber practicado, desde el año 2007, en forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de declaraciones



maliciosamente falsas ante la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general, acerca de la situación contable y financiera de la compañía, para la inscripción y emisión de instrumentos de financiamiento, como bonos y efectos de comercio y para la colocación de los mismos entre los inversionistas. Como se explicó en el número 1 anterior, la información presentada durante el periodo comprendido entre los años 2007 a 2011, se trataba de información falsa basada en un aumento artificial de la cartera de cuentas o créditos por cobrar, generada por renegociaciones unilaterales de la cartera crediticia.

De esta manera, los ejecutivos presentaron tales declaraciones en pleno conocimiento que la información contable y financiera de la compañía no reflejaba su real situación patrimonial.

En efecto, en las solicitudes de inscripción de una emisión de bonos o de efectos de comercio que Empresas La Polar S.A., efectuó a la Superintendencia de Valores y Seguros durante dicho periodo, presentó los siguientes instrumentos que contenían declaraciones falsas:

A.-En la inscripción de la Línea de Bonos N°512 de 10 de Octubre de 2007, don Pablo Alcalde Saavedra, como gerente general y don Santiago Grage Díaz, como gerente de finanzas, efectuaron declaraciones falsas con fecha 5 de septiembre y 19 de octubre de 2007, respecto de:

A.1.-Escritura pública contrato de emisión de bonos por línea de títulos de deuda de 30 de Agosto de 2007.

A.2.-Escritura pública de modificación contrato de emisión de bonos por línea de títulos de 2 de Octubre de 2007.

A.3.-Prospecto de Estados Financieros del año 2006 y hasta Junio de 2007.

A.4.-Escritura pública de 16 de Octubre de 2007.

A.5.-Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde Saavedra de fecha 3 de Octubre de 2007.

B.-En la inscripción de la Línea de Efectos de Comercio N° 63 de 14 de Mayo de 2009, don Pablo Alcalde Saavedra, como gerente general, efectuó, mediante carta de fecha 26 de Marzo de 2009, declaraciones maliciosamente falsas en los siguientes documentos:

B.1.-Prospecto sobre actividades y negocios de la sociedad del año 2007 y 2008.

B.2.-Prospecto sobre antecedentes financieros de los años 2006, 2007 y 2008.

B.3.-Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde Saavedra de fecha 27 de Marzo de 2009.

C.-En la cuarta colocación efectuada con cargo a la Línea de Efectos de Comercio N° 63, don Nicolás Ramírez Cardoen, como gerente general, efectuó



con fecha 13 de Mayo de 2010, declaraciones maliciosamente falsas en el Prospecto sobre antecedentes financieros de los años 2007, 2008 y 2009.

D.-En la inscripción de la Línea de Bonos N° 647 de 16 de Diciembre de 2010, don Pablo Alcalde Saavedra, Presidente de la compañía, don Santiago Grage Díaz, Gerente de Finanza y don Nicolás Ramírez Cardoen, como gerente general, efectuaron, mediante cartas de fecha 21 de Octubre y 30 de Noviembre de 2010, declaraciones maliciosamente falsas en los siguientes documentos:

D.1.-Escritura pública contrato de emisión de línea de bonos de 18 de Octubre de 2010.

D.2.-Prospecto sobre actividades y negocios de la sociedad del año 2009.

D.3.-Prospecto sobre antecedentes financieros del año 2010.

D.4.-Declaraciones de responsabilidad de don Pablo Alcalde Saavedra y de don Nicolás Ramírez Cardoen de fecha 22 de Octubre y 30 de Noviembre, ambas del año 2010.

E.-En la inscripción de la Línea de Bonos N° 648 de 16 de Diciembre de 2010, don Pablo Alcalde Saavedra, como Presidente de la compañía y don Nicolás Ramírez Cardoen, gerente de finanzas, efectuaron, mediante carta de fecha 21 de Octubre de 2010, declaraciones maliciosamente falsas, en los siguientes documentos:

E.1.-Escritura pública contrato de emisión de línea de bonos de 18 de Octubre de 2010.

E.2.-Prospecto sobre actividades y negocios de la sociedad del año 2009.

E.3.-Prospecto sobre antecedentes financieros años 2009 y 2010.

E.4.-Declaraciones de responsabilidad de don Pablo Alcalde Saavedra y de don Nicolás Ramírez Cardoen de fecha 22 de Octubre de 2010.

F.-En la sexta colocación efectuada con cargo a la Línea de Efectos de Comercio N° 63, don Pablo Alcalde Saavedra, como Presidente de la compañía y don Martín González Iaki, gerente general, efectuaron, con fecha 20 de Mayo de 2011, declaraciones maliciosamente falsas en los siguientes documentos:

F.1.-Prospecto sobre antecedentes financieros de los años 2009, 2010 y 2011.

F.2.-Declaraciones de responsabilidad de don Pablo Alcalde Saavedra y de don Nicolás Ramírez Cardoen de fechas 20 y 31 de Mayo de 2011.

Igualmente, la Superintendencia de Valores y Seguros, como órgano fiscalizador de los emisores de valores, con motivo del hecho esencial dado a conocer por Empresas La Polar S.A., el 9 de Junio de 2011, instruyó investigación administrativa en contra de 8 altos ejecutivos de la compañía, a través de la cual pudo concluir la existencia de malas prácticas en relación al manejo y contabilización de su cartera de créditos que implicaron la infracción de la normativa aplicable a sus agentes.



1.- Resolución Exenta N° 66, de fecha 9 de Marzo de 2012, sancionó a doña Marta Bahamondes Arriagada con pena de multa ascendente a U.F. 300 por infracción a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores, al haber adquirido y enajenado acciones de La Polar S.A., en circunstancias que ésta contaba con información privilegiada respecto de la real situación financiera de la compañía.

Más allá de esta infracción y para el caso que les convoca, de conformidad con la investigación practicada por dicha institución, la que incluye la revisión de extensa documentación y declaraciones de testigos, se determinó que Marta Bahamondes Arriagada, quien desempeñó el cargo de Gerente de Gestión y Desarrollo de Empresas La Polar S.A., desde el año 2006 al mes de julio del año 2011, participó en el ilícito de renegociación unilateral de la cartera de clientes seguido por la compañía.

Así, a lo menos en el mes de Junio del año 2009, en diversas comunicaciones con otros ejecutivos de la compañía (correos electrónicos con Iván Dinamarca y Juan Ignacio Maturana del 1 al 5 de Junio de 2009) la señora Bahamondes fue informada de la existencia y uso del sistema computacional mediante el cual se realizaban las repactaciones unilaterales de las deudas morosas para finales del año 2009 (correos electrónicos con Ismael Tapia Vidal y otros en los meses de Noviembre y Diciembre de 2009 y Enero de 2010) participar activamente en la comisión del ilícito prestado la colaboración de su área.

Incluso, a principios del año 2010 la señora Bahamondes pasó a formar parte del Comité de Cobranza implementado por la empresa con el objeto de desarrollar estratégicamente la cartera de clientes morosos repactados unilateralmente.

2.- Resolución Exenta N° 83, de fecha 9 de Marzo de 2012, sancionó a don Pablo Alcalde Saavedra, con pena de multa ascendente a U.F. 25.000, por infracción a lo dispuesto en las letras a) y f) del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores y N° 4 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Respecto del ilícito comprendido en la letra a) del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, se imputa al ejecutivo haber entregado maliciosamente información falsa al mercado, a la Superintendencia de Valores y Seguros y al público en general. Respecto de la letra f) de la misma norma, la vulneración legal se constituye por haber presentado información falsa en relación a la emisión de valores de oferta pública realizada por Empresas La Polar S.A., en su calidad de gerente general y posteriormente como Presidente de la compañía.

Finalmente, la infracción del artículo 42 N°4 de la Ley de Sociedades Anónimas se produce por haber presentado información falsa a los accionistas mediante la suscripción de hechos esenciales, estados financieros, memorias o informes relacionados con la emisión de valores de oferta pública de la empresa, los cuales no se condecían con real situación financiera.

Durante el año 2008 el señor Julián Moreno, gerente corporativo de productos financieros, le informó de la realización de renegociaciones unilaterales practicadas por Empresas La Polar S.A. Dicha información fue comunicada toda



vez que las renegociaciones habían causado un importante desmejoramiento de la cartera. Así, por correo electrónico de Octubre de 2008, el señor Alcalde es advertido de la formación de un comité integrado por personal de la gerencia de productos financieros, el que se encontraba abocado a desarrollar medidas para aumentar la tasa de pago cuya baja podría ser consecuencia del uso de productos financieros, entre ellos, las renegociaciones. Asimismo, en diversas comunicaciones, don Pablo Alcalde trata con otros ejecutivos los efectos colaterales que la práctica de renegociaciones había tenido en la empresa, tal y como lo demuestra una serie de correos que finalizan con fecha 30 de Marzo de 2009, en el que el señor Alcalde solicitó una reunión con el señor Moreno para tratar el tema de las renegociaciones unilaterales.

De esta manera, don Pablo Alcalde recibió regularmente información que le permitió tener conocimiento acabado de la real situación financiera de Empresas La Polar S.A. En efecto, el solo hecho de observar el elevado volumen de renegociaciones que se efectuaba en la compañía, daba cuenta de una situación irregular puesto que denotaba una política de privilegiar la renegociación de créditos más que el cobro de acreencias, hecho que no resulta sustentable en el tiempo toda vez que la viabilidad económica del negocio crediticio descansa precisamente en la cobranza.

A mayor abundamiento, don Pablo Alcalde Saavedra era miembro del directorio en la fecha en que la compañía comunicó mediante hecho esencial de 9 de Junio de 2011 que la situación contable era diversa a sus estados financieros y de la información entregada a la Superintendencia. Más aún, mediante hecho esencial de fecha 17 de junio de 2011, la compañía corrige la real situación de los estados financieros informados anteriormente.

3.- Resolución Exenta N° 84, de fecha 9 de Marzo de 2012, sancionó a don Julián Moreno de Pablo con pena de multa ascendente a U.F. 20.000 por infracción a lo dispuesto en la letra a) del artículo 59 y artículo 165, ambos, de la Ley de Mercado de Valores.

Don Julián Moreno de Pablo detentó el cargo de gerente corporativo de productos financieros en Empresas La Polar S.A. hasta Junio del año 2011, esta gerencia, concentraba tanto la generación de créditos como la cobranza de los mismos. En relación al cargo señalado, la Superintendencia de Valores y Seguro sancionó al ex ejecutivo por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores toda vez que entregó información maliciosamente falsa al mercado, a la Superintendencia y al público en general.

Concretamente, don Julián Moreno de Pablo, participó en la operación de renegociaciones unilaterales que se desarrolló en la compañía mediante un archivo elaborado por el propio ejecutivo. En el mencionado archivo, entre otras informaciones, se daba a conocer el valor de la cartera y la condición de renegociación, replicando la información base utilizada para la determinación de provisiones. A partir de esta información, y dependiendo de las necesidades para el cumplimiento de metas, éste establecía montos que debían ser sujetos de renegociación. Así, generó un sistema de renegociaciones automáticas que, previamente a ser computacionales, eran encargadas directamente por el ex



ejecutivo a los supervisores del área de cobranza a través de reuniones o correos electrónicos.

El creciente número de clientes renegociados unilateralmente terminó por impactar visiblemente la situación financiera de la cartera. Es así como en el año 2008 se formó un comité integrado exclusivamente por personal adscrito a la gerencia corporativa de productos financieros, con el objetivo de afrontar la situación desmejorada de la compañía. Dicha formación fue comunicada por el señor Moreno tanto al gerente general, don Pablo Alcalde, como a la gerente corporativa de administración, señora María Isabel Farah tal según consta en las declaraciones de don Julián Moreno de fecha 1 de Diciembre de 2011.

Por otra parte, el señor Moreno controlaba la recaudación de la cartera total, remitiendo a lo menos desde finales del año 2008 la información referida, de manera diaria, a la gerente corporativa de administración, señora Farah, a logística don Pablo Fuenzalida y al gerente general, don Pablo Alcalde.

Los actos de renegociación unilateral y sus consecuencias no fueron comunicados por el señor Moreno y, más aún, fueron encubiertos al mercado, a la Superintendencia de Valores y Seguros y al público en general.

A su vez, y esto dice relación con la segunda norma infringida, el señor Moreno efectuó ventas de acciones de Empresas La Polar S.A. en circunstancias que éste tenía información privilegiada acerca del real valor de la compañía por haber participado activamente en la construcción de estados financieros.

En este sentido, cabe señalar que en octubre de 2006 la sociedad Inversiones Alpha S.A. adquirió un total de 5.988.000 acciones de Empresas La Polar S.A., enmarcándose esta operación en un plan de compensación otorgado por el Fondo de Inversión Southern Cross a todos los gerentes corporativos y al gerente general de la compañía.

Este plan de compensación se instrumentalizó mediante la constitución de la sociedad de inversiones Alpha S.A. participando el señor Moreno, conjuntamente con los restantes gerentes corporativos, en su capital social, a través de la sociedad Asesorías Río Najerillas Ltda. De acuerdo al plan de compensación, el señor Moreno adquirió de Southern Cross, representado por New World Store, un total de 1.187.400 acciones de Alpha y a su vez efectuó un préstamo a esta última por un monto de \$ 448.579.800. Lo anterior, de forma tal que el ex ejecutivo tuviera una participación económica en Alpha S.A., que le permitiera ser propietario indirectamente de 798.000 acciones de la Polar.

Posteriormente, con fecha 1 de Octubre de 2009, Alpha S.A., vendió 5.988.000 acciones de Empresas La Polar S.A., por un monto total de \$14.227.189.000. Con el producto de la venta se pagaron comisiones a corredores, el crédito a Penta INF y el remanente se repartió entre los accionistas.

Posteriormente se realizaron ventas de similares características con fecha 20 y 21 de Abril de 2010, al ser interpelado por dichas ventas, el señor Moreno señaló que ellas se efectuaron con la finalidad de pagar acreencias, lo que no resulta sostenible pues las compras no se vinculan a obligaciones adquiridas con el financista de la operación en un sentido tal que fuere forzoso enajenar dichas



acciones. Si bien las ventas señaladas, le significaron a don Julián Moreno mantener un poco más del 52% de las acciones La Polar que mantendría a través de Río Najerillas, las enajenaciones permitieron el pago de la totalidad de los pasivos contraídos para la adquisición de acciones La Polar, limitando de manera importante los perjuicios económicos que el señor Moreno podría enfrentar en el caso que la real situación financiera de La Polar fuese conocida. Con fecha 30 de Junio, 1, 6 al 9 de Julio y 30 de Agosto, todas del año 2010, procedió a realizar nuevas ventas en términos similares, lo implica que éstas habrían respondido al continuo empeoramiento de la situación financiera de la empresa debido al pobre desempeño de la cartera crediticia.

Finalmente la Superintendencia de Valores y Seguros determinó que don Julián Moreno de Pablo, vulneró los preceptos ya mencionados de la Ley de Mercado de Valores, en relación a la venta de acciones de La Polar S.A., por haber utilizado en beneficio propio información privilegiada con la cual contaba en razón del cargo que detentaba en la empresa.

4.- Exenta N° 85, de fecha 9 de Marzo de 2012, sancionó a doña María Isabel Farah Silva con pena de multa ascendente a 20.00 U.F. por infracción a lo dispuesto en la letra a) del artículo 59 y artículo 165, ambos de la Ley de Mercado de Valores.

De la revisión de extensa documentación y declaraciones de testigos, se determinó que doña María Isabel Farah vulneró lo dispuesto en el artículo 59 letra a) de la Ley 18.045 por haber entregado maliciosamente información falsa al mercado, a la Superintendencia y al público en general. Asimismo se sancionó a la ex ejecutiva por la infracción del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores al haber efectuado ventas de acciones de Empresas La Polar S.A. mediante la sociedad de Inversiones Alpha S.A. y la sociedad Asesorías Horus Ltda., teniendo conocimiento de la real situación financiera de la compañía.

Se determinó que la señora Farah tuvo conocimiento de las renegociaciones unilaterales, por cuanto, ocupando el cargo de gerente corporativo de administración sostuvo diversas comunicaciones con los Sres. Alcalde y Moreno analizando los efectos colaterales de la práctica de renegociaciones unilaterales, lo que consta en una serie de correos electrónicos que finaliza con fecha 30 de Marzo de 2009, especialmente, en los correos de don Julián Moreno sobre los procesos de renegociaciones efectuados por la compañía.

Por otro lado, en el plan de compensación que implementó el Fondo de Inversión Southern Cross a los gerentes corporativos y al gerente general de la compañía referida anteriormente, la señora Farah participó en la sociedad de inversiones Alpha S.A., a través de la sociedad Asesorías Horus Ltda. y adquirió de Southern Cross, representado por New World Store, un total de 1.187.400 acciones de Alpha S.A. y a su vez efectuó un préstamo a esta última por un monto de \$448.579.800. Lo anterior de forma que tuviera una participación económica en Alpha S.A., que le permitiera ser propietaria indirectamente de 798.000 acciones de Empresas La Polar S.A. En similares términos se llevaron a cabo nuevas compras en Octubre de 2006, Abril de 2007 y Noviembre de 2009, operaciones en su propio beneficio bajo información privilegiada.



5.- Resolución Exenta N° 86, de fecha 9 de Marzo de 2012, sancionó a don Pablo Fuenzalida May con pena de multa ascendente a U.F. 7.500 por infracción a lo dispuesto en la letra a) del artículo 59 letra y artículo 165, ambos de la Ley de Mercado de Valores.

Don Pablo Fuenzalida May lideró la gerencia de informática y logística desde el año 2000 en Empresas La Polar S.A., la que pasó a denominarse gerencia corporativa de informática y logística en el año 2007. Entre las labores que debía desempeñar se encontraba la de identificar los clientes que debían ser sujeto de renegociación unilateral. A medida que el ex ejecutivo fue incorporándose en el área de productos financieros, fue también, involucrándose activamente en los procesos de renegociación unilateral tal como da cuenta el correo electrónico dirigido a don Ismael Tapia de fecha 11 de Febrero de 2011. Asimismo, don Julián Moreno, copiaba regularmente al señor Fuenzalida los correos a través de los cuales impartía instrucciones para la realización de las renegociaciones unilaterales, como ejemplo el de fecha 11 de Enero de 2011.

De lo anterior, se deduce su conocimiento respecto al verdadero estado de la compañía no informando al Directorio de la real situación de morosidad de la cartera y de su condición de renegociación. Más aún, de las sesiones de directorio y comité de directores en las que intervino don Pablo Fuenzalida, se concluye que éste evitó, deliberadamente, transmitir el verdadero estado de la cartera, observándose, por el contrario, la realización de diversas actuaciones con el objeto de ocultar su real situación.

Respecto de la infracción al artículo 165 del mismo cuerpo legal, el ilícito se produjo por haber efectuado ventas de acciones de Empresas La Polar S.A. mediante la sociedad Inversiones Alpha S.A. y la sociedad Asesorías Administrativas, Financieras y Sistemas Los Siete Ltda., en los mismos términos descritos en los numerales 3 y 4 anterior, en circunstancias que tenía pleno conocimiento de la real situación financiera de compañía.

6.- Resolución Exenta N° 87, de fecha 9 de Marzo de 2013 sancionó a don Nicolás Ramírez Cardoen con pena de multa ascendente a U.F. 13.000 por infracción a lo dispuesto en las letras a) y f) del artículo 59 y artículo 165, ambos de la Ley de Mercado de Valores y N° 4 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las infracciones señaladas se producen por haber entregado maliciosamente información falsa al mercado, a la Superintendencia y al público en general, al haber presentado información falsa en relación a la emisión de valores de oferta pública realizada por Empresas La Polar S.A. en su calidad de gerente general y por haber presentado información falsa a los accionistas mediante la comunicación de hechos esenciales, presentación de estados financieros, memorias o informes relacionados con la emisión de valores de oferta pública de Empresas La Polar S.A., los que no condecían con la real situación financiera de la compañía.

De la revisión de extensa documentación y declaraciones de testigos, se determinó que Nicolás Ramírez Cardoen participó en el ilícito de renegociación unilateral de la cartera de clientes morosos seguido por la compañía, práctica que



no pudo ser alcanzada sin contar con la participación activa de la plana gerencial de Empresas La Polar S.A.

En efecto, el conocimiento del señor Ramírez de las renegociaciones unilaterales se corrobora a partir, entre otros hechos, por el correo de fecha 15 de enero de 2010, en el que doña María Isabel Farah informó al gerente corporativo de productos, don Julián Moreno de Pablo, acerca del reclamo de un cliente ante el SERNAC con motivo de múltiples renegociaciones unilaterales.

Respecto de la infracción al artículo 165 del mismo cuerpo legal, el ilícito se produjo por haber efectuado ventas de acciones de Empresas La Polar S.A., mediante la sociedad Inversiones Alpha S.A. y la Asesorías Universal Ltda., en los mismos términos descritos en los numerales 3 a 5 anterior, en circunstancias que tenía pleno conocimiento de la real situación financiera de compañía

7.- Resolución Exenta N° 354, de fecha 10 de Septiembre de 2012, sancionó a don Martín González Iakl con pena de multa ascendente a U.F. 3.500 por infracción a lo dispuesto en el N° 4 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, al haber presentado información falsa a los accionistas en su calidad de gerente general interino de la compañía.

De la revisión de extensa documentación y declaraciones de testigos, se determinó que el señor González tenía pleno conocimiento de las renegociaciones unilaterales efectuadas por la compañía, situación que nunca fue comunicada a los accionistas.

En efecto, la declaración efectuada por don Manuel de la Prida, con fecha 30 de Junio de 2011, dependiente de la gerencia corporativa de productos financieros, informó *que* personalmente dio a conocer al señor González, tan pronto asumió como gerente general interino, de la práctica de renegociaciones unilaterales seguida por la compañía.

A mayor abundamiento, y como consta en los correos individualizados en la resolución de la Superintendencia, en su cargo de gerente general interino, el señor González recibía regularmente información por parte de la gerencia de gestión, lo que le permitía tener conocimiento de la real situación financiera de la compañía.

8.- Resolución Exenta N° 355, de fecha 10 de Septiembre de 2012, sancionó a don Santiago Grage Díaz con pena de multa ascendente a U.F. 1.000 por infracción a lo dispuesto en el artículo 165 y en el inciso primero del artículo 41 en relación al artículo 50, ambos de la Ley de Sociedades Anónimas.

Don Santiago Grage Díaz estuvo a cargo de la Gerencia Corporativa de Finanzas de Empresas La Polar S.A. por 9 años y 11 meses, sin embargo, su verdadera labor era la de levantar los capitales necesarios para los proyectos que se encomendaban a través de distintos instrumentos del mercado de capitales.

Asimismo, como parte de sus funciones, el ex funcionario era el encargado de entregar información financiera para clasificadoras de riesgo y bancos, para lo cual requería de apoyo de las gerencias corporativas de administración y productos financieros.



En este sentido, la labor de coordinador para la entrega de información financiera, le valió al señor Grage la posibilidad de estar permanentemente en conocimiento de información referida a la cartera de créditos, esto se desprende del correo electrónico que con fecha 21 de Julio de 2009 envió a doña Marta Bahamondes.

Lo anterior además le permitía el acceso a diferentes antecedentes que daban señales de alerta respecto del inadecuado comportamiento de la cartera crediticia de la empresa, lo que debió motivar una mayor atención respecto de la información que en base a ello éste suministraba al mercado, pero que sin embargo no dio noticia.

Para ejemplificar que el señor Grage tenía conocimiento de las renegociaciones unilaterales se cita el correo electrónico de reclamo de doña Paulina Cristi Foix con fecha 7 de Marzo de 2011.

Respecto de la infracción al artículo 165 del mismo cuerpo legal, el ilícito se produjo por haber efectuado ventas de acciones de Empresas La Polar S.A. mediante la sociedad Inversiones Alpha S.A. y la Asesorías Ravello Ltda., en los mismos términos descritos en los numerales 3 a 6 anterior, en circunstancias que tenía pleno conocimiento de la real situación financiera de compañía.

La crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de Empresas La Polar S.A., fue de tal magnitud que en el mes de Junio del año 2011, la Cámara de Diputados instruyó una Comisión Investigadora Especial a la que se apersonaron, entre otros, el Ministro de Hacienda de la época, don Felipe Larraín, el Presidente (s) del Banco Central de Chile, don Miguel Ángel Nacur, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de la época, don Carlos Budnevich, el Superintendente de Valores y Seguros de la época, don Fernando Coloma, el Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, don Juan Antonio Peribonio, la Superintendente de Pensiones, doña Solange Berstein, representantes de las empresas clasificadoras de riesgos Feller Retes y Fitch Chile y de la empresa de auditora Pricewaterhouse Coopers, Consultores, Auditores y Compañía Ltda.

Asimismo, se recibieron diversos oficios provenientes, entre otros, de la Superintendencia de Valores y Seguros, Fiscalía Nacional Económica, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Presidencia del Sistema de Empresas Públicas, en aquél entonces la Ex Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet J, del Director del Servicio Nacional del Consumidor, don Juan Antonio Peribonio, del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, don Carlos Budnevich Le- Fort y del Presidente de Empresas La Polar S.A., don César Barros M.

Dentro de las conclusiones arribadas por la Comisión Especial en el marco de la investigación y aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados participantes en la votación, en lo que se refiere a la responsabilidad de los ejecutivos y Directores de Empresas La Polar S.A., se les atribuyó la perpetración de hechos graves de carácter delictual por la adulteración de sus resultados financieros y divulgación de información falsa al mercado.

Adicionalmente, respecto de sus Directores, se estimó haber faltado gravemente a su deber de eficiencia y lealtad para con la empresa, al no haber



adoptado todas las medidas con el objeto de ser informado de manera veraz acerca de la situación financiera de la empresa y definir, en consecuencia, una política acorde a ella.

A dicho órgano se le imputó la transgresión de los artículos 10 y 59 de la Ley de Mercado de Valores y artículos 39, 41, 46 y 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

La primera norma se consideró infringida respecto de su obligación de entregar información veraz, suficiente y oportuna y de no haber adoptado una norma interna que contemple los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que aseguren dicha divulgación.

En el mismo sentido respecto del artículo 46 de la Ley de Sociedades Anónimas, de entregar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y la Superintendencia determinen.

Finalmente arribó a la convicción que sus Directores actuaron de manera negligente en el ejercicio de sus funciones, conforme lo preceptuado en el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece el deber de emplear en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Como se ve, en los hechos descritos precedentemente que dan origen a la responsabilidad extracontractual demandada en estos autos se advierte la responsabilidad de los diversos agentes involucrados de Empresas La Polar S.A. Así, respecto de los ejecutivos don Pablo Alcalde Saavedra, en su cargo de Gerente General y Presidente del Directorio, doña Maria Isabel Farah Silva, Gerente de Administración, don Julián Moreno de Pablo, Gerente Corporativo de Productos Financieros, don Nicolás Ramírez Cardoen, Gerente General, don Santiago Grage Díaz, Gerente Corporativo de Finanzas, don Martín González Iakl, Gerente General, don Pablo Fuenzalida May, Gerente Corporativo de Informática y Logística, doña Marta Bahamondes Arriagada, Gerente de Gestión y Desarrollo y don Ismael Tapia Vidal, Jefe del Área de Análisis y Desarrollo de la Subgerencia de Cobranza y Jefe del Área de Riesgo Crediticio de la Gerencia de Crédito, al haber creado, fomentado o permitido un sistema con el objeto de adulterar los resultados financieros de la empresa y de entregar información falsa al mercado y reguladores acerca de la situación económica de la misma.

La realización de tales actos constituye una infracción a las prohibiciones y obligaciones que les impone la normativa que regula su actividad, Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.

Por una parte, tales conductas constituyen una infracción al artículo 42 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, que prohíbe a sus Directores, norma que como ya se dijo, en virtud del artículo 50 de la misma, se aplica a los gerentes, a las personas que hagan sus veces y a los ejecutivos principales, presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles información esencial.

Desde el punto de vista penal, tal conducta constituye además el delito de entrega de antecedentes falsos o de certificación de hechos falsos a la



Superintendencia de Valores y Seguros, a una bolsa de valores o al público en general, tipificado en las letras a) y f) del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores.

Igualmente, han trasgredido el artículo 46 de la Ley de Sociedades Anónimas, que impone a los directores, igualmente aplicable a los gerentes, a las personas que hagan sus veces y a los ejecutivos principales en virtud del artículo 50 de la misma, la obligación de proporcionar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la Superintendencia determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.

De otro lado, en los hechos descritos, se advierte la responsabilidad del Directorio de Empresas La Polar S.A., que en su calidad de órgano superior de administración le asiste el deber de estar completamente informado de todo aquello que sea necesario para lograr el cumplimiento del objeto social y de adoptar sistemas eficientes en el control interno de la compañía.

Así, en la administración de la compañía el Directorio incumplió una serie de normas que regulan su actividad, que para el caso que les convoca cabe mencionar artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y artículos 46 y 50 bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, que establecen respectivamente:

La obligación de entregar información esencial para las inversiones en forma veraz, suficiente y oportuna.

La obligación de proporcionar la información que establece la ley a la Superintendencia de Valores y Seguros y al público en general con la periodicidad, publicidad y en la forma que ésta determine.

Siendo responsabilidad del directorio adoptar una norma interna que contemple los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que aseguren dicha divulgación.

La obligación de proporcionar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la Superintendencia de Valores y Seguros, determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.

Respecto de la responsabilidad del Comité de Directores, de examinar los informes de los auditores externos, el balance y demás estados financieros presentados por los administradores o liquidadores de la sociedad a los accionistas, y pronunciarse respecto de éstos en forma previa a su presentación a los accionistas para su aprobación.

Como se señaló al comienzo de este numeral, la responsabilidad de las sociedades anónimas como persona jurídica por el hecho de sus órganos directivos y representantes, acarrea responsabilidad por el hecho propio, por la atribución que el derecho hace de los actos de sus órganos, agentes y representantes en el ejercicio de sus funciones.



Sucede en el caso que los convoca, que la responsabilidad que se imputa a Empresas La Polar S.A., deriva del hecho propio por las conductas desplegadas por una serie de ejecutivos con el objeto de alterar los estados financieros de la compañía o bien por la falta de diligencia en los procesos y en los mecanismos de control al interior de la organización empresarial, especialmente del Directorio, conocida como culpa en la organización.

Luego, el deber de cuidado que la ley exige a los órganos administradores de una sociedad anónima, se encuentra en el artículo 39 de la Ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas, aplicable a los gerentes, a las personas que hagan sus veces y a los ejecutivos principales en virtud del artículo 50 de la misma, que establece un estándar general de cuidado al señalar que: *"Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables"*.

Pero además, los órganos de administración de una sociedad anónima tienen el deber de cumplir las normas que regulan su gestión y que han sido detalladas anteriormente, cuya infracción da lugar a la culpa infraccional.

En nuestra doctrina, la culpa infraccional o contra legalidad permite dar por establecido uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual demandada, la culpa, al acreditarse la violación de la norma que establece los deberes de cuidados exigidos en su actividad.

Es por ello que Empresas La Polar S.A., es responsable de los daños causados al patrimonio administrado por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., que se detallan en el numeral siguiente, por la infracción de sus órganos a los artículos 9, 10, letras a) y f) del 59, todos, de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y artículos 42, 46 y 50 bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

2.-El daño a los Fondos de Cesantía administrados por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

Al 9 de junio de 2011, día en que se comunicó el hecho esencial por parte de Empresas La Polar S.A., AFC CHILE poseía entre sus activos hace un cuadro con el cual señala sus activos y que instrumentos financieros tenía de dicha compañía:

Fondo de Cesantía (CIC) Cartera Original, valor de mercado, total Cartera Original CIC en pesos 3.836.870.021, en U.F. 175.771.

Fondo de Cesantía Solidario (FCS) Cartera Original, valor de mercado, total Cartera Original en pesos 2.546.662.596, en U.F. 116.665.

Señala que los resultados están son elaborados en base a información de AFC y Superintendencia de Pensiones.

Agrega que con posteriormente, con fecha 19 de junio de 2013, se inició un proceso de canje de los antiguos bonos de Empresas La Polar S.A., el que se llevó a cabo en dos etapas, según lo explicara en otros cuadros:



Fondo de Cesantía (CIC) señala detalladamente serie de los bonos antiguos y su valor, lo mismo para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) señala con detalle serie de los bonos antiguos y su valor.

Todo lo que señala sobre los fondos su fuente el al Superintendencia de Pensiones.-

Instrumentos de Capitalización-Acciones:

El fondo de Cesantía Solidario tiene en su cartera 105.203 acciones de Empresas La Polar S.A.

La crisis financiera causada por Empresas La Polar S.A., ocasionó una drástica caída en el precio de sus acciones y valor de sus bonos, causando graves pérdidas de agosto de 2015, el que solicita se tenga como parte a los fondos de cesantía administrados por su representada.

El detalle de los perjuicios que se expone a continuación ha sido elaborado en base el informe económico y contable elaborado por don Horacio Arredondo Villalba, contador Auditor, de fecha 7 integrante del acápite en análisis.

2.1.-Perjuicio económico en instrumentos de deuda:

De conformidad a lo expuesto en el informe en referencia, en el caso de los instrumentos de deuda, el perjuicio de más directa cuantificación proviene de la diferencia entre los flujos que se deberían de haber percibido y los que realmente se percibieron. Adicionalmente considera la pérdida del valor de los activos, comparando el valor de la cartera origina con el valor de la cartera luego del canje de valores del 31 de octubre de 2014, como el costo de oportunidad de los flujos no percibidos.

Con el objeto de disminuir los efectos negativos sobre el patrimonio administrado, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., realizó las siguientes ventas:

Ventas del total de las acciones de La Polar en cartera del FCS.

Fecha: 29 de marzo de 2012, número de acciones: 105.203, precio \$ 280/acción.

Venta de la Serie G de los bonos recibidos en el canje de 26 de junio de 2013.

De esta manera, luego del canje y venta de valores, al 31 de julio de 2015, Sociedad Administrador de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., posee por cuenta y orden de los fondos que administra, Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS) a los siguientes instrumentos financieros de Empresas La Polar S.A.:

La metodología y ejercicio seguido en orden a cuantificar el perjuicio causado en los instrumentos de deuda, han sido explicados pormenorizadamente en el informe económico que sustenta este requerimiento, al cual se remitirán completamente.



En base al modelo utilizado para los bonos se puede resumir esquemáticamente de la siguiente forma: Hay un hecho esencial, el 31 de octubre de 2014 fecha de evaluación, hay perjuicios por flujos no percibidos más costo de oportunidad de flujos no percibidos en el tiempo se produce Pérdida de valor de los activos.

i) Perjuicio por flujos de caja no percibidos: Se hace un diagrama al respecto.

En resumen, al 31 de julio de 2015, el ilícito cometido por Empresas La Polar S.A., implicó para los fondos administrados por AFC CHILE, un perjuicio económico combinado por concepto de flujos de caja no percibidos de 86.801 Unidades de Fomento, ascendentes a la cantidad de \$ 2.177.540.231 (dos mil ciento setenta y siete millones quinientos cuarenta mil doscientos treinta y un pesos)

ii) Perjuicio por pérdida de valor de los activos:

Para estimar el impacto económico, en el informe se comparó el valor simulado teórico de la cartera original de bonos con su valor real o valor de mercado al 31 de julio de 2015, sin considerar la venta realizada por la administración de AFC CHILE, utilizando como tasa de descuento la tasa facial de cada instrumento.

En resumen, el 31 de julio de 2015, el ilícito cometido por Empresas La Polar S.A., implicó para los fondos administrados por AFC CHILE, un perjuicio económico combinado por concepto de pérdida de valor de los activos de 204.519 Unidades de Fomento, equivalentes a \$ 5.130.682.255.- (cinco mil ciento treinta millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos).

iii) Perjuicio por costo de oportunidad:

De acuerdo a la tabla, que señala, la tasa anual real de los fondos administrados en el promedio de los 36 meses anteriores al 31 de julio de 2015, registrada por la Superintendencia de Pensiones.

El ilícito cometido por Empresas La Polar S.A., impactó en el costo de oportunidad puesto que los fondos de cesantía administrados por AFC CHILE dejaron de recibir flujos y por consiguiente acarreó la imposibilidad de reinvertir los flujos de haber estado disponibles serían reinvertidos en las carteras de los fondos, que al menos hasta el 31 de julio de 2015, de acuerdo a la tasa promedio indicada precedentemente, habría reportado la siguiente ganancia: perjuicios por costo de oportunidad de flujos no invertidos caso CIC 5,942 FCS 4,280 Total 10,222.

En resumen, al 31 de julio de 2015, el ilícito cometido por Empresas La Polar S.A., implicó para los fondos administrados por AFC CHILE un perjuicio económico combinado por concepto de costo de oportunidad de 10.222 Unidades de Fomento, equivalentes a \$ 256.435.021 (doscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos treinta y cinco mil veintiún pesos).

Resumen de los perjuicios económicos ocasionados por la tenencia de instrumentos de deuda:



En consecuencia, el perjuicio patrimonial por concepto de instrumentos de deuda causados a los fondos de cesantía administrados por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía II S.A., calculado al 31 de julio de 2015, analizado precedentemente, alcanzó un perjuicio para el fondo CIC de 187.081 Unidades de Fomento y para el fondo FCS de 114.461 Unidades de Fomento, que suma un total de 301.542 Unidades de Fomento, equivalente a \$ 7.564.657.506 (siete mil quinientos sesenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos seis pesos).

2.2-Perjuicio económico en acciones.

La estimación del perjuicio económico de los instrumentos de capitalización (acciones) sigue la misma lógica utilizada en el numeral anterior, como se indica en el informe que sustenta este requerimiento, atendida la particularidad de las acciones se ha estimado prudente considerar únicamente el perjuicio por pérdida en el valor de los activos.

En el caso de las acciones, únicamente el Fondos de Cesantía Solidario tenía en su cartera papeles de Empresas La Polar S.A., según el siguiente detalle: Fondo FCS, fecha 9-06-2011, número de acciones 105.203, precio 2.335,85, valorización \$ 245.738.486, valorización UF 11.258.

A fin de medir el perjuicio económico por la pérdida de valor de las acciones, se ha determinado el precio de la acción mediante un indicador amplio de mercado, ello por cuanto la Bolsa Electrónica de Comercio cuenta con un Índice de Retail, que permite aislar el impacto amplio de mercado de los efectos particulares del caso La Polar, más allá de que al conocerse la noticia negativa, toda la industria se vio afectada, y con ella el Índice Bursátil que le hace seguimiento.

Se presenta un gráfico a continuación donde se muestra la evolución del Índice de Retail, el precio de la acción en la Bolsa de Comercio y el Precio Sintético simulado para este estudio, que se fijó para el 31 de julio de 2015, en \$ 1.494,64 por acción.

De conformidad al precio determinado precedentemente para las acciones de Empresas La Polar al 31 de Julio de 2015 de \$1.494,64/acción, el valor de las 105.203 acciones pertenecientes al Fondo de Cesantía Solidario, habría sido de \$151.422.842, en circunstancias que su valor real en dicha fecha es de \$1.977.816.-

En consecuencia, el perjuicio económico por concepto de pérdida de valor de las acciones de Empresas La Polar S.A., causado al Fondo de Cesantía Solidario administrado por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 11 S.A., calculado al 31 de Julio de 2015, es de 5.957 Unidades de Fomento equivalente a \$149.445.026 (ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil veinte y seis pesos)

En resumen, el perjuicio económico total a los fondos de cesantía administrados por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., calculado al 31 de Julio de 2015, es el siguiente:



Perjuicio total medido en CIC: en UF 187.081; en \$ 4.693.231.470; en dólares 6.982.001. Perjuicio medido en FCS: en UF 120.418; en \$ 3.020.881.613 en dólares 4.494.089. Para dar un total de medidas en UF 307.500; en \$ 7.714.113.083; en dólares 11.476.090.

3.- Relación de causalidad.

El tercer elemento de la responsabilidad extracontractual se extrae de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que entrelaza el hecho doloso o culpable y el daño provocado.

La relación de causalidad tiene por objeto precisar que el daño o perjuicio producido sea causado o motivado por un hecho (acción u omisión) imputable a una determinada persona.

Por lo general, el daño puede resultar de diversas causas (concausas), en cuyo caso, nuestra doctrina y jurisprudencia han estimado suficiente para dar por acreditada la relación de causalidad el hecho que la acción u omisión culposa sea una condición necesaria del daño, sin el cual éste no se habría producido, aunque concurrieren otras causas.

En otras palabras, para determinar si la acción u omisión culposa es condición necesaria del daño basta intentar su supresión hipotética. Si eliminado mentalmente el hecho, el daño no se produce, de ello se sigue que tal hecho es causa necesaria de ese daño. Al revés, si suprimido el hecho, el daño igualmente se habría producido, la causalidad no puede darse por establecida.

Criterios más modernos apuntan a la teoría de la causa adecuada como la forma de resolver el problema de la relación causal. Conforme a ella, podríamos decir que la causa jurídicamente idónea para imputar responsabilidad sobre un resultado nocivo es aquella razonablemente previsible de acuerdo al conocimiento y desarrollo de la sociedad. Para esta teoría el juez de fondo tiene el deber de indagar sobre los estándares ordinarios de conocimiento y desarrollo social para saber si esa causa era razonablemente previsible para su autor, teoría elaborada por los autores Alemanes Von Bar y Von Kries.

No obstante lo anterior, como se indicó en el numeral 1 precedente, la culpa infraccional de Empresas La Polar S.A., por la infracción de sus órganos a los artículos 9, 10, letras a) y f) del 59, todos, de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y artículos 42, 46 y 50 bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, en la forma como se detalló en dicho acápite, solamente requiere la conexión de ilicitud entre la norma de conducta debida y el daño que ésta persigue prevenir.

Como lo sostiene don Enrique Barros Bourie en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual, la finalidad de los ordenamientos legales sobre sociedades anónimas y mercado de valores en cuanto a la responsabilidad de sus gerentes y directores, es la de incentivar el cumplimiento de sus deberes de cuidado y procurar grados significativos de transparencia y lealtad en la gestión de la compañía.

De esta manera, el fin de las normas infringidas por Empresas La Polar S.A., como sociedad anónima emisora de valores, artículos 9, 10, letras a) y f) del



59, todos, de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y artículos 42, 46 y 50 bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, persigue como fin protector el mercado en general e interés social, especialmente las normas sobre mercado de valores persiguen que las decisiones de negocios se adopten sobre la base de información esencial verídica, lo que no sucedió en la especie.

4.- Capacidad legal de su autor.

Finalmente, respecto de la capacidad de Empresas La Polar S.A., se remiten a lo dicho al comienzo del numeral primero de este acápite, esto es, la capacidad de la demandada como persona jurídica en virtud de las actuaciones de sus órganos o de quienes actúan como sus representantes según lo dispuesto en los artículos 550 y 551 del Código Civil.

III.- PETICIONES CONCRETAS.-

En razón de lo expuesto en los capítulos anteriores, en la especie se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos para que proceda la indemnización de daños y perjuicios, y se condene a la demandada al pago de 307.500 Unidades de Fomento, equivalentes al 31 de Julio de 2015 a \$7.714.113.083 (siete mil setecientos catorce millones ciento trece mil ochenta y tres pesos, según el siguiente detalle:

a) 301.542 Unidades de Fomento equivalente a \$7.564.657.506 (siete mil quinientos sesenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos seis pesos) al 31 de Julio de 2015, por concepto de perjuicio patrimonial causado al Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario administrados por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., respecto de los instrumentos de deuda emitidos por Empresas La Polar S.A., según el detalle indicado en el N°2 del capítulo II de esta presentación, o la cantidad que S.S. en derecho se sirva fijar.

b) 5.957 Unidades de Fomento equivalente a \$149.445.026 (ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil veinte y seis pesos) al 31 de Julio de 2015, por concepto de perjuicio patrimonial causado al Fondo de Cesantía Solidario administrado por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., respecto de las acciones de Empresas La Polar S.A., según el detalle indicado en el N°2 del capítulo II de esta presentación, o la cantidad que S.S. en derecho se sirva fijar.

c) Intereses, reajustes y costas.

Por lo que solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra de Empresas La Polar S.A., representada por don Gino Manríquez Ossandón, ambos ya individualizado, y en definitiva acogerla, en todas sus partes, condenando a la demandada reconvencional a las sumas indicadas en las peticiones concretas de la presentación.

NOVENO: Que a fojas 601 y siguientes, se encuentra contestación de la demanda donde se señala que vienen en contestar la demanda promovida en autos por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. ("AFC") en contra de Empresa La Polar S.A. ("La Polar"), solicitando en definitiva



que sea rechazada íntegramente y con expresa condena en costas, ello por las razones de hecho y fundamentos de derecho que pasan a exponer.

Según señalan en lo sucesivo, la presente demanda necesariamente deberá desestimarse con costas, por las siguientes razones:

a) Porque AFC, en su calidad de ex accionista de La Polar, carece por completo de legitimación activa para deducir esta demanda en contra de ésta. Ni siquiera los actuales accionistas de su representada poseen esa legitimación. Los accionistas de una sociedad anónima sólo pueden ejercitar la acción social derivada del artículo 133 bis) de la Ley de Sociedades Anónimas.

b) Porque AFC, en su calidad de ex Tenedora de Bonos de las Series F y G, todos emitidos por La Polar, debió haber accionado bajo el estatuto de la responsabilidad contractual y no extracontractual como lo hizo en la especie, habida consideración de que el vínculo jurídico obligacional que las ligaba eran, precisamente, los respectivos Contratos de Emisión de Bonos.

c) En subsidio, porque La Polar no ha cometido ningún hecho ilícito susceptible de generar la responsabilidad extracontractual que le imputa AFC.

d) En subsidio, porque tampoco existe ninguna relación de causalidad entre los perjuicios demandados por AFC y los presuntos hechos ilícitos erradamente imputados a su representada.

e) En subsidio, porque no existen perjuicios que deban ser indemnizados a AFC.

f) En subsidio, porque en todo caso la presente acción sobre responsabilidad extracontractual se encuentra irremediabilmente prescrita, sin que se haya verificado en la especie ninguna interrupción de esa prescripción.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a) Empresas La Polar S.A.

Su representada es una sociedad que desarrolla dos líneas de negocio: el de *retail* o administración de tiendas por departamento (en las que se ofrece una amplia variedad de productos para el hogar y la familia), y el negocio financiero (a través de la emisión de tarjetas de crédito no bancarias para clientes). Sus orígenes se remontan al año 1920, época en la cual comenzó siendo una pequeña sastrería ubicada en la comuna de Estación Central, Santiago, la que con el paso de los años llegó a constituirse en una de las más importantes tiendas por departamentos del país.

Al día de hoy, conforman esta empresa un grupo de sociedades cuya matriz es Empresas La Polar S.A. la cual fuera constituida como sociedad anónima cerrada el 11 de noviembre de 1998 bajo la razón social Comercial Siglo XXI S.A. y abierta a la Bolsa de Comercio de Santiago en el mes de agosto del año 2003. Actualmente, el negocio de La Polar se encuentra diversificado a través de un conjunto de filiales a lo largo del país, todas las cuales tienen como sociedad matriz a dicha sociedad anónima abierta.



b) Crisis en la empresa y en el mercado del retail. Las repactaciones o renegociaciones unilaterales

Como es de público conocimiento, su representada ha atravesado en los últimos años la crisis más seria que le ha tocado experimentar en su historia la cual, además de haberle causado perjuicios cuantiosísimos, ha perjudicado no sólo a miles de familias vinculadas - directa e indirectamente - a la compañía, sino también, incluso la estabilidad del mercado del retail.

El origen de la referida crisis estuvo, según ha podido demostrarse, en que junto a la gestión ordinaria de la cartera de créditos, se verificaron prácticas ilegítimas -ejecutadas por personas cuya responsabilidad penal, civil y administrativa ha sido o está siendo de terminada por los Tribunales Justicia - que afectaron a cerca de un millón de clientes y que redundaron en la comisión de diversos ilícitos administrativos, civiles y penales.

En efecto, a partir del año 2003, ex ejecutivos de la empresa comenzaron incipientemente una práctica irregular respecto de parte de la cartera vencida de clientes de La Polar, la cual se denominó "normalizaciones" o "renegociaciones en línea sin contacto". Estas operaciones (posteriormente llamadas "repactaciones unilaterales") se materializaban entregándoles a los a los funcionarios de cobranza de La Polar listas de RUT de clientes morosos, a objeto de que los empleados del respectivo *call center*, sin el consentimiento ni conocimiento de los clientes, "normalizaran" dichas morosidades (en vez de cobrarles) interviniendo el sistema y, de paso, extendiendo en el tiempo el compromiso del cliente aplicándole intereses y, en definitiva, mostrándolo como "vigente" o "al día" (y no "moroso"), no obstante que la persona en cuestión no había cumplido con su obligación. Las repactaciones unilaterales se fueron repitiendo a lo largo de los años, llegando a transformarse desde el año 2006 y hasta inicios del 2011, en una práctica habitual y con caracteres de masividad insospechados. Lo anterior permitió que las provisiones por incobrabilidad (Esto es, las estimaciones de cobrabilidad de la cartera, de acuerdo a la información con que se cuenta de la calidad de los clientes, el estado del mercado, la situación del desempleo, el rendimiento histórico, etc.) reflejadas en la contabilidad financiera de la empresa, distaran mucho de la realidad.

Dicha disimulación de los estados financieros, al no producir una disminución de las cuentas de activos por cobrar -como era debido-, género que los estados de resultados de la empresa contuvieran una serie "falsedades". En efecto, a través de estas renegociaciones automáticas, espaldas de los clientes y sin tener la más mínima noción real de si eran creencias que tuviesen una perspectiva siquiera remota de ser cobradas, se producía artificialmente -como se ha dicho- una actualización de parte de la cartera cada vez mayor, dejando a deudores morosos "al día", lo que en definitiva, reflejaba una cartera deudora mucho más "sana" de lo que realmente era, reduciéndose artificialmente el volumen de las provisiones y castigos que hubiesen debido aplicarse.

De este modo, los intereses que se devengaban en contra de los clientes renegociados producto de estas "normalizaciones", se contabilizaban como ingresos y, eventualmente, se distribuían como utilidades, a pesar de que esos



flujos, en los hechos, nunca entraban en la caja, como daba cuenta el déficit operacional de la empresa que se hizo cada día mayor.

Transcurridos ya casi 5 años desde que estallara la crisis, resulta claro tanto para el mercado como para las autoridades reguladoras que todo esto debió y pudo haber sido detectado por la auditora externa de la compañía de la época, PwC; por las que fueran sus clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller Rate, y, por qué no decirlo, también por los departamentos de estudio de inversores institucionales y supuestamente expertos, como lo es la misma actora AFC.

Sin embargo, la gran mayoría de ellos incurrieron en actitudes negligentes y/o en extremo frívolas y pasivas de las cuales hoy pretenden desligarse a través, por ejemplo, de acciones judiciales totalmente improcedentes, como lo es la demanda de AFC en contra de su representada.

c) Lo que ocurrió luego de develadas las irregularidades referidas

El actuar ilegal y concertado, y en muchos casos derechamente delictual, de varios de los que conformaron en un pasado la plana ejecutiva de su representada (Pablo Alcalde, María Isabel Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez, entre otros), sumieron a La Polar en un estado más que complejo del cual -con el mancomunado esfuerzo de sus trabajadores, de su nueva administración, de sus accionistas, y de las autoridades administrativas- ha logrado poco a poco ir solucionando.

En efecto, los multimillonarios perjuicios causados alcanzaron no sólo a la misma compañía (en una magnitud prácticamente incalculable y que la tuvo al borde de la quiebra), sino también a sus accionistas y a muchos de sus clientes, arriesgando en definitiva perjudicar a cientos de familias -vinculadas directa o indirectamente a la empresa - y, - eventualmente, incluso la estabilidad del mercado del retail.

Conscientes de lo anterior, desde el inicio de sus actividades, tanto el Directorio que sucedió al que se encontraba en funciones cuando se develó el escándalo como la nueva plana ejecutiva de La Polar, trabajaron y siguen trabajando incansablemente en procura de esclarecer lo sucedido revertir las ilegalidades cometidas; lograr la viabilidad de la compañía en defensa de los intereses de sus accionistas, sus más de siete mil trabajadores y sus acreedores; reparar los perjuicios causados a más de un millón de clientes; perseguir a todos quienes incurrieron en la comisión e ilícitos buscando determinar su responsabilidad tanto penal como civil; y reestructurar la empresa de forma tal que llegue a ser un modelo dentro de la industria del retail.

Así fue cómo, desde un comienzo, La Polar (i) se puso a disposición de las autoridades, (El Ministerio de Economía; el Servicio Nacional del Consumidor; el Ministerio Público; la Superintendencia de Valores y Seguros, y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.), trabajando de la mano con ellas; (ii) logró un acuerdo con sus accionistas y acreedores obteniendo la aprobación de un Convenio Judicial Preventivo y, posteriormente, un aumento de capital que permitió u viabilidad; (iii) efectuó ingentes esfuerzos -nunca antes vistos en la historia de nuestro país- en procura de reparar los daños causados a



los consumidores afectados; e (iv) inició las investigaciones y análisis para establecer con precisión lo sucedido y accionar penal y civilmente, en contra de quienes causaron el descalabro.

Como ha de suponerlo, el nuevo Directorio de la empresa recibió una sociedad al borde de la quiebra. Fue por ello que a sólo días de haberse integrado, se comenzó el proceso legal de presentación de un Convenio Judicial Preventivo, con el objeto de renegociar con los acreedores los pasivos de la compañía, para lo cual, en agosto de 2011, se presentó ante la jueza árbitro designada -señora Luz María Jordán - el texto de la propuesta inicial de ese convenio y luego, en el mes de noviembre de dicho año, se presentó la propuesta final a ser votada en la Junta de Acreedores, la que fue, finalmente, aprobada por unanimidad, con el voto conforme del 99% de los acreedores presentes en la junta, que en su conjunto, representaban el 98,5% del total del pasivo de la empresa.

Tal acuerdo con los acreedores de su representada constituyó una situación inédita en Chile pues, en la especie, no se trataba sólo de instituciones bancarias (habituadas a este tipo de situaciones), sino también de administradoras de fondos de terceros como la demandante, para quienes era una situación completamente nueva y compleja, puesto que se mezclaban sus roles de accionistas y acreedores. Se trataba entonces de un escenario en donde se entremezclaban acreedores con reguladores diferentes, con leyes y reglamentos diversos, y con intereses disímiles. No obstante todo lo anterior, fueron todos capaces de confluir en el Convenio Judicial preventivo finalmente aprobado prácticamente por unanimidad.

Ello le dio a la nueva administración de La Polar la flexibilidad requerida para estabilizar la empresa en los primeros años logrando, acto seguido, un exitoso aumento de capital que le otorgaría la viabilidad necesaria. Ese aumento recaudó más de ciento treinta mil millones de pesos, recursos que han sido destinados tanto a financiar la operación y recuperación de su representada, como también a reparar a los clientes/ consumidores afectados de conformidad con el plan de compensación convenido con el Ministerio de Economía y el Servicio Nacional del Consumidor ("SERNAC"), y aprobado por la justicia ordinaria en el mes de diciembre de 2012. En virtud de ese acuerdo conciliatorio su representada ha desembolsado una cifra superior a los catorce mil millones de pesos, además de implementar acciones sin precedentes en reparar a los consumidores perjudicados.

En paralelo a todo lo anterior, desde el mismo mes de junio del año 2011 - época en que se "destapó" el escándalo por todos conocido - la administración de La Polar puso también sus esfuerzos en perseguir a los responsables de los ilícitos, negligencias e irregularidades cometidas, no sólo a objeto de lograr recuperar, al menos en parte, los miles de millones pesos perdidos por la empresa, sino también para colaborar con la justicia y las autoridades reguladoras en el esclarecimiento de los hechos, a final determinación de las respectivas responsabilidades, y las consecuentes sanciones -penales y civiles- de todos quienes tuvieron algún grado de participación en lo sucedido.



En tal contexto, el mismo mes de junio de 2011, La Polar interpuso una querrela criminal en contra de Pablo Alcalde Saavedra, Julián Moreno de Pablo, María Isabel Farah Silva, Nicolás Ramírez Cardoen, y en contra de todos quienes resultaren responsables, de infracciones a los artículos 59 letras "a)" (*entrega o certificación maliciosa de antecedentes o hechos falsos*) y "f)" (*declaraciones maliciosamente falsas de directores, administradores y gerentes de emisores de valores de oferta pública*) de la Ley de Mercado de valores, y al artículo 157 de la Ley General de Bancos (*los directores y gerentes de una institución fiscalizada por la Superintendencia de Bancos que, a sabiendas, hubieren disimulado la situación de la empresa*).

Esta querrela fue posteriormente ampliada por la empresa (en el mes de julio de 2011), en contra de Pablo Fuenzalida May e Iván Dinamarca Contreras (ampliación que se refiere a los mismos ilícitos arriba mencionados) y, finalmente, en el mes de septiembre de 2011, La Polar presentó una segunda ampliación de querrela, ahora en contra de los señores Alcalde, Moreno, Farah, Ramírez y Fuenzalida por el delito de asociación ilícita.

Adicionalmente, pero con miras a determinar las responsabilidades civiles que a cada cual le cupieron en la crisis (atendida la brutal negligencia con la que desarrollaron sus respectivas labores), y a objeto de lograr obtener las indemnizaciones de perjuicios correspondientes, su representada inició procesos judiciales tanto en contra de la que fuera su auditora externa (PwC), como también en contra de las dos empresas clasificadoras de riesgos que calificaron los títulos y solvencia de La Polar durante los últimos años (Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.)

Por último, y en lo que respecta a los ex ejecutivos que tuvieron responsabilidad en los ilícitos y/o negligencias cometidas, nuestra representada también interpuso las pertinentes acciones civiles indemnizatorias.

En consecuencia, queda de manifiesto que La Polar no sólo fue víctima del mal obrar de sus ex ejecutivos ya mencionados, sino que, además, ha desplegado con éxito, todas y cada una de las medidas necesarias para mitigar y reparar el perjuicio causado por esas personas y, además, para lograr que la compañía siga operando normalmente.

II.- LA DEMANDA DE AFC

El presente libelo se ha dirigido en contra de su representada, haciendo valer el estatuto jurídico de la responsabilidad extracontractual. (Ver página 15 y siguientes de la demanda). Afirma la actora que al 9 de junio de 2011 y antes de conocerse las noticias sobre la cartera de deudores de La Polar, AFC contaba con "inversiones" en esta última consistentes en bonos y acciones. (Ver página 12 de la demanda). Continúa la demandante señalando que las prácticas seguidas al interior de La Polar, en relación a la gestión de su cartera crediticia e información financiera entregada al público, habría generado una serie de efectos económicos negativos para sus inversores, lo que a su vez habría afectado gravemente el valor del patrimonio administrado por AFC. (Ver página 13 de la demanda).



Destacamos desde ya que los bonos de los AFC dice haber sido tenedora, Series F y G, fueron recibidos por los acreedores de la Polar con posterioridad a la aprobación del referido Convenio Judicial Preventivo. En consecuencia, esos bonos se emitieron a partir de la extraordinaria situación patrimonial de la compañía. Los acreedores de La Polar -incluido por cierto la demandante AFC- aceptaron esta realidad -posterior a junio de 2011- desde siempre, por lo que a pesar de detentar la posibilidad de instar por la quiebra de quiebra además de otros derechos en su calidad de acreedores, prefirieron y aceptaron el camino del Convenio Judicial Preventivo, concurrieron a su aprobación prácticamente por unanimidad.

Al momento de precisar el sustento de su pretensión la actora indica que éste se encuentra en la responsabilidad que le cabría a la compañía por las acciones de sus "ejecutivos principales", las cuales tendrían, en la más que errada opinión de AFC, consideradas como actos propios de la empresa; bien se sabe que lo mal que obraron fue ejecutado por los ex ejecutivos y no por La Polar, esta última es víctima, y la contraria, por ende, yerra en su calificación jurídica lo que se desprende del propio tenor del libelo.

En definitiva, afirma AFC, la responsabilidad de La Polar derivaría a la que esos ex ejecutivos (Pablo Alcalde, María Isabel Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Martín González, Pablo Fuenzalida, Marta Bahamondes e Ismael Tapia), crearon y fomentaron un sistema que tenía por objeto adulterar los resultados financieros de la empresa y de entregar formación falsa al mercado y reguladores acerca de la situación económica de la misma. (Página 35 de la demanda). Al describir el fundamento de su supuesta legitimación activa para accionar en contra de su representada, AFC señala en las páginas 13 y siguientes del libelo que, al 28 de marzo de 2012 era titular de 105.203 acciones de La Polar, (Deben dejar sentado desde ya una abierta "inexactitud", no saben si mero descuido o derechamente por mala fe. En efecto, en la página 41 AFC señala expresamente que el 29 de marzo de 2012 habría procedido a la venta total de sus acciones de La Polar. Consta del certificado del Depósito Central de Valores ("DCV") que se acompaña en un otrosí, que AFC no era dueña de ninguna acción de La Polar al día 28 de marzo de 2012, día anterior a la venta de las mismas de acuerdo a lo señalado por la actora en la página 41 del libelo.), y que al 25 de agosto de 2015, era titular de 946.140.221 Bonos de la Serie F y 23.146.583 Bonos de la Serie G (emitidos por La Polar), todos instrumentos de los que posteriormente se habría desprendido por venta de los mismos.

En definitiva AFC, en su calidad de ex accionista de su representada y ex tenedora de bonos de su emisión, sostiene que La Polar habría actuado con culpa al no establecer los mecanismos de control externo que la diligencia exige para prevenir que las actuaciones de sus ex accionistas causaran los daños provocados a ella, (Página 36 de la demanda.) , cuyo resarcimiento demanda en esta sede, y que corresponden, en sus palabras, a la drástica caída en el precio de sus acciones y a la diferencia entre los flujos que se deberían haber percibido en razón de sus bonos, y los que realmente se percibieron.(Página 42 de la demanda).

III.- EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE SE OPONEN A LA DEMANDA



Falta de legitimación activa de AFC en cuanto ex accionista de La Polar

La demanda de autos en contra de su representada es por completo improcedente, por cuanto la actora carece de legitimación activa para dirigirse en contra de la entidad emisora de las acciones de las cuales fue titular.

El resarcimiento de los perjuicios patrimoniales consistentes en la pérdida de valor de esos títulos accionarios obviamente no puede dirigirse en contra de La Polar, sino que en contra de los responsables de la debacle obre los cuales el ordenamiento jurídico les confiere acción, entre los que se encuentran PwC, las sociedades que fueran clasificadoras de riesgo de su representada y, fundamentalmente, los ex ejecutivos a los que FC les dedica páginas y páginas en su demanda (específicamente 23 de un total de 51). (Ver desde la página 16 hasta la 38 de la demanda.)

De hecho, menester es destacar que esta es la primera vez que un accionista o ex accionista de La Polar, la demanda sólo a ella por los lícitos cometidos por sus ex ejecutivos. Todos los demás han demandado también a estos últimos. La Polar no fue multada por la Superintendencia Valores y Seguros, como sí ocurrió con esos ex ejecutivos e incluso con los ex Directores. Asimismo, el Ministerio Público se desistió de cualquier acción penal contra la compañía, no así en contra de los ex ejecutivos cuyas condenas son de público conocimiento.

En realidad, la demanda parece más una querrela criminal dirigida en contra de los tristemente célebres ex ejecutivos de La Polar, que una verdadera demanda civil indemnizatoria en contra de esta última, lo que ratifica la falta de legitimación activa que explicaran a continuación.

En nuestro ordenamiento jurídico (y también en el derecho amparado) los accionistas y ex accionistas de una sociedad anónima carecen de legitimación activa en contra de la sociedad emisora de sus títulos por el perjuicio que puedan sufrir a virtud de la variación experimentada por el precio de las acciones debido a actos de culpa o fraude de los gerentes o ejecutivos principales de aquella, principio básico que AFC parece desconocer.

La legitimación activa es el primer elemento que el juzgador debe considerar al examinar si concurren las condiciones de la acción, la cual se encuentra vinculada con la titularidad de la situación controvertida en un juicio, siendo un presupuesto de fondo de procedencia de la acción.

En concreto, *"la legitimación sirve para determinar los sujetos que pueden ser 'justa parte' en un determinado litigio, esto es, quienes tienen la calidad de legítimos contradictores para discutir sobre el objeto de determinado proceso"* (Romero Seguel, Alejandro, Nota sobre la legitimación en la jurisprudencia, Revista Chilena de Derecho, vol.25, 1998, pág. 691.) Como se puede apreciar de lo expuesto, la legitimación es una cuestión que viene definida por las reglas del derecho material, las cuales permiten definir quién es el legítimo contradictor, para efectos de sostener o de contestar una pretensión.



Como se desprende de la propia demanda, y en lo que atañe a la presente excepción, se encuentran ante un caso de responsabilidad de ex gerentes o ejecutivos de una sociedad anónima ya sea por infracción de sus deberes de cuidado y lealtad, como por la comisión de diversos ilícitos civiles y penales.

En dicho escenario, el ordenamiento jurídico regula que esos ex ejecutivos, responden *personalmente* por los daños ocasionados al patrimonio social y, cuando el daño sufrido deriva del menor valor de las acciones (a consecuencia de la responsabilidad personal de los ejecutivos de la sociedad anónima por infracción de sus deberes de cuidado y lealtad) los accionistas no tienen acción contra la sociedad, pues es la compañía quien sufre el daño directo.

El interés patrimonial de los accionistas, en un caso de responsabilidad personal de los ex ejecutivos de la sociedad anónima por infracción de sus deberes, recibe protección por la vía del ejercicio de la llamada "acción derivativa" (Romero, Alejandro y Díaz, José Ignacio, La acción de responsabilidad civil del art. 133 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, RDJ, Tomo XCIX, N° 3.), consagrada en el artículo 133 bis) de la Ley de Sociedades Anónimas. ("Artículo 133 bis.- Toda pérdida irrogada al patrimonio de la sociedad como consecuencia de una infracción a esta ley, su reglamento, los estatutos sociales, las normas dictadas por el directorio en conformidad a la ley o las normas que imparta la Superintendencia, dará derecho a un accionista o grupo de accionistas que representen, a lo menos, un 5% de las acciones emitidas por la sociedad o a cualquiera de los directores de la sociedad, a demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio de la sociedad.

Las cuotas a que hubiere lugar serán pagadas a los demandantes y no podrán, de forma alguna, beneficiar a la sociedad. Por su parte, si los accionistas o el director demandantes fueron condenados en costas, serán exclusivamente responsables de éstas.

Las acciones contempladas en este artículo, son compatibles con las demás acciones establecida en la presente ley".)

Según sostiene la dogmática, y citando en particular al profesor Juan Esteban Puga Vial, *"la doctrina comparada distingue la acción social, que es la acción directa (conocida también como acción subsidiaria) por la cual se pretender resarcir a la sociedad del perjuicio sufrido merced de la mala gestión; y la acción individual que pretende resarcir directamente al accionista por el daño sufrido en su patrimonio. Pero, como se verá, todas esas acciones lo son en contra de los directores y/o gerentes como personas naturales y no contra la sociedad dañada por aquellos"*

Ésta última acción, la individual, como bien lo indica el profesor Puga Vial en su Informe en Derecho que se acompaña en un otrosí de esta presentación, (Páginas 3 a 5 del Informe en Derecho citado.) , se ha entendido como una acción excepcional que tendría aplicación sólo en aquellos casos en que el perjuicio recaiga exclusivamente sobre el patrimonio de un accionista o sobre un grupo de accionistas pertenecientes a una misma clase de acciones, no así cuando el perjuicio afecta a todas las clases de acciones y a todos los accionistas, como el caso de autos. De manera que *"en el derecho comparado, siempre que un daño es sufrido por la sociedad, no procede que el accionista o*



XWBEFJXXBE

ex accionista demande a la sociedad por ese daño aunque de él se siga un perjuicio individual reflejado en el menor valor de sus papeles." (Página 5 del Informe en Derecho referido).

Llamamos la atención que el profesor Puga es socio de los abogados patrocinantes de esta causa señores Cristian Muga Aitken y Leonardo Battaglia Castro en el mismo Estudio Jurídico, (ver <http://www.pugaortiz.cl/equipo/>), y no obstante ello estos últimos represente a AFC en este juicio, sobre la base de argumento jurídico totalmente contrario al que su propio estudio adhiere.

Las conclusiones del profesor Puga con categóricas: *"Los accionistas presentes o pasados no tienen acción en contra de la sociedad anónima por la variación que experimentan los precios de las acciones de la sociedad que ha sufrido menoscabo patrimonial merced de actos de culpa, negligencia o fraude de sus directores y/ o gerentes. Los accionistas sólo pueden ejercitar la acción social derivada del art. 133 bis) de la Ley de Sociedades Anónimas"* .(página 10 del Informe en Derecho Citado.)

De esta forma, un accionista o ex accionista no cuenta con legitimidad activa para demandar a la sociedad cuyas acciones posee o poseía, en razón de una disminución del valor que éstas hayan podido experimentar, pues es otra la vía de acción implementada por el legislador para dichos efectos.

La explicación de ello es muy sencilla. A virtud de un daño directo sufrido por la compañía, los accionistas sufren un daño material indirecto. El menor valor de sus acciones, en un escenario posterior a un escándalo público como el vivido por la empresa, es consecuencia del daño directo sufrido por la compañía, debido a lo cual es inadmisibles plantear un interés patrimonial autónomo o diverso de los accionistas respecto de la compañía por el menor valor de sus acciones.

De lo anterior, se deriva como consecuencia necesaria que un ex accionista no puede demandar a la sociedad por el daño experimentado a virtud de la disminución de valor de las acciones que poseía. Ni siquiera los actuales accionistas tienen acción directa contra la empresa si el daño reclamable es el menor valor de sus acciones producido por la infracción de los gerentes y ex ejecutivos de sus deberes de cuidado y lealtad.

Como sostiene el profesor Puga, a propósito de un daño derivado del incumplimiento de las obligaciones de los directores de la compañía: *"No presentan mayores problemas (las acciones directas de los accionistas en contra de los directores) cuando el daño se produce directamente en el patrimonio del accionista (...). Pero cuando el daño del accionista se revela en una depreciación del valor de sus acciones merced de un daño que sufre a sociedad, en tal caso es la sociedad la titular única de la acción"* (Puga Vial, Juan Esteban, La Sociedad Anónima: y otras sociedades por acciones en el derecho chileno y comparado. Editorial Jurídica de Chile, 2011, pág. 495.)

En este sentido, el profesor Puga Vial distingue lúcidamente en su informe entre la responsabilidad establecida en el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas (Art. 133. "La persona que infrinja esta ley, su reglamento o en su caso, los estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está obligada a la indemnización de perjuicios. Lo anterior es sin



perjuicio de las demás sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan.

Por las personas jurídicas responderán además civil, administrativa y penalmente, sus administradores o representantes legales, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción.

Los directores, gerentes y liquidadores que resulten responsables en conformidad a los incisos anteriores, lo serán solidariamente entre sí y con la sociedad que administren, de todas las indemnizaciones y demás sanciones civiles o pecuniarias derivadas de la aplicación de las normas a que se refiere esta disposición) y el citado artículo 133 bis) de la misma, al señalar que la primera "se refiere a perjuicios que una persona o la sociedad cause a un tercero y no a la sociedad misma" (Página 6 del Informe en Derecho que se acompaña en un otrosí), mientras que la segunda regula las situaciones en que los daños se produzcan a la sociedad.

Ello en virtud de que el inciso tercero del artículo 133 citado se refiere a la responsabilidad solidaria que tendría la sociedad con los directores y gerentes responsables, de manera que *"mal puede ser que la sociedad sea solidariamente responsable por daños causados a sí misma"* (Ídem), añadiendo que *"si el art. 133 se refiriera a los daños causados a la sociedad, no se entendería la necesidad de introducir el art. 133 bis)"*. (Ídem) Esa norma se funda en la noción de que *"el valor de una acción en sí no existe"* (Página 8 del Informe en Derecho citado)., pues ello depende de una serie de factores. Noción que ha sido recogida por la tesis ampliamente mayoritaria que considera *"que las acciones no valen por patrimonio sino por el flujo futuro esperado."* (Ídem)

Es así, que *"el accionista mientras tiene su acción no gana ni pierde nada merced de perjuicios sufridos por la sociedad. Su cosa varía de valor, pero no se pierde la cosa."* (Ídem) Lo que implica que, si bien transitoriamente la acción podría variar de precio en el mercado, el daño podría no llegar a producir perjuicio al accionista, toda vez que la sociedad puede ejercer una acción de indemnización de perjuicios en contra de los responsables y ser reparada por los daños sufridos.

El profesor Enrique Barros Bourie comparte la opinión del profesor Puga Vial *"por aplicación de las reglas generales de la responsabilidad civil"*. En su obra principal, sostiene que *"la acción de responsabilidad intentada por la sociedad (en contra de los directores y gerentes) debe tenerse por excluyente del interés del accionista, porque si la sociedad Recibe indemnización, el accionista obtiene su parte en el mayor valor que adquiere la compañía"* (Barros Bourie, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pág. 866.) De lo contrario, sólo se aumentaría el daño sufrido por la sociedad. En efecto, de admitirse que existe tal legitimación activa de los accionistas en su contra, la compañía no sólo resultaría víctima del perjuicio, sino que además sería responsable de indemnizar a sus accionistas por ello.

Estas citas de la más autorizada doctrina nacional ratifican lo que hemos dicho: es inadmisibles plantear un interés patrimonial autónomo diverso de los accionistas respecto de la compañía, por el menor valor de sus acciones, entendido como daño derivado de la responsabilidad personal de gerentes y ex



ejecutivos de la sociedad anónima por infracción de sus deberes de cuidado y lealtad. Luego, sin accionista de la compañía no tiene acción directa contra ella en este tipo de situaciones, menos podría un ex accionista tener legitimidad activa para el ejercicio de una acción directa contra la compañía cuando ha dejado de serlo a virtud de un acto voluntario de venta de participación accionaria.

La legitimación, como requisito de la acción, es uno de los principales elementos que se deben considerar al momento de analizar la pretensión de la demandante, pues si falta la legitimación, sólo se puede llegar a la conclusión de que no hay acción.

La legitimación activa, que no es sino la exigencia procesal de que cierta demanda sea propuesta por las personas que estén legitimadas para actuar en un proceso determinado, (Ídem), sólo puede ser valorada en consideración a la pretensión concreta en un caso particular. (Ortelles Ramos, Manuel, Derecho Procesal Civil, pág. 142, Quinta edición, 2004, Editorial Aranzadi, Navarra, España). De modo que, como se puede apreciar, no cabe duda de que se trata de un presupuesto procesal cuya falta acarrea como consecuencia necesaria el rechazo de la pretensión de quien no está legitimado. (Ídem. En el mismo sentido Figueroa Yávar, Juan Agustín, ¿En qué momento procesal puede alegarse la falta de Legitimidad activa?, Revista de Derecho Procesal, Año 1997, N° 19, pág. 67, Departamento Procesal Facultad de Derecho Universidad de Chile.)

Exactamente como el caso de autos, en que se desprende inequívocamente de la propia demanda de AFC que la responsabilidad de los perjuicios ocasionados es de los ex gerentes o ejecutivos de su representada, AFC, en su calidad de ex accionista, carece de la legitimación activa para dirigirse en contra de La Polar con el objeto de reparar los perjuicios que sufriera por la pérdida de valor de sus acciones, todo lo cual justifica que se rechace la demanda, con costas.

b) La demandante, en su calidad de ex Tenedora de Bonos de La Polar, en todo caso, debió haber demandado bajo el estatuto de la responsabilidad contractual y no lo hizo

Los artículos pertinentes de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, que se citan a continuación establecen clara e indubitadamente que el vínculo que existe entre el emisor y los tenedores de bonos es de índole contractual y que corresponde al respectivo Contrato de Emisión de Bonos. El mejor ejemplo de ello es el artículo 118 de la citada Ley que se refiere a la aceptación por parte de los tenedores de lo establecido por el emisor en el contrato de emisión, en conjunto con el representante de los tenedores de bonos, por el solo hecho de haber suscrito un bono. Al hacerlo, ratifica todo lo estipulado al respecto.

En efecto, el citado artículo 118 previene que: *"La suscripción o adquisición de bonos implica para el suscriptor o adquirente, la aceptación y ratificación de todas las estipulaciones, normas y condiciones establecidas en la escritura de emisión y en los acuerdos que sean legalmente adoptados en las juntas de tenedores de bonos"*.

Como sabemos y consta de la demanda, AFC afirma haber detentado calidad de tenedora de bonos de las Series F y G, todos emitidos por La Polar.



Las características y condiciones de la emisión de estos bonos están estipuladas en el "Contrato de Emisión de Bonos entre Empresas La Polar como Emisor y Banco de Chile como representante de los Tenedores de bonos", el cual fue suscrito entre el Emisor (La Polar) y el Banco de Chile por medio de escritura pública de fecha 21 de diciembre de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, y modificada por escrituras públicas de fecha 21 de marzo, 8 de mayo y 28 de mayo, todas el año 2013, y otorgadas en la misma Notaría, y por escrituras públicas fechas 12 de septiembre y 30 de octubre, ambas del año 2014, otorgadas en la Notaría de Santiago de don Sergio Carmona Barrales.

Por su parte, la solicitud de inscripción de esa emisión de bonos fue debidamente aprobada por el Directorio de la Polar (el emisor), según consta en el Acta de Sesión de Directorio, reducida a escritura pública con fecha 21 de diciembre de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur.

Como se sabe, el primer requisito para accionar en sede de responsabilidad aquiliana, es la ausencia de todo vínculo contractual. Como se ha visto, dicho requisito no se verifica en la especie, habida consideración que, como ya vimos y se demostró, la relación obligación entre AFC, en su calidad de tenedora de bonos y La Polar es de naturaleza contractual, todo lo cual justifica que se proceda al pronto y categórico rechazo de la demanda, con expresa condena en costas.

d) En subsidio, en la especie La Polar no cometió ningún hecho ilícito.

En subsidio, y para el más que improbable e hipotético evento que se rechace las excepciones o defensas opuestas en los acápites anteriores, solicitan el rechazo de la demanda con costas, por las siguientes razones.

La demandante argumenta que la responsabilidad de La Polar radicaría en una especie de "culpa de la organización" toda vez que, en su particular entender, atendido que La Polar actúa por medio de su Directorio, gerentes y ejecutivos principales, la compañía resultaría responsable por el mal obrar de ellos y, por ende,. Estaría obligada a indemnizar la totalidad de los perjuicios ocasionados, incluso con prescindencia de si dichos órganos o administradores actuaron o no dentro de sus potestades.

Como bien se sabe "responsabilidad interna" es la que corresponde a directores y gerentes ante la sociedad por infracción de sus deberes fiduciarios, como los enumerados *en detalle* en las páginas 16 y siguientes de la demanda. Por su parte, la "responsabilidad externa" es la que les corresponde ante terceros ajenos a la sociedad por los daños que en el ejercicio de sus funciones podrían haberles producido, determinada por todos aquellos con quienes esos gerentes, directores o ejecutivos principales no tengan una relación contractual directa, como clientes, trabajadores, acreedores y proveedores de la sociedad.

En ésta última, es la sociedad quien responde directamente ante los terceros por el ilícito en que ésta incurrió en razón de lo actuado por sus administradores, otorgándosele un derecho de reembolso en *"contra de las personas naturales que actúan como sus órganos o representantes si han*



incurrido en culpa en sus relaciones internas con la compañía". (Ídem, pág.819) Ello, en razón de que *"quienes conforman los órganos de la persona jurídica no tienen un deber de cuidado específico respecto de terceros, como sí lo tiene la sociedad que realiza una actividad riesgosa."* (Ídem)

Es ésta la responsabilidad a la que se refiere el profesor Barros Bourie al señalar que la sociedad responde por los actos de sus administradores como actos propios, pues los terceros no tienen una acción directa contra gerentes y directores, a menos que pueda imputárseles la infracción de un deber de cuidado para con el tercero y no para con la sociedad. (Ídem)

Sin embargo, no es esta la responsabilidad que concurre en el caso de autos, ya que si bien técnicamente los accionistas podrían considerarse como terceros, pues carecen de relación contractual con los directores y gerentes, en virtud de la especial protección que la ley les otorga, su situación es análoga a la de las relaciones internas de la sociedad, por lo que la responsabilidad que le corresponde a directores y gerentes respecto de ellos se regula por las reglas de la responsabilidad interna. (Ídem, pág. 818)

En efecto, el profesor Barros Bourie expresa que es conveniente tratar la responsabilidad de los administradores con los accionistas *"en paralelo con la responsabilidad de directores y gerentes para con la sociedad, porque el derecho les reconoce acciones indemnizatorias individuales (en contra de los administradores .q en interés personal) y derivativas (en interés de las sociedad)"*

No podría ser de otra manera. De lo contrario no se explica el derecho a reembolso que tiene la sociedad contra sus administradores si los accionistas estuvieran facultados para demandar directamente a la sociedad y a los directores y gerentes por el mismo ilícito, pues en tal caso el accionista se estaría enriqueciendo a costa de los directores y gerentes que deberán indemnizar al accionista y, posteriormente, reembolsar a la sociedad por la misma infracción.

De este modo, por la infracción de los deberes fiduciarios que tienen los gerentes y directores de una sociedad para con ésta, como el caso de autos, no es responsable la sociedad ante sus accionistas, pues al carecer de la acción de reembolso que tienen contra éstos al responder ante terceros, mal podrá hacérseles responsable por un perjuicio que ella misma sufre; en especial cuando la única acción que tienen los accionistas contra los directores y gerentes es a nombre de la sociedad.

En consecuencia, La Polar no ha cometido ningún hecho ilícito respecto de AFC que sea apto para generar la responsabilidad extracontractual alegada por ésta. Como creen haber demostrado, esta demanda indemnizatoria debería haber sido dirigida en contra de los únicos responsables de los ilícitos latamente descritos en el libelo, con costas.

d) En subsidio, no existe relación de causalidad entre los perjuicios demandados y el hecho ilícito que supuestamente habría cometido La Polar

También en subsidio, y para el improbable e hipotético evento que se rechace todas las excepciones o defensas anteriormente interpuestas, piden el categórico rechazo de la demanda, con costas, porque no es posible sostener



que los supuestos daños que alega la demandante son atribuibles a su representada.

En efecto, de los hechos del libelo no es posible dar por establecida una relación de causalidad jurídicamente relevante entre los perjuicios que alega la demandante y la conducta que se le atribuye a La Polar.

La demandante argumenta en su libelo que la cotización de sus títulos accionarios y de crédito fueron gravemente afectados, lo que habría provocado que el valor de las inversiones realizadas sufrieran graves perjuicios.

Como saben y se reconoce en la demanda, AFC ya era accionista de La Polar al tiempo en que comenzaron a producirse las defraudaciones. Asimismo, la demandante reconoce que para establecer una relación de causalidad se debe apuntar a la "teoría de la causa adecuada", conforme a la cual *"la causa jurídicamente idónea para imputa responsabilidad sobre un resultado nocivo es aquella razonablemente previsible de acuerdo al conocimiento y desarrollo de la sociedad. Para esta teoría el juez del fondo tiene el deber de indagar sobre los estándares ordinarios de conocimiento y desarrollo social para saber si esa causa era razonablemente previsible para su autor, teoría elaborada por los autores alemanes Von Bar y Von Kries"*. (Páginas 48 y 49 de la demanda.)

Al respecto señala el profesor Barros Bourie *"desde el punto de vista de la justicia, lo determinante es la aptitud potencial que tiene el hecho culpable para producir daño"* (Barros Bourie, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, pág. 396, Primera Edición, 2007, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile.) Como se puede apreciar de los hechos que la demandante atribuye a La Polar, pero muy especialmente a sus ex ejecutivos, no todos tienen la aptitud potencial para producir el daño, pues "de la sola circunstancia de que un hecho negligente aparezca como condición necesaria de un cierto daño, no se sigue que su autor deba ser siempre tenido por responsable" (Ídem, pág. 383).

De modo que, en virtud de las características particulares de los hechos que se denuncian y la multiplicidad de personas involucradas aunque no demandadas formalmente, basta leer desde la página 16 hasta la 38 de la demanda, corresponderá al Tribunal determinar que daños son consecuencia de tales o cuales hechos demandados, debiendo distinguir los hechos que guarden una adecuada relación de proximidad con los supuestos daños y que a la vez tengan la aptitud potencial para reducirlos.

Así, los hechos relatados en la demanda que se imputan a su representada no podrían generar ni generaron consecuencias dañosas para la demandante, toda vez que, como se desprende claramente del texto del libelo (y de la realidad de lo sucedido), las conductas imputadas a La Polar no determinaron la decisión de la demandante de invertir en acciones y bonos emitidos por su representada pues ella se tomó con mucha anterioridad, por lo que difícilmente se podría llegar a la conclusión de que la supuesta falta de contrapesos, controles y filtros organizacionales que la demandante imputa a La Polar, tienen la aptitud potencial de producir el daño.

Más aún, incluso si se determina que tales hechos fueron relevantes para producir el supuesto perjuicio a la demandante, se debe tomar en cuenta que hay



casos en que la intervención de un tercero puede interrumpir la imputación normativa de las consecuencias dañosas, aunque no se haya interrumpido la causalidad natural, ya que *"puede ocurrir que el tercero haya actuado desviando el curso ordinario de los acontecimientos, en términos que el daño consecuente ya no puede ser razonablemente imputado al autor del daño inicial."* (Ídem pág. 411)

Para establecer la concurrencia de la así llamada prohibición de regreso en los términos citados, es necesario determinar si el daño posterior tuvo como causa adecuada el hecho culpable inicial de un tercero (en el caso los ya referidos ex ejecutivos) (Ídem, página 412), de modo tal que *"el hecho culpable que provocó el primer daño carece de relevancia sustancial en el acaecimiento del daño posterior"*. (Ídem.)

La conducta de los ex ejecutivos (latamente desarrollada en el libelo), es de tal magnitud que ha interrumpido la imputación normativa del daño, no siendo posible atribuir los perjuicios a los supuestos hechos que se le imputan a su representada, excluyendo así la relación de causalidad necesaria para que exista responsabilidad, todo lo cual justifica que se rechace la demanda, con costas.

e) En subsidio, inexistencia de Perjuicios

Sin perjuicio de las anteriores defensas, y en subsidio de ellas, controvierten expresa y formalmente la existencia de todos y cada uno de los perjuicios que la demandante detalla en el libelo. Es por ello que, en el más que improbable e hipotético evento que se rechace dichas excepciones, AFC deberá acreditar, de forma fehaciente, su naturaleza, especie y monto.

f) En subsidio, la acción se encuentra prescrita

En subsidio, de todas las anteriores, y para el caso que ninguna de esas defensas sean acogidas, oponemos formalmente la excepción de prescripción en los siguientes términos.

Consta de la demanda, que la conducta que A FC le imputa a La Polar es la realización de diversos hechos ilícitos por parte de sus ex ejecutivos, a los que ya se han referido, y que fueron develados al mercado y al público en general el día 9 de junio de 2011, mediante el hecho esencial que su representada le comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros ese día, no obstante que venían perpetrándose con anterioridad a esa fecha como la propia AFC reconoce. (Ver página 17 de la demanda.)

El artículo 2332 del Código Civil, aplicable al caso pues la demanda esgrime el estatuto de la responsabilidad extracontractual, prescribe textualmente que: *"Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto"*. Entre el 9 de junio de 2011 y la fecha de notificación de esta demanda (3 de febrero de 2016), transcurrieron en exceso los cuatro años para que se declare la prescripción extintiva antes referida.

Ciertamente, la medida prejudicial preparatoria que rola en autos, no tiene el efecto de interrumpir esa prescripción en los términos del artículos 2518 en relación con el artículo 2503 N°1 del Código Civil, ello por las siguientes razones.



La medida prejudicial preparatoria no exige que el futuro actor deduzca efectivamente la demanda que pretende preparar, como si ocurre con las prejudiciales precautorias (artículo 280 del Código de Procedimiento Civil), razón por la cual, en realidad, no es una verdadera demanda en los términos del citado N°2 del artículo 2503 del Código Civil. Al respecto al Excm. Corte Suprema ha resuelto en ese sentido que *"la solicitud de citación al reconocimiento de firma y confesión de deuda, no es una demanda, sino el principio de una tramitación de carácter previo a una acción judicial, una verdadera medida prejudicial del juicio ejecutivo; y, por consiguiente, una gestión de esta naturaleza no basta para interrumpir la prescripción"*. (Bustos Gómez, Ricardo: La prescripción extintiva ante la jurisprudencia, Editorial Jurídica la Ley, Santiago, 2004, p. 488-489, citando Corte Suprema, 02 de septiembre de 1938, R.D.J. t: 35, sec. 1ª, pág.225 (con.3º) y también los siguientes fallos relacionados Corte 06 mayo 1998, F.M. N° 359, sent. 12. pág 670; Corte Suprema, R.D.J. T. 36, sec.1ª, pág. 225; Corte 19 diciembre 1979, F.M., sent. 5, pág. 453; Corte Suprema, 05 diciembre 1979, R.D.J. T. 76, sec. 4ª, pág. 454.)

Sostener lo contrario implicaría el absurdo e injusticia que cualquier pretendido acreedor, interponga en contra de su potencial deudor una medida prejudicial preparatoria para obtener una interrupción eterna de la prescripción -pues esa persona no se encuentra en la obligación de deducir la demanda propiamente tal -, lo que ciertamente repugna con los principios más elementales de nuestro ordenamiento jurídico.

En cualquier caso, la Excm. Corte Suprema ha resuelto que: *"Los efectos interruptivos de la demanda judicial duran mientras dure la instancia a que la demanda de origen, mientras permanezcan vinculados por ella el acreedor demandante y el deudor demandado"* (Corte Suprema, Rol 2370-2010, 29 de julio de 2011.)

Asimismo, el Máximo Tribunal ha fallado que: "De esta manera, para clarificar la extensión del término en que se produjo la interrupción de la prescripción deberá, entonces, determinarse la duración de la instancia procesal respectiva, precisando para esos efectos su comienzo o el momentos en que se produjo el acto interruptivo a través de la notificación de la demanda y la fecha en que aquella concluyó". (Corte Suprema, Rol 2775-201, 14 de octubre 2011.)

Ratifica lo anterior la siguiente circunstancia. La medida prejudicial preparatoria se agota tan pronto esta se cumple. En el caso de autos, esa medida finalizó el 21 de abril de 2015 cuando se llevó a efcto la audiencia de exhibición de documentos ordenada. Por lo tanto, en ese escenario está vedado al futuro demandado alegar el abandono del procedimiento y, con ello, obtener que desaparezca la pretendida interrupción de la prescripción en los términos del artículo 2503 N° 1 del Código Civil. Se volvería al absurdo de "habilitar" a un potencial demandante a obtener una interrupción ad eternum de la prescripción, lo que ha sido proscrito, incluso, por la Excm. Corte Suprema según ya se vio.

En consecuencia, en subsidio y en todo caso procede que se acoja la presente excepción de prescripción, y consecuentemente con ello se rechace la demanda, con costas.



DECIMO: Que a fojas 648 y siguientes se encuentra réplica, donde señalan que reiteran íntegramente los hechos y fundamentos de derecho expuestos en la demanda de autos, asimismo le cabe hacer presente las siguientes observaciones respecto de la defensa entablada por la demandada.

No pueden dejar de mencionar la triste defensa que sustenta Empresas La Polar S.A., quien luego de reconocer y detallar la forma en que su compañía operó fraudulentamente por casi 10 años, sosteniendo que la acción judicial interpuesta en estos autos por su representada resulta improcedente por haber incurrido en una actitud negligente, frívola y pasiva.

Como se explicó detalladamente en el libelo de autos, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. (AFC Chile), es una sociedad anónima cerrada, cuyo giro único y exclusivo es administrar dos Fondos, denominados Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Cesantía.

En la tarea de administrar el seguro de cesantía con eficiencia y riesgo controlado, para otorgar a los afiliados prestaciones de gran calidad en sus períodos de desempleo, generando así el valor esperado por el Estado de Chile, AFC Chile advierte el Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario, en los valores que la Ley N° 19.728 le permite, de modo de lograr para los afiliados la mejor rentabilidad y seguridad.

De esta manera, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., fue un inversionista en empresas La Polar S.A., por cuenta y orden de los fondos que administra, Fondo de Cesantía (CIC) y Fondo de Cesantía Solidario (FCS), sin ningún tipo de injerencia, atribución o facultad en la entrega de la información financiera, en la gestión de la compañía, ni menos en la fiscalización de la misma, por lo tanto, la imputación de responsabilidad que efectúa la demanda es completamente improcedente.

I Excepción de falta de legitimidad activa de AFC.

Como primera razón para rechazar la demanda de autos, La Polar alega en su defensa que esta parte carece la legitimidad activa en contra de ésta como entidad emisora de las acciones de las cuales fue titular.

La demandada basa su excepción bajo dos fundamentos: a) la acción debe dirigirse en contra de los responsables de la debacle, su auditora externa Price wáter house Coopers (PwC), sus sociedades clasificadoras de riesgo y los ex ejecutivos de Empresas la Polar S.A. y b) La opinión entregada en el informe en derecho de don Juan Esteban Puga Vial, acerca del artículo 133 Bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Sobre lo primero cabe señalar que entre los años 2003 al 2011, los ejecutivos de Empresas La Polar S.A. don Pablo Alcalde Saavedra, en su cargo de Gerente General y Presidente del Directorio, doña María Isabel Farah Silva, Gerente de Administración, don Julián Moreno de Pablo, Gerente Corporativo de Productos Financieros, don Nicolás Ramírez Cardoen, Gerente General, don Santiago Grage Díaz, Gerente Corporativo de Finanzas, don Martín González Iakl, Gerente



General, don Pablo Fuenzalida May, Gerente Corporativo de Informática y Logística, doña Marta Bahamondes Arriagada, Gerente de Gestión y Desarrollo y don Ismael Tapia Vidal, Jefe del Área de Análisis y Desarrollo de la Subgerencia Cobranza y Jefe del Área de Riesgo Crediticio de la Gerencia de Crédito, crearon, fomentaron y permitieron un sistema con el objeto de adulterar los resultados financieros de la empresa y de entregar información falsa al mercado y reguladores acerca de la situación económica de la misma, infringiendo los artículos 59 letra a) y f) de la Ley de Mercado de Valores y artículos 42, 46 y 50 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Adicionalmente, sus Directores faltaron gravemente a su deber de eficiencia y lealtad para con la empresa, al no haber adoptado todas las medidas con el objeto de ser informado de manera veraz acerca de la situación financiera de la empresa, transgrediendo los artículos 10 y 59 de la Ley de Mercado de Valores y artículos 39, 41, 46 y 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 50 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, éstas actúan y son administradas a través de su Directorio, gerentes y ejecutivos principales.

En este mismo sentido, la normativa que regula el actuar de los órganos sociales, Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas y Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores, en sus artículos 55 y 133, respectivamente, establecen la responsabilidad de las personas que infrinjan las disposiciones contenidas en la ley, sus normas complementarias o aquellas que importa la Superintendencia de Valores y Seguros ocasionando daño a otro y la consiguientes obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados.

De esta manera, la actuación de sus órganos acarrea la responsabilidad de la sociedad.

Así, la responsabilidad de las sociedades anónimas como persona jurídica por el hecho de sus órganos directivos y representantes, acarrea responsabilidad por el hecho propio, por la atribución que el derecho hace de los actos de sus órganos, agentes y representantes en el ejercicio de sus funciones.

Con todo, de conformidad con los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, las personas jurídicas responden civilmente por el hecho ajeno, cometido por sus dependientes.

Luego, como segundo fundamento La Polar señala que de conformidad al informe en derecho emitido por don Juan Esteban Puga Vial, que dicho sea de paso, se encuentra en fotocopia, sin indicación del caso sobre el que versa, su presentada sólo se encuentra facultada para ejercer en su contra la acción social derivada del artículo 133 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pues bien, la referida norma sostiene; “Toda pérdida irrogada al patrimonio de la sociedad como consecuencia de una infracción a esta ley, su reglamento, los estatutos sociales, las normas dictadas por el directorio en conformidad a la ley o las normas que imparta la Superintendencia, dará derecho a un accionista o grupo de accionistas que representen, a lo menos, un 5% de las acciones emitidas por la sociedad o a cualquiera de los directores de la sociedad, a



demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio de la sociedad.

Las costas a que hubiere lugar serán pagadas a los demandantes y no podrán, de forma alguna, beneficiar a la sociedad. Por su parte, si los accionistas o el director demandantes fueren condenados en costas, serán exclusivamente responsables de éstas.

Las acciones contempladas en este artículo, son compatibles con las demás acciones establecidas en la presente ley”.

De su simple lectura se advierte que la referida norma no hace más que conceder una legitimación extraordinaria para que un accionista o un grupo de accionistas de una sociedad, con una participación de al menos el 5%, o también un Director, pueda demandar, en nombre y beneficio de la sociedad, para el solo efecto de pedir una indemnización de perjuicios.

En efecto, se trata de un caso de interés social, lo que no ocurre en la especie.

Se advierte además que el informe en derecho que apoya esta excepción, se refiere precisamente al perjuicio sufrido por una sociedad anónima y la facultad que detenta los accionistas o directores, para demandar la indemnización de perjuicios a su favor, que como se sabe no es el caso.

Bastará con leer el objeto del informe, sus consideraciones básicas para advertir que lo analizado en él, dice relación con la facultad de los accionistas para demandar a su emisora por los perjuicios irrogados al patrimonio de la misma.

Pese a que la referida norma no resulta aplicable al caso de autos, su inciso final establece que la acción que deriva de ésta es compatible con aquellas contempladas en la Ley N° 18.046, entre éstas, las responsabilidades que derivan de sus artículos 42, 46 y 50 bis, que pretenden hacerse efectivas en el presente juicio.

En consecuencia, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II AFC S.A., se encuentra legitimado para actuar en este juicio en contra de Empresas La Polar S.A., y ejercer la acción de responsabilidad extracontractual deducida.

II.- Obligación de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. de demandar bajo el estatuto de responsabilidad contractual.

Como segunda excepción o defensa, la demandada sostiene equivocadamente que la demanda de responsabilidad extracontractual deducida en autos es improcedente por cuanto el estatuto jurídico aplicable es el de responsabilidad contractual.

A su juicio, el vínculo contractual que existiría entre Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. y Empresas La Polar S.A., excluiría el gimen de responsabilidad extracontractual, por cuanto el primer requisito para a



donar por este tipo de responsabilidad es la ausencia de todo vínculo contractual.

En primer lugar cabe señalar que su representada invirtió en diversos instrumentos financieros de Empresas La Polar S.A. y que fueron detallados en el numeral 2 del capítulo II del libelo de autos, respecto de los cuales no existía vínculo contractual alguno.

Luego, es completamente falso que el primer requisito para que se configure la responsabilidad extracontractual sea la ausencia de todo vínculo contractual.

En efecto, de conformidad con las normas que regulan el estatuto de este tipo de responsabilidad, contenido en el Título XXXV, Libro IV del Código Civil, que en sus artículos 2314 y siguientes, reglamenta los requisitos, fundamentos y presunciones de esta clase de responsabilidad, se desprende que para que haya lugar a la responsabilidad extracontractual, deben concurrir los siguientes requisitos copulativos:

1° Una acción u omisión culpable o dolosa; 2° El daño a la víctima; 3° La relación causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido; 4° capacidad legal del autor.

De esta manera, la relación obligatoria entre las partes se genera precisamente en el hecho que causa daño y que da origen a dicha responsabilidad.

Así lo dispone por lo demás el artículo 1437 del Código Civil que establece que las obligaciones nacen, entre otras, a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona como en los delitos o cuasidelitos.

Por su parte el artículo 2314 del Código Civil establece que *"El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito"*.

Atendido que una serie de ejecutivos de Empresas La Polar S.A., incurrieron en una serie de conductas delictuales y cuasidelictuales, descritas detalladamente en el libelo de autos, ésta resulta responsable por el hecho propio, por la atribución que el derecho hace de los actos de sus órganos, agentes y representantes en el ejercicio de sus funciones, basado en el deber general de cuidado que nuestro ordenamiento jurídico exige con el objeto de no dañar a terceros.

Es por ello que el objeto de la demanda de autos es hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de la demandada, la cual apunta ciertamente a un gran y fundamental fin: repara el daño causado y dejar a la víctima indemne.

Con todo, como se ha desarrollado por la doctrina y jurisprudencia, en aquellos casos en que una conducta que ocasiona un daño además de incumplir obligaciones contractuales viola norma de cuidado y prudencia exigida, están ante un caso de concurrencia de responsabilidades, frente a lo cual existe para la



víctima la facultad de optar por el régimen de responsabilidad bajo el cual formulará su pretensión.

Al respecto, el profesor Hernán Corral Talciani ha señalado que *“no hay ninguna evidencia de que el legislador haya querido que en las zonas de superposición un estatuto prevalezca por sobre otro, y que la solución de la opción produce como consecuencia una mayor protección a las víctimas sin desnaturalizar la regulación contractual ni tampoco atentar contra la seguridad jurídica”* (Corral Talciani, Hernán. “El concurso de responsabilidades en el Derecho de daños chileno: defensa y delimitación de la teoría de la opción”).

Asimismo, la Corte Suprema ha dispuesto que “Si bien la doctrina denominada del cúmulo de responsabilidades habría permitido al actor basar su aspiración reparatoria en la simultánea invocación de las disposiciones que rigen ambas categorías de responsabilidades, siempre naturalmente que con ello no se sobrepasare el equivalente de los daños reales y efectivos generados” (Primera Sala de la Excma., Corte Suprema Rol N° 1009-2010); “pudiendo el afectado dirigirse indistintamente en contra del Estado o del funcionario, según lo estime conveniente si se configura lo que se denomina cúmulo de responsabilidades” (Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema Rol N° 4390-2015); “Pues la eventual falta personal del funcionario policial en nada obsta a la concurrencia simultánea de responsabilidad por parte del órgano público, esto es, nada impide que exista, como ya se adelantó, cúmulo de responsabilidad” Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema Rol N° 21636-2014).

En iguales términos las sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago en R.D.J.T. XLVIII, sec 1°, 1950, pp. 127 y ss, Corte de Apelaciones de Santiago Gaceta Jurídica N° 151, Enero de 1993, Rol de Ingreso N° 2020-1992, considerando 2° y Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de diciembre de 1999, Gaceta Jurídica N° 234, pg. 63.

Lo anterior resulta del todo razonable si se considera que si bien existen dos estatutos de responsabilidad, contractual y extracontractual, la responsabilidad civil es una sola. En este sentido, el profesor Rene Abeliuk Manasevich, señala que “Ciertamente es que en la (responsabilidad) contractual, las partes estaban unidas previamente por un vínculo jurídico: una obligación, pero la que nace del incumplimiento constituye una nueva, la de indemnizar los perjuicios, que es la misma que a su vez origina el hecho ilícito” (Abeliuk Manasevich, René. Las obligaciones Tomo II, 2009. P. 253). En este mismo sentido Planiol señala que “la asimilación entre ambas responsabilidades se produciría, porque en la extracontractual también existe una obligación legal infringida, cual sería no actuar imprudentemente, no lesionar, no robar, etc.; su vulneración haría nacer la obligación de indemnizar los perjuicios, tal cual ocurre con el rompimiento de un compromiso contractual”. En este mismo orden de ideas, el autor reafirma la idea anterior señalando que “Ambas responsabilidades suponen elementos comunes: sus presupuestos de existencia son los mismos: una acción u omisión imputable al causante del daño, la existencia de éste y la relación de causalidad entre la conducta del responsable y el perjuicio de la víctima”.

De la jurisprudencia y doctrina citada, queda de manifiesto que para el caso de concurrir tanto los presupuestos de responsabilidad contractual como de



concurrir tanto los presupuestos de responsabilidad contractual como de extracontractual, es facultad del actor determinar cómo accionar, pues tanto los hechos ilícitos como el incumplimiento son ambas manifestaciones de un actuación contraria al derecho, y sancionados civilmente con el resarcimiento del daño ocasionado; esta obligación nace con el hecho ilícito o la infracción del contrato.

III. Empresas Las Polar S.A. no habría cometido ningún hecho ilícito

Como se explica detalladamente en el libelo de autos, entre los años 2003 al 2011, los ejecutivos de Empresas La Polar S.A. don Pablo Alcalde Saavedra, en su cargo de Gerente General y Presidente del Directorio, doña María Isabel Farah Silva, Gerente de Administración, don Julián Moreno de Pablo, Gerente Corporativo de Productos Financieros, don Nicolás Ramírez Cardoen, gerente General, don Santiago Grage Díaz, Gerente Corporativo de Finanzas, don Martín Gonzáles Laki, Gerente General, don Pablo Fuenzalida May, Gerente Corporativo de Informática y Logística, doña Marta Bahamondes Arriagada, Gerente de Gestión y Desarrollo y don Ismael Tapia Vidal, Jefe del Área de Análisis y Desarrollo de la Subgerencia de Cobranza y Jefe del Área de Riesgo Crediticio de la Gerencia de Crédito, crearon, fomentaron y permitieron un sistema con el objeto de adulterar los resultados financieros de la empresa y de entregar información falsa al mercado y reguladores acerca de la situación económica de la misma, infringiendo los artículos 59 letra a) y f) de la Ley de Mercado de Valores y artículos 42, 46 y 50 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Adicionalmente, sus Directores faltaron gravemente a su deber de eficiencia y lealtad para con la empresa, al no haber adoptado todas las medidas con el objeto de ser informado de manera veraz acerca de la situación financiera de la empresa, transgrediendo los artículos 10 y 59 de la Ley de Mercado de Valores y artículos 39, 46 y 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se acompañó en la demanda el 11 de diciembre de 2014, gran volumen de documentación que da cuenta de las responsabilidades de los agentes antes mencionados en los diversos procesos e investigaciones seguidas por las diferentes autoridades políticas, administrativas y judiciales.

Por otro lado, ha de tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 50 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, estas actúan y son administradas a través de su Directorio, gerentes y ejecutivos principales.

En este mismo sentido, la normativa que regula el actuar de los órganos sociales, Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas y Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores, en sus artículos 55 y 133, respectivamente, establecen la responsabilidad de las personas que infrinjan las disposiciones contenidas en la ley, sus normas complementarias o aquellas que impartan la Superintendencia de Valores y Seguros ocasionando daño a otro y la consiguiente obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados.

De esta manera, la actuación de sus órganos acarrea la responsabilidad de la sociedad.



Así, la responsabilidad de las sociedades anónimas como persona jurídica por el hecho de sus órganos directivos y representantes, acarrea responsabilidad por hecho propio, por la atribución que el derecho hace de los actos de sus órganos, agentes y representantes en el ejercicio de sus funciones.

Con todo, de conformidad con los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, las personas jurídicas responden civilmente por el hecho ajeno, cometido por sus dependientes.

En consecuencia, la responsabilidad de Empresas La Polar S.A., deriva del hecho propio por las conductas desplegadas por una serie de ejecutivos con el objeto de alterar los estados financieros de la compañía o bien por la falta de diligencia en los procesos y en los mecanismos de control al interior de la organización empresarial, especialmente del Directorio, conocida como culpa de la organización.

I V: La existencia de los perjuicios y su relación de causalidad con los perjuicios demandados.

En relación a la existencia de los perjuicios se remiten al análisis efectuado en el informe económico y contable elaborado por don Horacio Arredondo Villalba, de fecha 7 de agosto de 2015, acompañado en el N° 17 del libelo de autos.

En dicho informe se explicó y analizó pormenorizadamente los perjuicios sufrido por su representada y su relación de causalidad con el ilícito denunciado.

Cabe señalar además que la culpa infraccional de Empresas La Polar S.A., por la infracción de sus órganos en los artículos 9, 10, letras a) y f) del 59, todos, de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y artículos 42, 46 y 50 bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, solamente requiere la conexión de ilicitud entre la norma de conducta debida y el daño que ésta persigue prevenir.

Como lo sostiene don Enrique Barros Bourie en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual, la finalidad de los ordenamientos legales sobre sociedades anónimas y mercado de valores en cuanto a la responsabilidad de sus gerentes y directores, es la de incentivar el cumplimiento de sus deberes de cuidado y procurar grados significativos de transparencia y lealtad en la gestión de la compañía.

De esta manera, el fin de las normas infringidas por Empresas La Polar S.A., como sociedad anónima emisora de valores, artículos 9, 10, letra a) y f) del 59, todos, de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y artículos 42, 46 y 50 bis de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, persigue como fin protector el mercado en general e interés social, especialmente las normas sobre mercado de valores persiguen que las decisiones de negocios se adopten sobre la base de información esencial verídica, lo que no sucedió en la especie.

V. Prescripción de la acción de indemnización de perjuicios de autos.

La prescripción de las acciones por delitos o cuasidelitos civiles se encuentra tratada en el Título XXXV del Libro IV del Código de ramo, que en su



artículo 2332 establece que éstas prescriben en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto.

Esta norma se aplica a cualquier tipo de responsabilidad demandada en estos autos, deben estar a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Siguiendo los principios generales en materia de prescripción, el cómputo del plazo de prescripción de la presente acción de responsabilidad extracontractual se inicia desde que tuvo conocimiento del hecho dañoso, lo que ocurrió el día 9 de junio de 2011, en la comunicación del hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Por su parte, consta en estos autos que con fecha 11 de diciembre de 2014 su parte ingresó a distribución de la Corte de Apelaciones de Santiago una prejudicial preparatoria de exhibición de documentos en contra de Empresas La Polar S.A., la que fue notificada con fecha 22 de abril de 2015.

Esta gestión fue tramitada ante este mismo Tribunal.

Conforme lo dispone el artículo 2518 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente.

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2503 del mismo Código.

Así, el efecto de la interrupción de la prescripción y su finalidad es doble: a) paralizar el curso de la prescripción, y; b) hacer ineficaz todo el tiempo transcurrido hasta que se produce el acto interruptivo.

Asimismo, como establece el artículo 2518 del Código Civil, la causa o el motivo determinante de la interrupción pueden provenir del reconocimiento del deudor, o de una demanda judicial. La interrupción producida por el reconocimiento del deudor, o de una demanda judicial. La interrupción producida por el reconocimiento del deudor es un acto instantáneo, que se consuma en un momento y sus efectos no se prolongan en el tiempo.

Por otra parte, la interrupción de la prescripción ocasionada por la demanda judicial tiene consecuencias que se prolongan en el tiempo.

En consecuencia, la presentación de la medida prejudicial preparatoria interpuesta en autos, interrumpió civilmente la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual deducida.

Así, en diversos fallos la jurisprudencia de nuestros Tribunales ha manifestado que “Una vez interrumpida la prescripción en virtud de la notificación judicial de la demanda o de la gestión preparatoria –y aun de la medida prejudicial como también se acepta-, el término comienza a transcurrir nuevamente sólo cuando se configura alguna de las hipótesis del artículo 2503, perdiéndose el tiempo transcurrido, y si el juicio termina por sentencia que acoge la demanda, en el evento de tratarse de uno de naturaleza declarativa, el término de prescripción que empieza a correr desde que el fallo queda firme para obtener su



cumplimiento, es en rigor el de la acción de cosa juzgada y no el de la acción que emanaba del derecho personal, por cuanto esta última ya había sido ejercida, precisamente al deducir la demanda que terminó con esa sentencia". (Corte Suprema, Rol de ingreso N° 1544-2015, sentencia de fecha 30 de abril de 2015, Corte de Apelaciones de Temuco, Rol de Ingreso N° 315-2010, sentencia de fecha 24 de agosto de 2010 y Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8137-2015, sentencia de fecha 31 de agosto de 2015).

En el mismo sentido, como lo sostienen don René Abeliuk M. la interrupción civil de la prescripción "supone que el acreedor salda de su inactividad; Bien que el legislador haya exigido que esta actividad del acreedor se produzca ante los tribunales y que ella implique la intención de éste de cobrar su crédito, pero ello se produce tanto si el acreedor está en situación de hacerlo inmediata y directamente como cuando con tal finalidad pide privilegio de pobreza, prepara la vía ejecutiva, presenta una medida prejudicial y, en general cuando realiza cualquier gestión judicial que manifiesta su intención de cobrar su crédito" (René Abeliuk, Las Obligaciones., Ed. Jurídicas de Chile, 1993, Tomo II, pág. 995).

En consecuencia, la prescripción de la presente acción de responsabilidad extracontractual se encuentra interrumpida civilmente por la presentación de la medida prejudicial preparatoria, cumpliéndose en la especie, todos y cada uno de los requisitos que establece la ley para que ésta sea acogida en todas sus partes, con expresa condena en costas.

UNDECIMO: Que a fojas 680 y siguientes se encuentra dúplica, donde señalan que reiterando y ratificando las todas y cada una de las consideraciones, excepciones y defensas opuestas al contestar la demanda las que, conjuntamente con los argumentos que se expondrán en lo sucesivo, justifican el íntegro y categórico rechazo de la demanda deducida en autos por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. (en adelante "AFC") en contra de Empresas La Polar S.A. (en adelante "La Polar"), con costas.

Hacen presente necesariamente la consideración previa, hacen presente lo siguiente:

La réplica de la demandada nada amplía, adiciona ni complementa su pretensión, sino que se trata de una simple reiteración de argumentos inconexos, carentes de explicación y de sustento jurídico.

Les parece innecesaria la actitud de la contraria de calificar a esta defensa de "triste". Aunque no quiera el demandante entenderlo así, nadie puede negar que los hechos relatados en el libelo se circunscribieron en el denominado "Caso La Polar", y que es de público conocimiento que cualquier tipo de acto dañoso no fue ocasionado por nuestra representada, sino que por ex ejecutivos de la misma contra los cuales se está persiguiendo su responsabilidad civil y penal.

La demandante no ha explicado, ni en su demanda ni en su réplica, la razón por la cual no ha demandado a los verdaderos culpables de los hechos que convenientemente imputa hoy a su representada. En el mismo sentido, la demandante reitera -de manera francamente extenuante- el detalle de los delitos e infracciones cometidos por ex ejecutivos de La Polar, que por lo demás



también causaron un enorme perjuicio a su mandante, pero no se molesta en detenerse en el punto que realmente interesa:

Cómo esos delitos e infracciones acarrearían la responsabilidad de la sociedad.

En último término, la demandante se contradice al tratar de explicar las razones por las cuales no se aplicaría al caso el estatuto de responsabilidad contractual. En efecto, al respecto realiza una pirueta bastante extraña: niega primero la existencia de contratos; luego cita doctrina y jurisprudencia que abona la tesis de encontrarnos en sede contractual; aunque finalmente arriba a que en su caso podría optar por ajustarse al estatuto de la responsabilidad *aquiliana*. Insólito.

A continuación analizaran la fallida réplica de la demandada y la total improcedencia de la demanda de autos.

EVIDENTE FALTA DE LEGITIMACION DE AFC

La demandante en su réplica no ha sido capaz de argumentar las razones por las cuales se encontraría legitimada para actuar en contra de su representada, sino que simplemente ha "descartado" los argumentos esgrimidos por esta parte, señalando:

"De esta manera, la actuación de sus órganos acarrea la responsabilidad de la sociedad.

Así, la responsabilidad de las sociedades anónimas como persona jurídica por el hecho de sus órganos directivos y representantes, acarrea responsabilidad por el hecho propio, por la atribución que el derecho hace de los actos de sus órganos, agentes y representantes en el ejercicio de sus funciones.

Con todo, de conformidad con los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, las personas jurídicas responden civilmente por el hecho ajeno, cometido por sus dependientes". (Réplica página 4)

Recalcan estos párrafos ya que, además de contradictorios, contienen la única "explicación" de los escritos de la contraria para imputar responsabilidad a su representada.

Básicamente, a juicio de la demandante y en sus propias palabras, su mandante debería responder porque "el derecho" la haría responsable por el hecho propio, entendiendo hecho propio como el hecho de sus órganos, agentes y representantes. No se detiene en la distinción que hace el derecho societario respecto a si los daños son ocasionados contra la sociedad misma o contra terceros, sino que simplemente "elige" a un presunto culpable y lo demanda, utilizando como único principio rector el que todo daño debe ser indemnizado. Sin embargo, igualmente y "por si pasa", sustenta la responsabilidad de la sociedad por el hecho de terceros. Derechamente inadmisibile.

En definitiva, habida consideración que la contraria no se hizo cargo de ninguno de sus fundamentos para alegar su evidente falta de legitimidad, corresponde reiterarlos brevemente, para efectos de orden procesal:



La demandante no ha ejercido acciones en contra de quien debía, a sabiendas.

La demandante dedicó gran parte del libelo y también de su réplica a detallar las acciones y delitos ocasionados por los ex ejecutivos de La Polar que fueron responsables de la denominada repactación unilateral de los créditos de los deudores y de la alteración de los estados financieros de su representada. Lo anterior no hizo sino demostrar que AFC está en perfecto conocimiento de quiénes son, qué es lo que han hecho y quiénes han interpuesto acciones en su contra, por lo que no cabe duda alguna de que la demandante tiene certeza respecto a los únicos responsables del daño que alega en estos autos. A pesar de tener esa certeza jurídica procesal, la demandante no ejerció acciones en su contra, sino que decidió demandar a La Polar, una sociedad que se vio tan perjudicada por los mismos hechos que supuestamente afectaron a la demandante, que estuvo al borde de la quiebra, como es de sobra conocido.

(i) Estatuto de responsabilidad de las Sociedades Anónimas

Con el fin de aclarar las razones por las cuales la demandante carece de legitimación activa, corresponde replicar los siguientes aspectos: 1. La actora demanda en calidad de accionista; 2. la responsabilidad de las sociedades frente a sus accionistas; y, 3, la distribución de riesgos en las sociedades anónimas.

1. Accionistas de Sociedad Anónima

Como señalaron anteriormente, AFC comparece y demanda en calidad de accionista de La Polar, en consecuencia, no actúa como un simple tercero, ya que a los accionistas se les da un tratamiento distinto porque su participación en la sociedad está ligada al patrimonio de la misma.

En el caso de autos se encuentran frente a un accionista que alega un presunto daño -indirecto en todo caso- producto de un perjuicio patrimonial sufrido por la sociedad a consecuencia de conductas ilícitas de algunos ejecutivos. Como sabemos, en estos casos, nuestro ordenamiento jurídico provee que sólo procede la acción social en contra de los administradores.

Este tema ha sido tratado en específico por un Informe en Derecho elaborado por el Estudio Jurídico Caballero y Espada en el marco del juicio "AFP Capital con Empresas La Polar", tramitado ante el 13 Juzgado Civil de Santiago. Estos autores citan, a su vez, en la página 10 de este informe, a los siguientes autores, quienes ratifican lo señalado: *"ROMERO y DÍAZ, a quienes sigue LAGOS, (lagos Villarreal, Osvaldo, "La responsabilidad civil de los directores de sociedades anónimas", en Revista de Derecho de la Empresa N° 1 (2005),p.142 nota 36.), sostienen que "(a) veces es difícil distinguir en la práctica cuándo una demanda ha sido presentada en virtud de una acción directa de los accionistas contra la sociedad o directores y cuándo se presenta a favor de la misma sociedad, es decir, como una acción derivativa. En teoría, si el acto ilícito daña el patrimonio social y por tanto a los accionistas indirectamente, es derivativa. Si por el contrario daña directamente a los accionistas es una acción directa". (Romero Segurel, Alejandro y Díaz Villalobos, José Ignacio, "La acción de responsabilidad civil del art. 133 bis de la ley de sociedades anónimas", en Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. XCIX, n° 3, 2002, p. 52).*



En el mismo sentido, Barros sostienen que “la acción de responsabilidad intentada por la sociedad debe tenerse por excluyente del interés del accionista, porque si la sociedad recibe la indemnización, el accionista obtiene su parte en el mayor valor que adquiere la compañía” (Barros Bourie, Enrique, Tratado de Responsabilidad extracontractual (Jurídica, 2010), p.866.) A su turno, ALCALDE RODRÍGUEZ sostiene que la distinción entre acción individual y social de responsabilidad en contra de los administradores sociales deber realizarse “en función - primeramente- de cuál sea el patrimonio perjudicado por su actuación (arts. 133 y 133 bis LSA)” (Alcalde Rodriguez, Enrique, La responsabilidad de los directores de sociedades anónimas (Ediciones UC, 2013), p.226) y, más adelante agrega, “a diferencia de lo que ocurre tratándose de la acción individual, cuando la que experimenta el perjuicio por la conducta impropia de directores o gerentes es la sociedad, la acción debe ser intentada a nombre de ésta por quienes ejercen la representación legal” (Ibídem, p. 245). En fin, PUGA VIAL sostiene “fijas acciones directas son las que puede ejercer la sociedad o terceros -absolutos o accionistas de la sociedad- en contra del o de los directores responsables del daño por ser ellos directamente víctimas de dicho daño. No presentan mayores problemas cuando se produce directamente en el patrimonio del accionista o del tercero (u. gr., acreedor, proveedor, tercero extraño). Per o cuando el daño del accionista se revela en una depreciación del valor de sus acciones merced de un daño que sufre la sociedad, en tal caso debiera ser la sociedad la titular única de la acción” (Puga Vial, Juan Esteban,

La sociedad anónima y otras sociedades por acciones en el Derecho chileno y comparado (Jurídica, 2014), p.593.)

Es decir, frente a una situación como la que se encuentran, nuestro ordenamiento jurídico establece que la sociedad afectada, en este caso La Polar, es la única legitimada para recurrir individualmente en contra de sus administradores, lo cual se llevó a cabo no sólo en sede civil, sino que también penal y administrativa según señalaran más adelante.

Los accionistas frente a esta situación sólo cuentan con la acción colectiva del artículo 133 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

2. Responsabilidad de La Polar frente a AFC

Aclarada la condición de accionista de AFC y aclarado el hecho de que la legitimidad para recurrir en contra de los administradores es una acción individual es de La Polar, es menester analizar las razones por las cuales la demandante tampoco tiene legitimación para interponer la presente acción.

Tal y como es señalado en el Informe en Derecho emitido por el Estudio Jurídico Caballero y Espada “el punto es si esa titularidad (indiscutida) excluye no sólo la legitimación de un accionista para ejercer la acción individual en contra de los administradores, sino también la legitimación de un accionista para demandar a la sociedad por el perjuicio indirecto sufrido como consecuencia de la misma conducta ilícita de los administradores sociales ahora entendida como un hecho propio de la sociedad. La opinión mayoritaria de excluir la acción social a la acción individual para la reparación de un daño indirecto, es un antecedente de existir también buenas razones para descartar una acción de responsabilidad de un accionista en contra de la sociedad para reparar un daño



indirecto en favor de una acción de responsabilidad de la sociedad en contra de los administradores" (Informe en Derecho Estudio Jurídico Caballero y Espada, página 11).

El problema que surge entonces es que desde el punto de vista civil no pareciera haber inconvenientes para que un accionista demande a la sociedad por acciones de sus administradores. Sin embargo, el derecho civil debe comunicarse necesariamente con el derecho de sociedades, ya que, desde este punto de vista, el accionista está vinculado jurídicamente a la sociedad (es propietario), y, por ende, a sus riesgos.

La conjugación entre ambos derechos no hace posible la legitimidad que alega la actora, por cuanto en el caso de que La Polar no hubiese pasado por un mal periodo y hubiese reportado ganancias, entonces AFC habría participado de dichas ganancias, porque ambas están íntimamente unidas.

Es precisamente por esto que no pueden simplemente aplicarse las normas del derecho civil, como erradamente pretende la demandante, ya que *"el derecho de una víctima a la reparación del daño sufrido -un principio general en nuestro ordenamiento- debe recibir una modulación particular en el ámbito de la relación jurídica entre un accionista y la sociedad, pues, además del interés de la víctima, concurren otros intereses dignos de tutela, ignorados por el derecho de daños, pero no por el derecho de sociedades "*. (Informe en Derecho Estudio Jurídico Caballero y Espada, página 13).

AFC no puede desconocer el hecho de que existe un vínculo entre el valor sus acciones y patrimonio de La Polar, por ende, la ley no le permite accionar en contra de esta última por un hecho que las dañó a ambas por igual.

3. Las Obligaciones Recíprocas

El vínculo descrito anteriormente, generado por la inversión de un accionista en una sociedad, tiene diversas aristas que transforman esta relación en una relación compleja, pero con un centro de interés común: la distribución proporcional de las ganancias o pérdidas.

La distribución es la que rige la relación entre la sociedad y los accionistas, ya que la sociedad tiene como finalidad generar cada vez un mayor patrimonio y por su parte el accionista espera retirar un monto más alto al aportado. Sin embargo, esta distribución tiene como contrapartida el hecho que ambos serán perjudicados en caso de que haya pérdidas.

Asimismo, mal puede AFC desconocer el hecho de que, a pesar de ser accionista, hay otros intervinientes (como acreedores, por ejemplo) quienes siempre tendrán un derecho prioritario, especialmente en momentos de crisis como lo fue el sufrido por La Polar.

La Ley permite a los accionistas limitar sus responsabilidades al monto de sus aportes, pero por otro lado subordina sus intereses frente a acreedores de la sociedad precisamente porque no los considera como terceros ajenos. En efecto, el referido Informe en Derecho ha señalado en este punto que: *"La ratio de esta regla de subordinación es una tutela (mínima) de los terceros acreedores sociales: dado que éstos sólo pueden agredir el patrimonio social para obtener el*



pago de las deudas sociales debido al privilegio reconocido a favor de los accionistas de limitar la responsabilidad por las deudas sociales hasta el monto de sus aportes, estos últimos sólo pueden recuperar los aportes realizados una vez satisfechas las deudas sociales" (Informe en Derecho Estudio Jurídico Caballero y Espada, página 16)

4. Derechos entre Accionistas

A mayor abundamiento, si la ley permitiera que un accionista cualquiera, como AFC, demandara a una sociedad por la disminución del valor de su acción, esto sería simplemente inaplicable.

Los montos de los aportes y las pérdidas se reparten entre la sociedad y sus accionistas, por ende, si se le paga indemnización a uno, va disminuir la cuota de todos los demás, incluyendo la del propio demandante, razón por la cual la ley no lo permite.

Así se explica en el informe de Caballero y Espada: *"se desprende que una eventual indemnización de los daños indirectos a favor de un accionista específico infringe la regla de distribución proporcional de las pérdidas y ganancias y, por consiguiente, si bien el artículo 133 LSA, en una interpretación puramente literal, pareciera reconocer la legitimación activa de un accionista para demandar a la sociedad la indemnización de los años indirectos, esa regla debe ser interpretada de forma compatible con la obligación de todo accionista de "ejercer sus derechos sociales respetando los de la sociedad y los de los demás accionistas" (ex artículo 30 LSA). La interpretación sistemática de las reglas antes mencionadas significa, en el caso de un daño indirecto, tutelar el interés común por sobre el interés individual, coherentemente con el principio de comunidad de pérdidas y ganancias (artículo 78 LSA) y, por consiguiente, privilegiando la recuperación del patrimonio social y, sólo por esa vía satisfacer el interés individual del accionista derivado del menor valor de las acciones. Por consiguiente y por las razones antes mencionadas, una lectura sistemática y armónica del artículo 133 LSA en conjunto con los artículos 30, 69, 78, 79 y 80 LSA y 51 RLSA, permite fundar una interpretación restrictiva, negando la legitimación activa del accionista para demandar a la sociedad (tan víctima como él) unos daños indirectos causados por la conducta dañosa de los administradores.*

Lo anterior no supone la indefensión del accionista. La vía (explícita) en nuestra ley de sociedades anónimas para satisfacer ese interés común (por sobre el individual) es la denominada "acción social" siempre en interés (exclusivo) de la sociedad, ya sea ejercida por la propia sociedad (acción social directa, artículo 133 LSA) o por un accionista o grupo de accionistas que representen, a lo menos, un 5% de las acciones emitidas por la sociedad o a cualquier director para demandar (acción social derivada, artículo 133 bis LSA)" (Informe en Derecho Estudio Jurídico Caballero y Espada, páginas 19 y 20).

Finalmente, el hecho de que AFC actualmente no tenga la calidad de accionista, por haber vendido sus acciones, no hace diferencia alguna respecto a lo señalado anteriormente. AFC ha demandado en la calidad de accionista que detentaba al ocurrir los hechos en que funda su pretensión por lo que no es posible que ahora desconozca los efectos de dicha calidad.



Acciones interpuestas por La Polar

La Polar ha interpuesto querellas criminales y acciones civiles en contra de todos los responsables por los hechos ocurridos, es decir, ha cumplido con su deber de diligencia tanto en sede civil como en sede penal.

La Nueva Administración de La Polar se ha encargado de perseguir la responsabilidad de los verdaderos culpables, cumplir con los términos del Convenio Judicial Preventivo conocido por todos, y con todas y cada una de las exigencias que le han impuesto las autoridades y los consumidores.

Respecto a las acciones en contra de los culpables, las acciones que debió haber interpuesto la demandante en lugar de imputar a esta parte hechos en los que no tuvo participación alguna, son las siguientes y se encuentran en los siguientes estados:

1.- "Empresas La Polar S.A. y Otra con Pricewaterhouse Coopers" - Rol C5.289- 2011 - 20° Juzgado Civil de Santiago: Con fecha 12 de mayo de 2016 de tuvo por evacuado el traslado respecto de la reposición al auto de prueba interpuesta por Pricewaterhouse Coopers. Se encuentra pendiente que se resuelvan derechamente las reposiciones y se dé inicio al término probatorio.

2.- "Empresas La Polar S.A. con Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada" - Rol 21.163-2011 - 15° Juzgado Civil de Santiago, acumulado en juicio "Feller Rate Clasificadora de Riesgo con Empresas La Polar S.A." - Rol 20.505-2013 - 22° Juzgado Civil de Santiago: Ambos juicios terminados en virtud del avenimiento alcanzado el día 30 de abril de 2015. Archivada bajo el legajo 313-2015.

3.- "Empresas La Polar S.A. con Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Limitada" - Rol 21.163-2011 - 9° Juzgado Civil de Santiago: El procedimiento se encuentra suspendido de común acuerdo desde el 13 de abril de 2016 hasta el 28 de mayo de 2016, a fin de intentar lograr un acuerdo avenimiento entre las partes.

4.- "AFP Capital S.A. con Empresas La Polar y Otros" - Rol 15.102-2011 - 13° Juzgado Civil de Santiago: Con fecha 8 de agosto de 2015 se citó a las partes a oír sentencia. Luego, el 10 de agosto de 2015 se suspendió la dictación de la sentencia civil mientras no se dicte sentencia firme y ejecutoriada en sede penal, atendida la estrecha relación entre ambas.

5.- "Aberdeen Chile Fund Inc. con Empresas La Polar S.A." - Rol 4.391- 2015 - 25° Juzgado Civil de Santiago: Juicio se encuentra en etapa de discusión a esperas de que se resuelvan las excepciones dilatorias presentadas por los demandados.

6.- "Charpentier con Empresas La Polar S.A." - Rol 24.018-2015 - 9° Juzgado Civil de Santiago: Pendiente notificación de la demanda en virtud del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

7.- "Empresas La Polar S.A. con Alcalde y Otros" - Rol 26.666-2014 - 5° Juzgado Civil de Santiago: Con fecha 7 de septiembre de 2015 el tribunal de primera instancia había decretado la suspensión del procedimiento hasta que no estuviera firme y ejecutoriada la sentencia en materia penal. Sin embargo, la l.

Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la suspensión del procedimiento, por lo que reactivó el periodo de discusión y está pendiente la resolución de excepciones dilatorias.

II.- INCORRECTO ESTUTO DE RESPONSABILIDAD INVOCADO POR AFC

Tal y como señalaran en la contestación de la demanda, el artículo 118 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores establece clara e indubitadamente que el vínculo que existe entre el emisor y los tenedores de bonos es de índole contractual y corresponde al respectivo Contrato de Emisión de Bonos, al señalar que la aceptación por parte de los tenedores de los términos del contrato, se produce por el sólo hecho de haber suscrito un bono: *"La suscripción o adquisición de bonos implica para el suscriptor o adquirente, la aceptación y ratificación de todas las estipulaciones, normas y condiciones establecidas en la escritura de emisión y en los acuerdos que sean legalmente adoptados en las juntas de tenedores de bonos"*.

Como señalaran anteriormente, AFC afirma haber detentado la calidad de tenedora de bonos de las Series F y G, todos emitidos por La Polar, cuyas características y condiciones están contenidas en el respectivo "Contrato de Emisión de Bonos entre Empresas La Polar como Emisor y Banco de Chile como representante de los Tenedores de Bonos", y sus respectivas modificaciones. AFC reconoce su carácter de contratante.

Sin embargo, insólitamente, en la réplica la demandante vuelve a reconocer su inversión en diversos instrumentos financieros de La Polar (aquellos descritos en la demanda), aunque ahora afirmando que *"respecto de los cuales no existía vínculo contractual alguno"*. Réplica, página 6)

Frente a tan "curiosa voltereta", han vuelto a revisar la demanda, en el lugar señalado por la demandante, donde aparece el detalle de los instrumentos suscritos, los cuales consisten en acciones y bonos. En todos los casos existe contratación previa, como es indubitado, por lo que no entendemos cómo el replicarte intenta ahora negar lo que señaló en su demanda, y que es tan básico como efectivo.

La contraria señala luego, vagamente, los requisitos de la responsabilidad extracontractual, citando doctrina y jurisprudencia inconexa y fuera de contexto, para finalmente concluir que en su caso particular, insólitamente, se configurarían los requisitos tanto para la responsabilidad contractual como para la responsabilidad extracontractual. Habría obligación contractual incumplida y no habría obligación contractual incumplida; había infracción al deber general de cuidado y no habría infracción a ese deber sino que incumplimiento de obligaciones contractuales, aunque si se prefiere no, etc. Los regímenes de responsabilidad no constituyen mera sugerencia para que cada persona elija la que mejor le parezca.

La responsabilidad entre las partes es contractual, y la demandante la ha negado tajantemente para luego dejar la puerta abierta a elegir cualquiera. Simplemente insólito.

III.- EN SUBSIDIO, LA POLAR NO HA COMETIDO NINGÚN ILÍCITO



Como fue señalado en la contestación y para el caso improbable que se rechace las excepciones o defensas opuestas en los acápites anteriores, en subsidio, su parte solicita el rechazo de la demanda con costas, por inexistencia de ilicitud.

La demandante argumenta que la responsabilidad de La Polar radicaría en una especie de "culpa de la organización" toda vez que, en su particular entender, atendido que La Polar actúa por medio de su Directorio, gerentes y ejecutivos principales, la compañía resultaría responsable por el mal obrar de ellos y, por ende, estaría obligada a indemnizar la totalidad de los perjuicios ocasionados, incluso con prescindencia de si dichos órganos o administradores actuaron o no dentro de sus potestades.

La demandante, convenientemente, deja fuera un aspecto esencial: La Polar es una persona jurídica administrada por un Directorio, y éste no es elegido por la sociedad misma, sino que es elegido por los accionistas. Luego, el Directorio nombra a los altos ejecutivos, y ambos componen la administración de la sociedad. Por ende, la administración, de una forma u otra, depende de los mismos accionistas.

Por lo tanto, la sociedad sólo será bien conducida en la medida en que la administración que los accionistas seleccionen lo sea pues, de otro modo, no hay como controlar el resultado, y en caso de ilícitos, la primera afectada es precisamente la sociedad misma: *"Pues bien, si la administración de una sociedad incumple, por activa o por pasiva, con la misión de administrar la sociedad, la primera víctima es la propia sociedad, en cuanto ente ficticio dotado de patrimonio y personalidad jurídica independiente de los accionistas."*

Dado que la sociedad es víctima, la ley de sociedades anónimas legitima activamente y excluyentemente a la sociedad para demandar los perjuicios causados al patrimonio social (acción social). Sin embargo, la propia ley entiende que, en ciertas circunstancias, la sociedad no estará en condiciones de ejercer la acción social, no obstante haber sufrido un daño patrimonial, reconociéndose la legitimación activa a otros sujetos (acción derivativa). El punto destacable aquí es el siguiente: si bien la sociedad no ejerce la acción social, la ley no la reprocha por "negligente en conformar una organización idónea y eficaz" (como lo hacen los demandantes), sino -con más sabiduría- comprende que la persona jurídica - institución de gran utilidad para el tráfico mercantil moderno - tiene limitaciones que ni siquiera las ficciones legales pueden suplir convenientemente: si la administración de la sociedad ha fallado frente a los accionistas, carece de sentido imputarle a la sociedad negligencia, pues al fin y al cabo, la sociedad sólo puede actuar a través de quienes han fallado. La solución, es, en unos casos, la sustitución de las funciones a otras manos (por ejemplo, la acción derivativa) y, en otros, asignando ese riesgo a los accionistas. (No debe extrapolarse la "culpa en la organización" de la relación entre una persona jurídica y terceros a la relación entre una sociedad anónima y sus accionistas. Los accionistas no son terceros respecto de la sociedad (Puga Vial, La sociedad anónima, pp.80 y 82). Si los afectados por los daños derivados de un hecho propio de una persona jurídica son terceros absolutos, la responsabilidad puede construirse conforme a la noción de "culpa en la organización" (por todos, Barros Bourie, Tratado, 129). Sin embargo, admitir que un accionista pueda invocar la culpa en la organización



constituye un exceso (el propio Barros Bourie, op. cit. loc., señala: “La culpa (en la organización) se muestra en que la dirección de la empresa haya omitido establecer los dispositivos organizacionales que la diligencia exige para evitar daños a terceros”. Los accionistas son quienes deben soportar los resultados de las conductas de la sociedad anónima (para bien-ganancias- o para mal – pérdidas) y, por consiguientes, el Derecho de sociedades impide trasladar mecánicamente la noción de “culpa en la organización”, propia del Derecho de daños, a la relación jurídica entre un accionista y la sociedad anónima de la cual forma parte.) (Informe en Derecho Estudio Jurídico Caballero y Espada, páginas 24-25).

Asimismo, no hay que olvidar la distinción entre "responsabilidad interna", que corresponde a directores y gerentes ante la sociedad por infracción de sus deberes fiduciarios, y la "responsabilidad externa", que es la que les corresponde ante terceros ajenos a la sociedad por los daños que en el ejercicio de sus funciones podrían haberles producido, determinada por todos aquellos con quienes esos gerentes, directores o ejecutivos principales no tengan una relación contractual directa, como clientes, trabajadores, acreedores y proveedores de la sociedad.

En ésta última, es la sociedad quien responde directamente ante los terceros por el ilícito en que ésta incurrió en razón de lo actuado por sus administradores, otorgándosele un derecho de reembolso.

De este modo, por la infracción de los deberes fiduciarios que tienen los gerentes y directores de una sociedad para con ésta, como el caso de autos, no es responsable la sociedad ante sus accionistas, pues al carecer de la acción de reembolso que tienen contra éstos al responder ante terceros, mal podría hacérseles responsable por un perjuicio que ella misma sufre; en especial cuando la única acción que tienen los accionistas contra los directores y gerentes es a nombre de la sociedad.

En consecuencia, La Polar no ha cometido ningún hecho ilícito respecto de AFC que sea apto para generar la responsabilidad extracontractual alega por ésta.

IV.-EN SUBSIDIO, NO EXISTE RELACIÓN DE CAUSALIDAD NI PERJUICIOS

También en subsidio, y para el improbable e hipotético evento que se rechace todas las excepciones o defensas anteriormente interpuestas, pedimos el categórico rechazo de la demanda, con costas, porque no es posible sostener que los supuestos daños que alega la demandante son atribuibles a su representada.

Ya ha quedado demostrado que su representada no ha cometido ilícito alguno, por lo que simplemente no es posible que existan perjuicios de su cargo y, por ende, que éstos se hayan originado por causa de su representada.

VI.- EN SUBSIDIO, LA ACCIÓN ESTÁ PRESCRITA



En subsidio, de todas las anteriores, y para el caso que ninguna de estas defensas sea acogida, reiteran formalmente la excepción de prescripción en los términos de la contestación y los siguientes.

AFC reconoce haber tomado conocimiento de los ilícitos que motivan la demanda, al menos, el día 9 de junio de 2011 -si es que no antes-, mediante el hecho esencial que su representada le comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros ese día.

Asimismo, tal y como señalamos en la contestación, el artículo 2332 del Código Civil, aplicable al caso (pues en esta demanda se esgrime el estatuto de la responsabilidad extracontractual) dispone textualmente que: *"Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto"*. Entre el 9 de junio de 2011 y la fecha de notificación de esta demanda (3 de febrero de 2016), transcurrieron en exceso los cuatro años legales, por lo que debiera declararse la prescripción extintiva antes referida.

La demandante pretende que la medida prejudicial preparatoria que dedujo en contra de su representada (exhibición de documentos) tenga el efecto de interrumpir la prescripción y, al efecto, en su réplica cita jurisprudencia respecto a gestiones preparatorias y medidas prejudiciales que a su juicio apoyarían su tesis.

Sin embargo, la jurisprudencia citada por la demandante tiene la característica que se refiere a gestiones preparatorias o medidas prejudiciales precautorias, las cuales implican necesariamente el inicio inmediato de un juicio (artículo 280 del Código de Procedimiento Civil). Es más cita doctrina de don René Abeliuk que señala "en general, cuando realiza cualquier gestión judicial que manifiesta su intención de cobrar su crédito (Réplica, página 14).

Esta frase del Profesor Abeliuk marca la diferencia ente una gestión cualquiera, como la formulada por la demandante con su medida preparatoria, con una medida que realmente interrumpa la prescripción, el hecho que la finalidad de la medida sea cobrar un crédito.

La medida solicitada por la demandante tenía como finalidad la obtención de ciertos documentos, y se agotaba con la entrega de los mismos; no acercaba de manera alguna a la demandante a un posible cobro de crédito que dice tener en contra de su representada, sino que simplemente "pedía" documentos.

Todo lo anterior, sumado al plazo de casi un año transcurrido entre agotamiento de esa medida y la presentación y notificación de la demanda, dejan más que en evidencia que el juicio y el cobro del supuesto crédito no eran la intención inmediata de la demandante. De lo contrario, habría accionado de manera más diligente o interpuesta derechamente una medida prejudicial precautoria (que hubiese sido rechazada por lo demás).

Por todos estos motivos, en el caso concreto ciertamente, la medida prejudicial preparatoria exhibitoria que rola en autos, no tiene el efecto interruptivo de esa prescripción en los términos del artículo 2518 en relación con el artículo 2503 N°1 del Código Civil.

Si miramos esto desde un punto de vista más genérico, tampoco sería aplicable que se permita que una medida prejudicial preparatoria interrumpa la



prescripción ya que ella no exige que el futuro actor deduzca efectivamente la demanda que pretende preparar, como si ocurre con las prejudiciales precautorias. Al respecto al Excmo. Corte Suprema ha resuelto en este sentido que *"la solicitud de citación al reconocimiento de firma y confesión de deuda, no es una demanda, sino el principio de una tramitación de carácter previo a una acción judicial, una verdadera medida prejudicial del juicio ejecutivo; y, por consiguiente, una gestión de esta naturaleza no basta para interrumpir la prescripción"*. (Bustos Gómez, Ricardo: La prescripción extintiva ante la jurisprudencia, Editorial Jurídica la Ley, Santiago, 2004, p.488-489, citando Corte Suprema, 02 de septiembre de 1938, R.D.J. 35, sec. 1ª, pág. 225, sent. 12 pág. 670; Corte Suprema, R.D.J. T.36, sec. 1ª, pág. 225; Corte 19 de diciembre 1979, F.M., sent. 5, pág. 453; Corte Suprema, 05 diciembre 1979, R.D.J. T. 76, sec. 4ª, pág.454)

Sostener lo contrario implicaría el absurdo e injusticia que cualquier pretendido acreedor, interponga en contra de su potencial deudor una medida prejudicial preparatoria para obtener una interrupción eterna de la prescripción -pues esa persona no se encuentra en la obligación de deducir la demanda propiamente tal-, lo que ciertamente repugna con los principios más elementales de nuestro ordenamiento jurídico, como lo es la sanción por abandono del procedimiento, creada precisamente para evitar este efecto.

Por lo que solicita tener por evacuado el trámite de la duplica, y con el mérito de lo expuesto rechazar la demanda interpuesta por AFC en contra de su representada, con expresa condenación en costas.

DUODECIMO: Que para acreditar los fundamentos de su demanda la parte demandante acompañó los siguientes elementos de prueba:

A fojas 502 y siguientes 1) certificado de posición N° 266029 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 25 de agosto de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, es titular de 591.439.641,0000 debentures BLAPO – F emitidas por Empresas La Polar S.A.; 2) Certificado de posición N° 266032 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 25 de agosto de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, es titular de 591.439.641,0000 debentures BLAPO –F emitidas por Empresas La Polar S.A.; 3) Certificado de posición N° 266030 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 25 de agosto de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, es titular de 4.526,0000 debentures BLAPO –G emitidas por Empresas La Polar S.A.; 4) Certificado de posición N° 266033 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 25 de agosto de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, es titular de 11.854,0000 debentures BLAPO --G emitidas por Empresas La Polar S.A.; 5) Certificado de posición N° 266028 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 25 de agosto de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, es titular de 14.469.100,0000 acciones NUEVAPOLAR emitidas por Empresas La Polar S.A.; 6) Certificado de posición



N° 266031 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 25 de agosto de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, es titular de 8.677.483,000 acciones NUEVAPOLAR emitidas por Empresas La Polar S.A.; 7) Copia simple de la acusación presentada ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, con fecha 23 de diciembre de 2013, en la investigación seguida en el proceso Rol único de causa N° 1100591305-7, en contra de don Pablo Alcalde Saavedra, doña María Isabel Farah Silva, don Julián Moreno de Pablo, don Nicolás Ramírez Cardoen, don Santiago Grage Díaz, don Martín González Lakl, don Pablo Fuenzalida May, doña Marta Bahamondes Arriagada y don Ismael Tapia Vidal, por los delitos de los artículos 59 letra a), 59 letra f) y 60 letra e) de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores; del artículo 157 de la Ley General de Bancos y el artículo 27 de la Ley N° 19.913; 8) Copia simple de la resolución exenta N° 86, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Pablo Fuenzalida May, gerente de informática y logística de Empresa la Polar S.A.; 9) Copia simple de la resolución exenta N° 85, de fecha 9 de marzo de 2012, dictada en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicó la sanción aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a doña María Isabel Farah, gerente de administración de Empresas La Polar S.A.; 10) Copia simple de la resolución exenta N° 83, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Pablo Alcalde Saavedra, gerente general de Empresas La Polar S.A.; 11) Copia simple de la resolución exenta N° 84, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Julián Moreno de Pablo, gerente productos financieros de Empresas La Polar S.A.; 12) Copia simple de la resolución exenta N° 87, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Nicolás Ramírez Cardoen, gerente general de la minorista local de Empresas La Polar S.A.; 13) copia simple de la resolución exenta N° 66, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a doña Marta Bahamondes Arriagada, gerente de gestión y desarrollo de Empresas La Polar S.A.; 14) Copia simple de la resolución exenta N° 354, de fecha 10 de septiembre de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó sanción de multa a don Martín González Lakl, gerente general de Empresas La Polar S.A.; 15) Copia simple de la resolución exenta N° 355, de fecha 10 de septiembre de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Santiago



Grage Díaz, gerente corporativo de finanzas de Empresas La Polar S.A.; 16) Copia simple del Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo Constituida en Especial Investigadora con Ocasión de la Crisis Financiera Provocada por las malas prácticas Crediticias de Empresas La Polar, de la Cámara de Diputados, del mes de junio del año 2011; 17) Informe económico y contable elaborado por don Horacio Arredondo Villalba de fecha 7 de agosto de 2015; 18) copia de escritura pública donde consta la personería para representar a Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., de fecha 3 de septiembre de 2013, otorgada en la Notaría de doña Nancy de la Fuente Hernández.

A fojas 1008 y siguientes se encuentra: 1) Copia simple del artículo denominado “El concurso de responsabilidades en derecho de daños chileno: defensa y delimitación de la teoría de la opción” de don Hernán Corral Talciani, publicado en AA.VV., Estudios de Derecho Civil V, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Concepción 2009, Abeledo Perrot, Santiago , 2010, pp. 639-653; 2) Copia simple de la sentencia definitiva dictada por la Primera Sala de la Excma. Corte Suprema con fecha 5 de julio de 2012, en los autos Rol de Ingreso N° 1009-2010; 3) Copia simple de la sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema con fecha 5 de junio de 2015, en los autos Rol de Ingreso N° 4390-2015; 4) Copia simple de la sentencia definitiva por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema con fecha 7 de enero de 2012, en los autos Rol de Ingreso N° 21636-2014; 5) Copia simple de Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo constituida en especial investigadora con ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de las Empresa La Polar, realizado con fecha 6 de octubre de 2011.

A fojas 1207 y siguientes solicito se tuvieran por acompañados documentación que fue presentada en el cuaderno de medida prejudicial : 1) Certificado de posición N° 256083 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 19 de enero de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, es titular de 1.776.898.900,0000 debentures BLAPO- F emitidas por Empresas La Polar S.A.; 2) Certificado de posición N° 255489 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 19 de enero de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra , es titular de 1.065.649.013,000 debentures BLAPO-F emitidas por Empresas La Polar S.A.; 3) Certificado de posición N° 255491 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 19 de enero de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, es titular de 0,5500 debentures BLAPO-G emitidas por Empresas La Polar S.A.; 4) Certificado de posición N° 256084 emitido por el Depósito Central de Valores con fecha 19 de enero de 2015, que da cuenta que Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, es titular de 0,2100 debentures BLAPO-G emitidas por Empresas La Polar S.A.

Documentos acompañados en el primer otrosí de la medida prejudicial de autos: 1) Copia simple de la resolución exenta N° 74, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de



Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Fernando Franke García; 2) Copia simple de la resolución exenta N° 86, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Pablo Fuenzalida May, gerente de informática y logística de Empresas La Polar S.A.; 3) Copia simple de la resolución exenta N° 80, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a doña María Gracia Cariola Cubillos; 4) Copia simple de la resolución exenta N° 81, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don René Cortázar Sanz; 5) Copia simple de la resolución exenta N° 85, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a doña María Isabel Farah, gerente de administración de Empresas La Polar S.A.; 6) Copia simple de la resolución exenta N° 83, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Pablo Alcalde Saavedra, gerente general de Empresas La Polar S.A.; 7) Copia simple de la resolución exenta N° 84, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Julián Moreno de Pablo, gerente productos financieros de Empresas La Polar S.A.; 8) Copia simple de la resolución exenta N° 79, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Jacques Louis de Montalembert; 9) Copia simple de la resolución exenta N° 87, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Nicolás Ramírez Cardoen, gerente general de la minorista local de Empresas La Polar S.A.; 10) Copia simple de la resolución exenta N° 65, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Rolando Harnish Salazar, subgerente de cobranzas de Empresas La Polar S.A.; 11) Copia simple de la resolución exenta N° 64, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Mario Pérez López, gerente de informativa de Empresas La Polar S.A.; 12) Copia simple de la resolución exenta N° 66, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por



infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a doña Marta Bahamondes Arriagada, gerente de gestión y desarrollo de Empresas La Polar S.A.; 13) Copia simple de la resolución exenta N° 73, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Andrés Ibáñez Tardel; 14) Copia simple de la resolución exenta N° 68, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a doña Lorena Concha, gerente de Clientes de Empresas La Polar S.A.; 15) Copia simple de la resolución exenta N° 71, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrado seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Juan Carlos Leiva, Subgerente de Empresas La Polar S.A.; 16) Copia simple de la resolución exenta N° 82, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Manuel Francisco Gana Eguiguren; 17) Copia simple de la resolución exenta N° 78, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Norberto Morita; 18) Copia simple de la resolución exenta N° 77, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.S., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Raúl Sotomayor Valenzuela; 19) Copia simple de la resolución exenta N° 76, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Heriberto Urzúa Sánchez; 20) Copia simple de la resolución exenta N° 75, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso de investigación seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de los directores de Empresas La Polar S.A., por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, aplicó la sanción de multa a don Baltazar Sánchez Guzmán; 21) Copia simple de la resolución exenta N° 70, de fecha 9 de marzo de 2012, dictado en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Valores y Seguros por infracciones a la normativa aplicable a los emisores de valores, aplicó la sanción de multa a don Jaime Ripoll Monsalve, contador General de Empresas La Polar S.A.; 22) Copia simple de la Audiencia de Formalización de fecha 14 de febrero de 2012, realizada ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT N° 6930-2011, en contra de don Julián Moreno de Pablo, don Pablo Alcalde Saavedra, doña María Isabel Farah Silva, don Santiago Grage Díaz, don Nicolás Ramírez Cardoen, por los delitos de obtención fraudulenta de créditos suministrando datos falsos y maliciosamente incompletos acerca de la real situación patrimonial de Empresas La Polar S.A. y en contra de don Iván Dinamarca Contreras por el delito de entrega de información maliciosamente falsa al mercado.



Reitera los documentos acompañados en el primer otrosí de la demanda, que ya fueron señalados en autos.

Acompaña en parte de prueba los siguientes documentos: 1) Copia simple de la sentencia definitiva dictada por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 25 de noviembre de 2004, en los autos Rol Único de causa N° 1401139661-6 y 1410038293-9 (ex 1100591305-7) y de su certificado ejecutoria; 2) Copia simple de la sentencia definitiva dictada por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 3 de septiembre de 2014, en los autos Rol Único de Causa N° 1100591305-7 y de su certificado de ejecutoria; 3) Copia simple de la sentencia definitiva dictada por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 18 de septiembre de 2015, en los autos Rol Único de Causa N° 1100591305-7 y de su certificado de ejecutoria; 4) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 9 de junio de 2011; 5) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresa La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 11 de junio de 2011; 6) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 13 de junio de 2011; 7) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 14 de junio de 2011; 8) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 16 de junio de 2011; 9) Copia simple de la comunicación de hecho esencia de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 17 de junio de 2011; 10) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 20 de junio de 2011; 11) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 21 de junio de 2011; 12) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 22 de junio de 2011; 13) Copia simple de la comunicación de hecho esencial de Empresas La Polar S.A., a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 30 de junio de 2011; 14) Copia simple de la Ficha Estadística Codificada Uniforme "FECU" de Empresas La polar S. A. del año 2006; 15) Copia simple de la Ficha Estadística Codificada Uniforme "FECU" de Empresas La Polar S.A., del año 2007; 16) Copia simple de la Ficha Estadística Codificada Uniforme "FECU" de Empresas La Polar S.A., del año 2008; 17) Copia simple de la Ficha Estadística Codifica Uniforme "FECU" de Empresas La Polar S.A., del año 2009; 18) Copia simple del Estado Financiero "EEFF" de Empresas La Polar S.A., del año 2010; 19) Copia simple del Estado Financiero "EEFF" de Empresas La Polar S.A. del año 2011; 20) Copia simple de la Sesión Extraordinaria N° 5 de Empresas La Polar S.A., de 28 de abril del año 2006; 21) Copia simple de la Sesión Extraordinaria N° 7 de Empresas La Polar S.A., de 11 de agosto del año 2006; 22) Copia simple de la Sesión Extraordinaria N° 8 de Empresas La Polar S.A., de 30 de octubre del año 2006; 23) Copia simple de la Sesión Extraordinaria N° 13 de Empresas La Polar S.A., de 13 de agosto del año 2008; 24) Copia simple de la Sesión Extraordinaria N° 19 de Empresas La Polar S.A., de 13 de agosto del año 2009; 25) Copia simple de la Sesión Extraordinaria de Empresas La Polar S.A., de 15 de marzo del año 2011; 26) Copia simple de la Memoria Anual de Empresas La Polar S.A. del año 2006;



27) Copia simple de la Memoria Anual de Empresas La Polar S.A. del año 2007;
28) Copia simple de la Memoria Anual de Empresas La Polar S.A. del año 2008;
29) Copia simple de la Memoria Anual de Empresas La Polar S.A. del año 2009;
30) Copia simple de Memoria Anual de Empresas La Polar S.A. del año 2010;
31) Copia simple del artículo del artículo de don Enrique Alcalde Rodríguez “La acción de reembolso contra los administradores societarios”, publicado el día viernes 21 de diciembre de 2012, en El Mercurio Legal; 32) Copia simple del artículo de don Alejandro Romero Seguel y don José Ignacio Díaz Villalobos “La Acción de Responsabilidad Civil del art. 133bis de la Ley de Sociedades Anónimas”, publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia Número 3-2002;
33) Copia simple de la página 6 de la Historia de la Ley N° 19.705 que agregó el artículo 133 bis a la Ley de Sociedades Anónimas, obtenido del portal de internet de la Biblioteca del Congreso Nacional www.bcn.cl; 34) Copia simple de la página 294 del libro de don Hernán Corral Talciani “Lecciones de responsabilidad civil extracontractual” Editorial Jurídica, año 2011; 35) Copia simple de la sentencia definitiva pronunciada por la Excma. Corte Suprema con fecha 29 de octubre de 2014, en los autos Rol de Ingreso N° 9303-2012; 36) Copia simple de las páginas 194 a 196 del libro de don Enrique Barros Bourie, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica, año 2007; 37) Copia simple de la sentencia definitiva pronunciada por la Excma. Corte Suprema con fecha 10 de noviembre de 10 de noviembre de 2014, en los autos Rol de Ingreso N° 1818-2014; 38) Copia simple de la sentencia definitiva pronunciada por el 17° Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol N° C-6554-2012, confirmado por la Ittma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 3 de septiembre de 2015, en los autos Rol de Ingreso N° 4192-2015; 39) Copia simple de la sentencia definitiva pronunciada pronunciada por la Ittma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28 de enero de 2014, en los autos Rol de Ingreso N° 4300-2012; 40) Copia simple de la sentencia definitiva pronunciada por la Ittma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 25 de mayo de 2015 en los autos Rol de Ingreso N° 5071-2014; 41) Copia simple del informe pericial “Análisis de Informes de Gestión y Estados Financieros Empresa La Polar”, elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile con fecha 31 de mayo de 2013; 42) Copia simple del informe pericial contable elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile con fecha 24 de junio de 2013; 43) Certificado de posición N° 288186, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fonos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, cuenta 29001006, era titular de 28.500,0000 debentures BLAPO –A emitidas por Empresas La Polar S.A.; 44) Certificado de posición N° 288187, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, cuenta 29001006, era titular de 71.500,0000 debentures BLAPO –B emitidas por Empresas La Polar S.A.; 45) Certificado de posición N° 288188, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, cuenta 29001006, era titular de 14.000,0000 debentures BLAPO – C emitidas por Empresas La Polar S.A.; 46) Certificado de posición N° 288189, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el



Fondo de Cesantía que administra, cuenta 29001006, era titular de 15.000,0000 debentures BLAPO – D emitidas por Empresas La Polar S.A.; 47) Certificado de posición N° 288190, del Depósito Central de Valores, que cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía que administra, cuenta 29001006, era titular de 43.000,0000 debentures BLAPO – E emitidas por Empresas La Polar S.A.; 48) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – A, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 49) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO –A1, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 50) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO –A2, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el periodo 01/06/13 al 30/06/13; 51) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – B, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 52) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – B1, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 53) Cartola de movimientos de posición instrumentos BLAPO –B2, cuenta 29001006, emitido por el depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 54) Cartola de movimientos de posición BLAPO - C, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 55) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO –C1, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 56) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – C2, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 57) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – D, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 58) Cartola de movimiento de posición instrumento BLAPO – D1, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/ 06/13; 59) Cartola de movimiento de posición instrumento BLAPO - D2, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 60) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – E, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 61) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – E1, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 62) Cartola de movimientos de posición instrumentos BLAPO – E2, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 63) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – F, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 64) Cartola de movimiento de posición instrumentos BLAPO –G, cuenta 29001006, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 65) Certificado de posición N° 288174, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que el 19 de enero de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía CIC, cuenta 31001005, era titular de 1.776.898.900,0000 debentures BLAPO – F emitidas por Empresas La Polar S.A.; 66) Certificado de posición N° 288175, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que el 19 de enero de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía CIC, cuenta



31001005, era titular de 0,2100 debentures BLAPO – G emitidas por Empresas La Polar S.A.; 67) Certificado de posición N° 288176, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que el 25 de agosto de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía CIC, cuenta 31001005, era titular de 591.439.641,000 debentures BLAPO – F emitidas por Empresas La Polar S.A.; 68) Certificado de posición N° 288177, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 25 de agosto de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía CIC, cuenta 31001005, era titular de 4.526,0000 debentures BLAPO – G emitidas por Empresas La Polar S.A.; 69) Certificado de posición N° 288179, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 25 de agosto de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía CIC, cuenta 31001005, era titular de 14.469.100,0000 acciones NUEVAPOLAR emitidas por Empresas La Polar S.A.; 70) Cartola de movimientos de posición instrumento NUEVAPOLAR, cuenta 31001005, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/02/15 al 28/02/15; 71) Cartola de movimientos de posición instrumentos BLAPO – F, cuenta 31001005, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/02/15 al 28/02/15; 72) Cartola en movimientos de posición Instrumento BLAPO –G, cuenta 31001005, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/02/15 al 30/04/15; 73) Cartola de movimientos de posición instrumentos BLAPO –H, cuenta 31001005, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/02/15 al 30/04/15; 74) Certificado de posición N° 288244, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario Que administra, cuenta 29003009, era titular de 17.500,0000 debentures BLAPO –A, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 75) Certificado de posición N° 288245, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S. A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 29003009, era titular de 444.000,0000 debentures BLAPO – B, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 76) Certificado de posición N° 288246, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 2900303009, era titular de 8.500,0000 debentures BLAPO – C, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 77) Certificado de posición N° 288248, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que el 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 29003009, era titular de 8.500,0000 debentures BLAPO – D, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 78) Certificado de posición N° 288249, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 29003009, era titular de 26.000,0000 debentures BLAPO –E, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 79) Cartola de posición N° 288480, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 1 de junio de 2011, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 29003009, era titular de 105.203,0000 acciones NUEVAPOLAR emitidas por Empresas La Polar S. A.; 80) Cartola de movimientos de posición instrumento LA POLAR, cuenta



29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/03/12 al 04/04/12; 81) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO –A, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el periodo 01/06/13 al 30/06/13; 82) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – A1, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 83) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – A2, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 84) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO –B, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 85) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – B1, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 86) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – B2, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 87) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – C, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 88) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – C1, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 89) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – C2, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 90) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – D, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 91) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – D1, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 92) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – D2, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 93) Cartola de movimientos de posición de instrumento BLAPO – E, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de



Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 94) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – E1, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 95) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – E2, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 96) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – F, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S. A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 97) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – G, cuenta 29003009, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/06/13 al 30/06/13; 98) Cartola de movimientos de posición instrumento NUEVAPOLAR, cuenta 31002001, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/04/15 al 30/04/15; 99) Certificado de posición N° 288180, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que el 19 de enero de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 31002001, era titular de 1.065.649.013,0000 debentures BLAPO – F, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 100) Certificado de posición N° 288181, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que la 19 de enero de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 31002001, era titular de 0,5500 debentures BLAPO –G, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 101) Certificado de posición N° 288182, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 25 de agosto de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario Que administra, cuenta 31..2001, era titular de 354.700.580,0000 debentures BLAPO –F, emitidos por Empresa La Polar S.A.; 102) Certificado de posición N° 288183, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 25 de agosto de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 31002001, era titular de 11.854,0000 debentures BLAPO – G, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 103) Certificado de posición N° 288185, del Depósito Central de Valores, que da cuenta que al 25 de agosto de 2015, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, cuenta 31002001, era titular de 8.677.483,0000 acciones NUEVAPOLAR, emitidos por Empresas La Polar S.A.; 104) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – F, cuenta 31002001, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el periodo 01/02/15 al 28/02/15; 105) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – G, cuenta 31002001, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de



Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/02/15 al 28/02/15; 106) Cartola de movimientos de posición instrumento BLAPO – H, cuenta 31002001, de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., para el Fondo de Cesantía Solidario que administra, emitido por el Depósito Central de Valores para el período 01/02/15 al 30/04/15; 107) Informe de precios de los instrumentos al 9 de junio de 2011 de la Superintendencia de Pensiones; 108) Informe de precios de los instrumentos al 29 de marzo de 2012 de la Superintendencia de Pensiones; 109) Informe de precios de los instrumentos al 19 de junio de 2013 de la Superintendencia de Pensiones; 110) Informe de precios de los instrumentos al 26 d junio de 2013 de la Superintendencia de Pensiones; 111) Informe de precios de los instrumentos al 27 de junio de 2013 de la Superintendencia de Pensiones; 112) Informe de precios de los instrumentos al 6 de febrero de 2015 de la Superintendencia de Pensiones; 113) Informe de precios de los instrumentos al 22 de abril de 2015 de la Superintendencia de Pensiones; 114) Informe de precios de los instrumentos al 31 de julio de 2015 de la Superintendencia de Pensiones; 115) Informe de precios de los instrumentos al 20 de septiembre de 2016 de la Superintendencia de Pensiones; 116) Oficio Ordinario N° 26276 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 11 de octubre de 2016 que informa los precios de los instrumentos BLAPO F, BLAPO G y BLAPO H para los día 6 de febrero y 31 de julio, ambos de 2015; 117) Copia simple de la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Empresas La Polar S.A., en contra de don Pablo Alcalde Saavedra, don Julián Moreno de Pablo, doña María Isabel Farah Silva, don Nicolás Ramírez Cardoen, don Pablo Fuenzalida May, don Santiago Grage Díaz y don Iván Dinamarca González, ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° 26.666-14.

DECIMO TERCERO: Que por parte de la demandada empresas La Polar S.A., en autos, a fojas 580 y siguiente acompaño copias de escrituras públicas donde consta personería para comparecer por Empresas La Polar S.A. de la Notaría de la don Sergio Jara Catalán, de fechas 15 de octubre de 2015y 19 de junio de 2015.

A fojas 601 y siguientes acompaño: 1) Copia de Informe en Derecho elaborado por el profesor Juan Esteban Puga Vial ; 2) Certificado del Depósito Central de Valores (“DCV”) que acredita que AFC no era dueña de ninguna acción de La Polar al día 28 de marzo de 2012.

A fojas 680 y siguientes presenta copia del Informe en Derecho elaborado por el Estudio de Abogados Caballero y Espada titulado “La legitimación de un accionista para demandar a la sociedad por los perjuicios indirectos sufridos a consecuencia de una conducta dañosa imputable a ciertos directores y ejecutivos principales”.

A fojas 794 y siguientes acompañan: 1) Copia de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de La Polar del 22.06.11; 2) Copia del Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de La Polar del 08.07.11

A fojas 1002 y siguiente acompaña: 1) Copia de escritura pública de contrato de emisión d Bonos correspondiente a la Serie F por monto fijo celebrado por La Polar como emisor y el Banco de Chile como representante de los



tenedores de bonos y como banco pagador de fecha 21.12.12, otorgada ante el Notario Público don Raúl Iván Perry Pefaur, bajo el repertorio N° 60.389, y sus respectivas modificaciones de fecha 21.03.13, 08.05.13, 28.05.13 y sus respectivos anexos; 2) Copia de escritura pública de contrato de emisión de Bonos correspondiente a la Serie G por monto fijo celebrado entre La Polar como emisor y el Banco de Chile como representante de los tenedores de bonos y como banco pagador de fecha 21.12.12, otorgada ante el Notario Público don Raúl Iván Perry Pefaur, bajo el repertorio N° 60.390, y sus respectivas modificaciones de fecha 21.03.13, 08.05.13 y 28.05.13.

A fojas 1004 y siguientes se presentó: 1) Copia de la querella criminal interpuesta por La Polar el 28.06.11 ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT N° 6930-2011, RUC N° 1100591305-7, en contra de don Pablo Alcalde Saavedra, don Julián Moreno de Pablo, doña María Isabel Farah Silva, don Nicolás Ramírez Cardoen, y en contra de todos los ejecutivos, empleados y/o directores de la Empresa, quienes resulten responsables de infracciones reiteradas al artículo 59 letra a) y f) de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y artículo 157 del D.F.L. N° 3 de 1997, que fija el texto sistematizado de la Ley General de Bancos, cometidos a partir del año 2005; 2) Copia de la ampliación de querella criminal por el delito de asociación ilícita interpuesta por La Polar con fecha 13.09.11 ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT N° 6930-2011, RUC N° 1100591305-7 en contra de Pablo Alcalde Saavedra, don Julián Moreno de Pablo, doña María Isabel Farah Silva, don Nicolás Ramírez Cardoen, don Pablo Fuenzalida May y en contra de todos los ejecutivos, empleados y/o Directores de la Empresa quienes resulten responsables; 3) Copia de la ampliación de querella criminal por el delito de administración fraudulenta interpuesta por La Polar con fecha 09.12.11, ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT N° 6930-2011, RUC N° 1100591305-7 en contra de don Pablo Alcalde Saavedra, don Julián Moreno de Pablo, doña María Isabel Farah Silva, don Nicolás Ramírez Cardoen, don Pablo Fuenzalida May, don Santiago Grace Díaz, y en contra de todos los ejecutivos empleados y /o Directores de la Empresa quienes resulten responsables; 4) Sentencia definitiva dictada por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago del 18.12.15 que acogió la querella criminal de La Polar y condenó a don Pablo Alcalde Saavedra, don Julián Moreno de Pablo, y doña María Isabel Farah Silva a cinco años de reclusión menor en su grado máximo y multa de 20 UTM; 5) Sentencia dictada por la Iltna. Corte de Santiago del 13.04.16 que confirmó la sentencia señalada en el numeral 4 anterior, en el Ingreso Corte N° 3943-2015; 6) Sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago del 03.09.14, que acogió la querella criminal interpuesta por La Polar y condenó a don Nicolás Ramírez Cardoen a la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo; 7) Sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago del 25.11.14, que acogió la querella criminal interpuesta por La Polar y condenó a don Pablo Fuenzalida May a la pena de dos años de reclusión menor en su grado medio; 8) Demanda de responsabilidad civil extracontractual interpuesta por La Polar en contra de don Pablo Alcalde Saavedra, don Julián Moreno de Pablo, doña María Isabel Farah Silva, don Nicolás Ramírez Cardoen, don Pablo Fuenzalida May, don Santiago Grace Díaz y don Iván Dinamarca Contreras, ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-26.666-2014, junto a la constancia de su notificación a los demandados.



A fojas 1010 y siguiente, acompañan: 1) Copia de Resolución Exenta N° 93 de fecha 18.04.12 emitida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que condenó a Price Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y Cía. Ltda. ("PWC") al pago de una multa de UF 4.500; 2) Copia de Resolución Exenta N° 063 de fecha 09.03.12 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros ("SVS") que condenó a PWC al pago de una multa de UF 8.000, y a su socio don Luis Joignant Pacheco al pago de una multa de UF 6.000; 3) Copia de la Resolución Exenta N° 258 de fecha 22.06 12 emitida por la SVS que condenó a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., al pago de una multa de UF 7.000. 4) Copia de la Resolución Exenta N° 259 de fecha 22.06012 emitida por la SVS que condenó a Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. al pago de una multa de UF 7.000.

A fojas 1012 y siguientes, se acompañaron: 1) Memoria anual 2013 emitida por Administradora de Fondos de Cesantía II S.A. ("AFC"); 2) Memoria anual 2014 emitida por Administradora de Fondos de Cesantía II S.A.; 3) Memoria anual 2015 emitida por Administradora de Fondos de Cesantía II S.A.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 744 y siguientes comparece a declarar don Horario Arredondo Villalba, quien expresa que declara porque le hizo un informe para la Administradora de Fondos de Cesantía, señala que si no se hubiera entregado información falsa no se hubiese ocasionado perjuicios, al consultado quien entregó esa información falsa, contesta que Empresas La Polar, al ser consultado por los estudios que tiene dice que es contador auditor de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, tiene un diplomado de especialización en finanzas de la misma universidad y un master in business administration, por la Universidad Adolfo Ibáñez y esta candidato a doctor in business administration, por la I.E. Business School, de Madrid, España, contesta que no ha convalidado su título profesional en Chile y que no tiene la calidad de perito judicial, en la página 4 de su informe se manifestó que "el objetivo del presente informe es, en otras palabras, cuanto deterioró el valor de los activos la fraudulenta actuación de los administradores de La Polar".

DECIMO QUINTO: Que la parte de Empresas La Polar S.A., rindió prueba testimonial al efecto comparece don Cesar Antonio Gálvez Tobar a foja 1022 y siguientes quien expresa que de profesión es abogado, señala que se desempeña como asesor de La Polar y que participo activamente en el proceso de reestructuración, con posterioridad al 2010 y en particular a las emisiones de bonos que se encuentran reguladas por la Ley 18.045 y en la norma N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Declara don Miguel Andrés Coddou Astrain, a fojas 1029 y siguientes, quien expresa ser abogado y trabaja en la continuidad de empresas La Polar S.A., asesorando en materia de emisiones de bonos. También comparece don Iván Harasic Cerri, quien señala ser abogado y dedicarse a materias civil, comercial y penal, asesora a Empresas La Polar S.A., en el llamado hecho esencial, en su concepto la actora no se encuentra legitimada para accionar en contra de Empresas La Polar S.A., porque dichas infracciones fueron cometidos por los ex ejecutivos de la Compañía, los cuales pudieron haber generado un perjuicio indirecto en los accionista encarnado en un dis valor de la acción. Concorre don Juan Pablo Philippi Prado, quien señala ser ingeniero comercial con mención en economía, expresa que en su experiencia el



informe elaborado por el Sr. Arredondo contiene serios errores tanto metodológicos como conceptuales, que el hecho esencial pudo haber incidido en el valor de los instrumentos de Empresas La Polar al 9 de junio de 2011, existen otros factores adicionales a los que se dieron a conocer en dicha declaración de hecho esencial que hubiesen influido en la variación de dicho valor.

DECIMO SEXTO: Que se llevó a efecto absolución de posiciones por parte de don Víctor Patricio Calvo Ebensperger, en su calidad de representante legal de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., a fojas 1186 y siguientes, quien expresa que los ejecutivos de La Polar entregaron al mercado y a los organismos reguladores información maliciosamente falsa, no específicamente a AFC Chile II, la administradora, debe tomar sus decisiones de inversión en base a información pública y bajo ninguna circunstancia puede hacerlo con otras fuentes de información.

DECIMO SEPTIMO: Que, hay peritaje que rola a fojas 1355 y siguientes de autos, que en sus conclusiones señala “Como se desprende de los antecedentes disponibles, los ilícitos cometidos por Empresas La Polar S.A., ocasionaron importantes perjuicios económicos a los fondos administrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

Al 31 de julio de 2015, el Fondo de Cesantía (CIC) presenta un perjuicio económico por la inversión en instrumentos financieros en Empresas La Polar S.A. por un monto de UF 176.648,8 y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) por un monto de UF 117.317,7.-

Los perjuicios económicos a ambos fondos totalizan UF 293.966,5 (doscientas noventa y tres mil novecientos sesenta y seis como cinco unidades de fomento)”. Después señala que para una mejor comprensión debe verse el cuadro 16, donde se ven reflejadas las pérdidas.

DECIMO OCTAVO: Que, la demandante Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II, solicita una indemnización de perjuicios, por responsabilidad extracontractual para lo cual hace una reseña que empresas La Polar S.A., está a cargo de su control la Superintendencia de Valores y Seguros, por ser una Sociedad Anónima abierta y también por la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras por las tarjetas de crédito que emite. Sostiene que su mayor valor estaba en la cartera crediticia, porque emitía bonos que colocaba en el mercado. Es así como después en el transcurso del tiempo a través de reclamos en el Sernac, en el año 2011, se fue conociendo lo que se llamó “refinanciamiento unilateral”.

Por todo esto cree tener la legitimidad activa para demandar, por los perjuicios a los Fondos que administra.

Respecto a la responsabilidad extracontractual que invoca, cita los artículo 1437 en relación con el artículo 2314 ambos del Código Civil, en su concepto se dan los requisitos copulativos que son: 1° acción u omisión culpable o dolosa; 2° El daño a la víctima; 3° relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido; y 4° Capacidad legal del autor.



Por lo que solicita, en razón de lo expuesto, que en la especie se cumplen todos los requisitos para que proceda la indemnización de daño y perjuicios, y se condene a la demandada al pago de 307.500 Unidades de Fomento, equivalentes al 31 de julio de 2015 a \$ 7.714.113.083 (siete mil setecientos catorce millones ciento trece mil ochenta y tres pesos), según el siguiente detalle:

- a) 301.542 Unidades de Fomento equivalente a \$ 7.564.657.506.-, (siete mil quinientos sesenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos seis pesos) al 31 de julio de 2015, por concepto de perjuicio patrimonial causado al Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario administrados por Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., según el detalle ya indicado en el N° 2 del Capítulo II de esta presentación, o la cantidad que el Tribunal en derecho se sirva fijar.
- b) 5.957 Unidades de Fomento equivalente a \$ 149.445.026.-, (ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil veintiséis pesos) al 31 de julio de 2015, por concepto de perjuicio patrimonial causado al Fondo de Cesantía Solidario administrado por Sociedad Administradora de fondos de Cesantía de Chile II S.A., respecto de las acciones de Empresas La Polar S.A., según el detalle indicado en el N° 2 del Capítulo II de la demanda o la cantidad que el Tribunal en derecho se sirva fijar.
- c) Intereses, reajustes y costas.

DECIMO NOVENO: Que, en su contestación a fojas 601 y siguientes Empresas La Polar S.A., solicita el rechazo de la demanda, por las razones que expone: 1) la demandante en su calidad de ex accionista solo tienen las acciones que le concede el artículo 133 bis) de la Ley de S.A.; 2) Porque como tenedora de bonos, emitidos por la demandada, solo cabe invocar la responsabilidad contractual; 3) Que la demandada no ha cometido ningún hecho ilícito, que pudiese originar responsabilidad extracontractual.

En forma subsidiaria: 1) En subsidio porque no ha existido hecho ilícito de responsabilidad extracontractual que le pueda imputar la demandante; 2) Que no existe ninguna relación de causalidad entre los perjuicios demandados por la demandante y su actuar; 3) Porque no existen perjuicios que deban ser indemnizados; 4) La acción de responsabilidad extracontractual esta prescrita.

Explica su origen que primeramente era una sastrería y después termino siendo una tienda por departamentos, con tarjetas de crédito. Agrega que existieron renegociaciones unilaterales entre los años 2006 a 2011.

Con posterioridad Empresas La Polar S.A., logro un acuerdo con sus accionistas y acreedores obteniendo la aprobación prácticamente unánime de un Convenio Judicial Preventivo y posteriormente un aumento de capital, el cual permitió su viabilidad, ahí recibieron sus acreedores bonos de las Series F y G, señala que entre los acreedores incluidos los demandantes aceptaron esta realidad, todo ello para que la empresa no quebrara, como podían haberlo solicitado y obtenido.



Es así como Empresas La Polar S. A., en el mes de junio de 2011, se interpuso una querrela criminal en contra de Pablo Alcalde Saavedra, Julián Moreno de Pablo, María Isabel Farah Silva, Nicolás Ramírez Cardoen en contra de quienes resultaren responsable de las infracciones a los artículos 59 letra a) y f) de la Ley de Mercado de Valores y el artículo 157 de la Ley General de Bancos. Posteriormente esta querrela fue ampliada en julio de 2011, en contra de Pablo Fuenzalida May e Iván Dinamarca Contreras, para finalmente en septiembre de 2011, se presentó una segunda ampliación ahora en contra de los señores Alcalde, Moreno, Farah, Ramírez y Fuenzalida por el delito de asociación ilícita. También inició procesos judiciales en contra de la auditora externa PWC, como de las clasificadoras de riesgo que calificaron los títulos y solvencia de La Polar durante los últimos años, Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitcha Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

Por último, y en lo que respecta a los ex ejecutivos que tuvieron responsabilidad en los ilícitos y/o negligencias cometidas, su representado también interpuso las pertinentes acciones civiles indemnizatorias.

En cuanto a la demanda de AFC, señala tener bonos serie F y G de la compañía La Polar, reitera que estos fueron entregados a los acreedores de La Polar con posterioridad a la aprobación del referido Convenio Judicial Preventivo, en consecuencia esos bonos se emitieron a partir de la extraordinaria situación patrimonial de la compañía.

Excepciones y Defensas que se oponen a la demanda.

- a) Carece de legitimación activa para dirigirse en contra de la entidad emisora de las acciones de las cuales fue titular, debiendo haberse dirigido las acciones en contra de las sociedades clasificadoras de riesgo y de los ex ejecutivos de La Polar S.A.

Es un caso de responsabilidad personal de los ejecutivos, así debe entenderse.

- b) La demandante, en su calidad de ex tenedora de bonos de La Polar, debió haber demandado bajo el estatuto de la responsabilidad contractual y no lo hizo.

Porque ello corresponde al respectivo contrato de emisión de bonos. El mejor ejemplo de ello es el artículo 118 de la Ley de Mercado de Valores, que se refiere a la aceptación por parte de los tenedores de lo establecido por el emisor en el contrato de emisión, en conjunto con el representante de los tenedores de bonos, por el solo hecho de haber suscrito un bono se entiende que ratifica todo lo estipulado.

- c) En subsidio, en la especie La Polar no cometió ningún hecho ilícito.

En consecuencia, La Polar no ha cometido ningún hecho ilícito respecto de AFC que sea apto para generar la responsabilidad extracontractual alegada por ésta.

- d) En subsidio, no existe relación de causalidad entre los perjuicios demandados y el hecho ilícito que supuestamente habría cometido La Polar.



Para determinar que daños son consecuencia de tales o cuales hecho demandados, debiendo distinguir los hechos que guarden una adecuada relación de proximidad con los supuestos daños y que a la vez tengan la aptitud potencial para producirlos.

e) En subsidio, inexistencia de Perjuicios.

Controvierten expresa y formalmente la existencia de todos y cada uno de los perjuicios que la demandante detalla en su libelo.

f) En subsidio, la acción se encuentra prescrita.

Según lo establece el artículo 2332 del Código Civil, señala que las acciones prescriben en cuatro años desde la perpetración del acto dañoso. No pudiendo estimarse que la presentación de la medida precautoria haya interrumpido la prescripción, porque es una gestión diferente al juicio propiamente tal.

En todos los casos el rechazo de la demanda debe ser con expresa condena en costas.

VIGESIMO: Que, tanto en la réplica como en la dúplica las partes reiteraron sus argumentos.

VIGESIMO PRIMERO: Que, la demandante ha deducido la acción basada en que debe aplicarse la responsabilidad extracontractual señala que al efecto se dan todos y cada uno de los requisitos para hacerla efectiva.

Respecto a la responsabilidad extracontractual, esta sentenciadora estima que no opera en el caso de autos, considerando que la responsabilidad en los hechos se genera a través del estatuto de responsabilidad contractual, ha de tenerse presente que la demandante, tenía bonos emitidos por la Empresas La Polar S.A.

Se estima que la demandante tenía la legitimidad activa para demandar a Empresas La Polar S.A.

La prescripción que alega la parte demandada no se ha verificado ya que desde que se interpuso la demanda, desde la medida precautoria preparatoria, no han transcurrido al efecto cuatro años.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, se estima que hubo perjuicio para la demandante Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., los cuales ocurrieron por el manejo que tuvo Empresas La Polar S.A., a manos de su plana gerencial, la cual fue recibió sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros por diversos montos, y condenas en el orden penal, que fue necesario determinar el monto de dichos perjuicios, que se realizó un peritaje contable el que señala que hubo pérdidas, para la demandante.

VIGESIMO TERCERO: Que, en autos existe un peritaje para determinar el monto de los perjuicios que sufrió la demandante que dicha pericia se pronuncia por un espacio de tiempo más allá del necesario, porque señala hasta la fecha del peritaje los perjuicios que habría sufrido la demandante. Por lo que se estima que en la etapa de cumplimiento del fallo, deberá determinadamente el monto de los



perjuicios realmente que fue objeto de demandante por los dependientes de Empresas La Polar S.A.

VIGESIMO TERCERO: Que, atendido lo resuelto precedentemente, cada parte pagara sus costas.

Y, de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 144, 170, 254, 280, 358 N° 6 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil; artículos 2314, 2320, 2322, 2332, 2518, 2503 N° 1, 2518 y demás pertinentes del Código Civil; artículo 56. 133,165 y demás pertinentes de la Ley 18.045 Ley de Mercado de Valores; artículos 31, 42, 46, 50, 50 bis, 133 bis y demás pertinente de la Ley 18.046 Sobre Sociedades Anónimas, **SE DECLARA:**

a) Que se rechazan las tachas opuestas en contra de los testigos Horacio Arredondo Villalba de fojas 744 y siguientes; Cesar Antonio Gálvez Tobar de fojas 1022 y siguientes; Miguel Andrés Coddou Astrain de fojas 1029 y siguientes; Juan Pablo Philippi Prado de fojas 1040 y siguientes;

b) Que se acoge la demanda de fojas 502 y siguientes solo en cuanto se condena a Empresas La Polar, a indemnizar los perjuicios efectivamente sufridos por la demandante, monto que se determinara en la etapa de cumplimiento del presente fallo.

c) Que cada parte pagara sus costas.

Dictada por doña Gabriela Silva Herrera, Juez Titular.-

Dictada por doña María Elena Lagos Parisi, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, **veinticinco de Mayo de dos mil dieciocho.**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 13 de mayo de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>